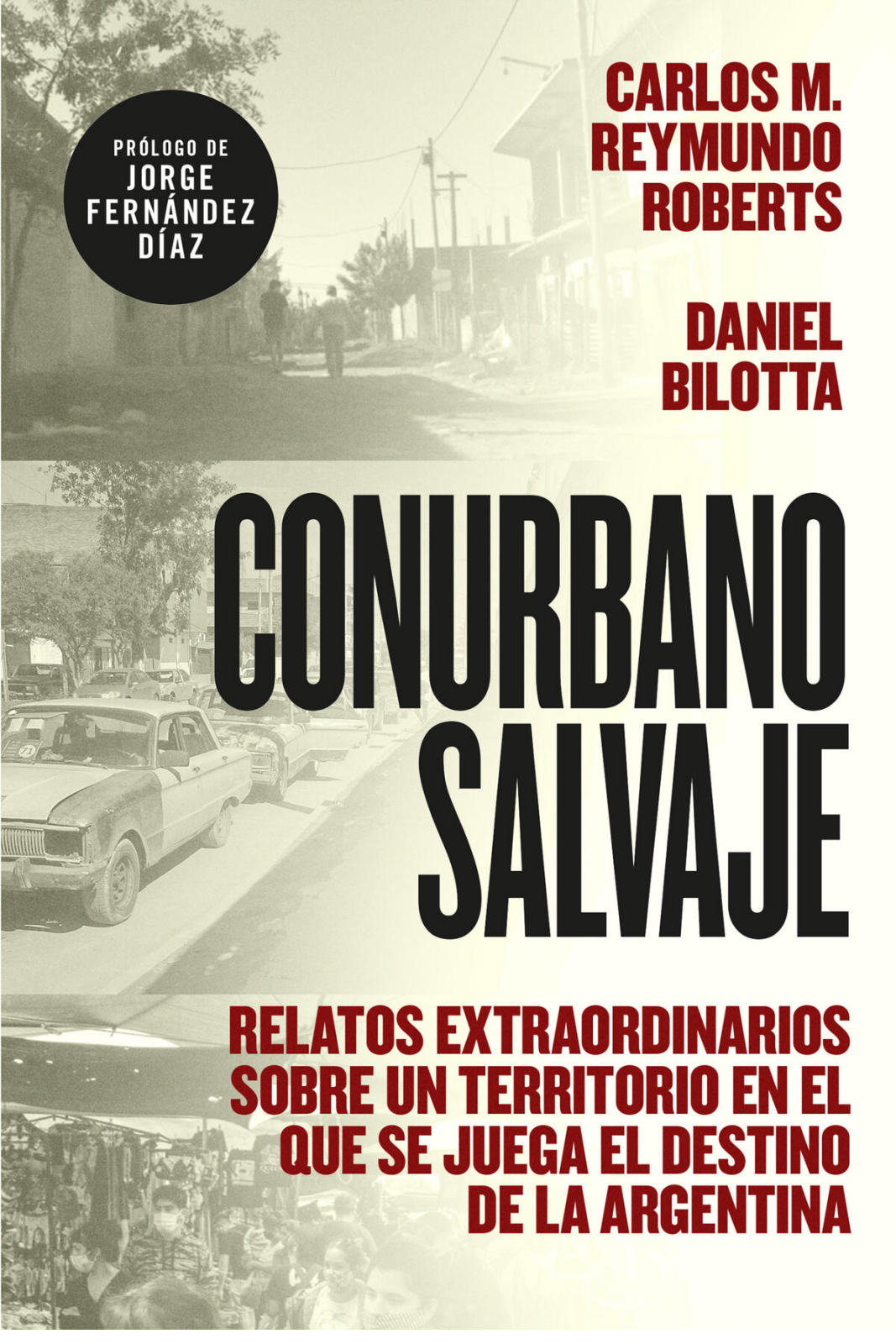


PRÓLOGO DE
JORGE
FERNÁNDEZ
DÍAZ

CARLOS M.
REYMUNDO
ROBERTS

DANIEL
BILOTTA

CONURBANO SALVAJE

RELATOS EXTRAORDINARIOS SOBRE UN TERRITORIO EN EL QUE SE JUEGA EL DESTINO DE LA ARGENTINA

CARLOS M.
REYMUNDO
ROBERTS

DANIEL
BILOTTA

CONURBANO SALVAJE

RELATOS EXTRAORDINARIOS SOBRE UN TERRITORIO EN EL QUE SE JUEGA EL DESTINO DE LA ARGENTINA

SUDAMERICANA

A mis cuatro hermanas, María Marta, María Inés,
María Isabel y María Ana.
Jamás encontraré lectoras más generosas e
incondicionales.

CARLOS M. REYMUNDO ROBERTS

A todos los que, con su afán de superación,
luchan en el conurbano para ser reconocidos como
ciudadanos de pleno derecho.

DANIEL BILOTTA

PRÓLOGO
por Jorge Fernández Díaz

Dice Manuel Vicent que si Dickens viviera sería reportero. No se trata de una hipérbole, sino de una aguda observación literaria: el gran género que registra fielmente nuestro tiempo y del que sin duda se servirán los historiadores del futuro para comprender mejor nuestras actuales desventuras ya no será la novela decimonónica, sino la crónica pura y verídica de los hechos.

Daría para discutir mucho sobre esta hipótesis, pero aquí se la alude al solo efecto de definir con precisión técnica *Conurbano salvaje*, esta extraordinaria inmersión periodística, este cuadro esclarecedor y estremecedor que se lee como una novela social y que dos veteranos reporteros argentinos entregan a las librerías: su corpus constituye —verán— una obra imprescindible para comprender cabalmente este país en caída libre. Porque el área que estos dos lúcidos habitantes del conurbano, Carlos M. Reymundo Roberts y Daniel Bilotta, eligen para su investigación y su vasta pintura, condensa y explica como ninguna otra las razones de la decadencia nacional.

Con todas las críticas que se le pueden hacer al Perón original, que se inspiró claramente en el formato de Mussolini "aunque sin sus errores" —como el susodicho se jactó una vez frente a la comunidad italiana de los años 40—, no se lo podría sin embargo acusar de no haber intentado erigir un modelo que fortaleciese el Estado e instaurase el orden, el trabajo y la justicia social. Cuando uno acaba de leer este gran libro periodístico, este fresco impiadoso e inolvidable, confirma que los herederos del General se convirtieron en lo que combatían, y que construyeron en el conurbano bonaerense un Estado completamente fallido, donde la escuela quedó herida de muerte, la salud pública fue detonada y la seguridad es apenas una broma macabra gracias a un abolicionismo militante, una criminal opción por

los delincuentes, la gestión de una policía gansteril a la que le han entregado el poder y la connivencia con una serie de organizaciones narco, a las que les cedieron por acción u omisión el territorio y la iniciativa.

El peronismo post mortem consiguió así el desorden más absoluto, devastó la cultura del trabajo, generó una pobreza galopante y condenó a media población activa a subsistir en la economía en negro, algo que retrotrae las más básicas conquistas sociales a décadas infames. Probablemente, si aquel Perón original viviera, estaría ahora mismo anonadado frente a la obra maestra del terror que crearon sus propios muchachos, muchos de los cuales han tenido además la precaución de volverse millonarios mientras promovían las banderas del pobrismo. Se trata de uno de los fracasos más flagrantes y estrepitosos de la historia política moderna. Y en estas páginas se narran, con anécdotas puntuales y con frialdad profesional, los personajes oscuros y luminosos que pueblan ese complejo entramado.

Bilotta, un baqueano natural de este verdadero "continente perdido", y Reymundo Roberts, un cronista minucioso y asombrado, se unen para trazar la topografía de un fenómeno que causa espanto y preocupación, y de a ratos, una comicidad involuntaria. Retratan una tierra hostil formada por diversas comunidades con culturas a veces antagónicas, que es el reino de la desigualdad, y donde campean la improvisación constante, la tendencia al caciquismo y la desmesura, y donde las leyes fácticas se imponen a las formales.

Los hallazgos de estos rastreadores provocan sorpresa porque los medios de comunicación nacionales han dado históricamente la espalda a ese otro país, lo cubren desde lejos y no suelen llevar un registro diario de sus anomalías. Sin el foco constante y la denuncia mediática, se han ido naturalizando allí prácticas incompatibles con un estado de derecho.

Estamos hablando de un universo de aproximadamente diez millones de personas, y de una región que resulta crucial en cualquier elección; también, el bastión simbólico y operativo del justicialismo. En algunos de los confines del conurbano, el clientelismo y el adoctrinamiento han sido tan sistemáticos que resulta "inconcebible no ser peronista", como demuestran los autores. Fase superior del

populismo feudal: reducir el electorado a servidumbre, convertir a la víctima en dependiente de su propio verdugo. Que con sus desastrosas políticas económicas y sociales la condenó a la miseria, pero que a la vez se mantuvo cerca para "salvarla" eventualmente de la inanición final con limosnas y recoger de ese modo su respaldo el día D en las urnas. Si algo queda claro es que la cacareada "industrialización kirchnerista" de los últimos veinte años es una mentira patética, y que toda esta metodología regresista y trucha nada tiene que ver con la palabra "progresismo"; más bien se parece sospechosamente al viejo y rancio conservadurismo bonaerense, tan reconocido por sus metodologías mafiosas.

Esta fundamental narración de los reporteros no cae en amaneramientos del lenguaje, tampoco tiene vocación de estilo, pero logra con una brillante austeridad mantenernos atrapados en nuestras sillas de lectores perplejos, mientras por sus páginas se deslizan las palabras "patotas", "cartón", "golpizas", "hambre", "negociados", pero también "abnegación", "solidaridad", "empeño", "superación" y "esperanza".

Este libro quedará en nuestra memoria por mucho tiempo.

AQUELLA TIERRA PROMETIDA
por Carlos M. Reymundo Roberts

El conurbano bonaerense es un territorio irredento.

Enorme, superpoblado, pobre, desigual, feroz… y, además, irredento: lleva más de cuarenta años de declinación, de sistemáticas penurias, sin que nadie atisbe a rescatarlo.

Podría decirse que todo allí lleva el signo de la desmesura. Cuando su proceso de industrialización atrajo a gente de todo el país y del exterior, a comienzos del siglo pasado, surgieron decenas de barrios en torno de las grandes fábricas. Lo que hoy es sinónimo de marginalidad, inseguridad y decadencia en aquel tiempo era, para muchos, la tierra prometida, un imán irresistible gracias a la oferta laboral, la vastedad del espacio y, claro, la cercanía con la gran urbe, la Capital Federal.

Así, fue desparramándose como "una mancha de tinta en un papel", según la caracterización del sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga, doctor en Ciencia Política y uno de los mayores estudiosos del conurbano (compilador, junto a Lucas Ronconi, del libro *Conurbano infinito*; 2016, Siglo Veintiuno Editores). Se trató de una expansión caótica, sin previsión ni límites; una ingeniería social al revés: no eran planes, diseños o estrategias los que impulsaban el fenómeno, sino desplazamientos incontrolados de masas.

Mientras esas fábricas producían a tambor batiente y requerían mano de obra, y el Estado se hacía presente con escuelas, hospitales y policías, el shock poblacional no tenía todavía niveles de estrés; sí aparecían síntomas de que se estaba gestando una región de características muy particulares, por la diversidad de origen de sus habitantes —llegados de geografías y culturas diferentes—, por los niveles de densidad demográfica que se iban alcanzando y por las bases económicas poco sustentables de ese dislocado crecimiento.

Como es sabido, el escenario viró hacia el drama con el virulento

proceso de desindustrialización de los años ochenta: decenas de plantas cerraron sus puertas. Al volar por los aires la matriz productiva que había gestado los nuevos conglomerados, sin otro modelo que la reemplazara, millones de personas se vieron, casi de un día para otro, virtualmente abandonadas. La tierra prometida devino en infierno: faltaba empleo, se degradó la calidad de vida, afloró la informalidad y el delito, llegó el narcotráfico (con la complicidad activa de la policía); se multiplicaron exponencialmente las villas, asentamientos y rancheríos —solo en La Matanza hay hoy más de ciento cincuenta—, a los que siguieron viniendo oleadas de inmigrantes del interior y también de países vecinos cuya situación era incluso peor que la de la Argentina. La crisis arrastró al sistema educativo y al de la salud pública, que se vieron desbordados, y la planificación urbana, la organización del territorio.

En buena parte, hija de esa catástrofe económica y social es también la degradación de la política en el Gran Buenos Aires, un proceso que tan bien nos describe, en las estremecedoras historias que relata en este libro, Daniel Bilotta. Clientelismo, barones, punteros, compra de votos, trampas electorales, contubernios, mafias… La política allí suele discurrir por caminos sinuosos, oscuros, inconfesables.

Cualquiera que se acerque al conurbano verá que su otro sello indeleble es la desigualdad: barrios miserables conviven —en ocasiones, pared de por medio— con exclusivos *countries*; de un lado, apretujados ranchos o casillas a merced del clima, de desahuciados y de narcos; del otro, enormes chalets con parques, pileta, laguna, instalaciones deportivas y seguridad privada. El contraste es tan brutal que estremece; al mismo tiempo, no es menos llamativa la pacífica vecindad entre realidades diametralmente opuestas.

Al comparar otros parámetros aparecen diferencias que resultan no tan estridentes, pero igualmente oprobiosas: vivir sobre una calle asfaltada o sobre una de tierra (o sendero); tener agua corriente, cloacas y luz eléctrica, o no tener nada de eso; que por el barrio pasen colectivos o estar obligado a caminar treinta cuadras; que el terreno sea propio, de titularidad precaria o producto de una ocupación; que la casa sea de material o de lo que se fue encontrando por allí; con techo y piso, o como Dios la trajo al mundo; con baño o con pozo; que

haya una escuela cerca o que esté tan lejos que es imposible llevar a los chicos; tener trabajo o no tenerlo; empleo formal o en negro; estar a tiro de alguna ONG u organización social, o en el más absoluto desamparo.

La desigualdad más irritante: algunos intendentes no viven en sus distritos, sino en pisos de Puerto Madero que valen millones de dólares. “Nos mudamos acá por la inseguridad”, justificó hace unos años el hombre fuerte de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Tan irredento es el conurbano que hasta carece de cifras confiables. De muchos partidos no pueden conocerse, porque no los hay, se ocultan o son distorsionados, los datos más elementales sobre, por ejemplo, extensión de las redes de servicios públicos, porcentaje de calles asfaltadas, cantidad y distribución de cámaras de seguridad, finanzas de los municipios, número real de empleados de los municipios, índices de criminalidad… incluso sobre la cantidad de pobladores surgen dudas o razonables sospechas. Alguna vez pedí al gobierno de María Eugenia Vidal datos como esos para una nota que estaba haciendo, y prometieron buscármelos. Dos semanas después, al insistirles, me contestaron: “Imposible, no encontramos nada. Cuando llegamos, esto era tierra arrasada. Por ejemplo, recién ahora hicimos un censo para saber cuántas escuelas y cuántos alumnos hay en la provincia. ¡Ni eso se sabía!”.

El número de villas y asentamientos precarios del GBA, cerca de mil hace seis años, no se conoció gracias a un relevamiento del Estado, sino a una investigación de la ONG Techo, dedicada a combatir la pobreza.

Mi trabajo en *La Nación* me llevó a recorrer extensamente el conurbano. Siempre conmueven sus tragedias, que saltan a la vista, pero también resulta ejemplar el heroísmo silencioso de su gente. Decir que es un monstruo de mil cabezas no le hace justicia: la realidad es más vasta, más compleja, no asimilable si no se repara en sus señas particulares y en los calvarios que atraviesa desde hace tanto tiempo.

Lo que más me llamó la atención en esas andanzas fue descubrir historias increíbles, fenómenos sorprendentes, cosas que, puede decirse, probablemente solo ocurren allí. Una escuela en General

Pacheco invadida durante años por sus vecinos para jugar al fútbol, usar sus duchas, hacer asados, refrescarse en el tanque de agua y poner a pastar caballos. En Laferrere, los 0,50, sistema informal de traslado de pasajeros en autos viejos y destartalados, no autorizados para circular, que es el rey del transporte en el distrito, defendido incluso por las autoridades municipales. En Ciudad Celina (antes, Villa Celina), el mayor enclave boliviano del país, donde en la calle se habla aymara y quechua, se venden hojas de coca y los locales facturan más que en el Once y en la avenida Santa Fe. En Solano, límite entre Quilmes y Almirante Brown, "La feria del robado", treinta cuadras recorridas por multitudes para comprar, a muy buenos precios, todo lo que produce el mundo del delito y de la falsificación, desde ropa, alimentos y herramientas hasta celulares, motos y autos. En la confluencia de tres de las villas más siniestras de La Matanza, el mayor programa social y asistencial del país, promovido por un cura villero que jugó al fútbol en River y en San Lorenzo, es amigo del Papa y tiene pinta de galán de cine. En el submundo del narcotráfico, las peripecias de un intendente peronista que quiso hacerle frente y la policía le hizo saber que más le valía ocuparse de sus cosas.

De estas historias me fui enterando a través de los años, pero, en su mayor parte, no constituían el foco central de los temas sobre los que estaba escribiendo; por eso, en los artículos hacía referencia a ellas casi de soslayo, sin extenderme: tenía la convicción de que algún día iba a ocuparme de encararlas, trabajarlas y publicarlas. Ese día llegó en el segundo semestre del año pasado, cuando empezó a gestarse este libro. Al mismo tiempo, resultaba obvio que, para tener un panorama más completo, con el universo de esas historias no alcanzaba: nada o casi nada pasa en el GBA sin que, por lo que hace o deja de hacer, la política reclame su cuotaparte de protagonismo y responsabilidad.

Invité entonces a Daniel Bilotta, uno de los periodistas que más conocen el conurbano (en el que vive desde que nació), a compartir el libro. Me honra que haya aceptado, y le estoy agradecido porque trabajando a su lado pude aprender muchísimo de una región en la que también vivo; él en el sur y yo, en el norte, desde hace treinta años. Columnista de *La Nación* y del programa "Odisea Argentina", de LN+, que conduce Carlos Pagni, Daniel desarrolló su *expertise* durante

años caminando el territorio, hablando con las más diversas fuentes, entrándole a la política por arriba y por abajo, y volcando ese caudal informativo con rigor e independencia.

Este *Conurbano salvaje* contado a través de historias políticas, económicas, sociales y personales es vivencial, testimonial, no académico. No es un ensayo, tampoco estrictamente una investigación, sí un fresco o una sucesión de imágenes que conforman, creemos, un retrato fiel.

Nos encantó hacerlo. Esta tierra merece ser conocida.

Un territorio en disputa
por Daniel Bilotta

Carlos M. Reymundo Roberts acredita experiencia como corresponsal en América Latina. Una tarea que cumplió también cuando fue destacado en dos frentes de guerra: la del Golfo Pérsico (1991) y la de Ecuador-Perú (1995). Es probable que de forma inconsciente se haya propuesto cumplir con la misión que le faltaba en ese rol. Cubrir, y descubrir, el conurbano. Una tierra plagada de incógnitas del otro lado de la avenida General Paz.

Recuerdo que, cuando me propuso ser parte de esta experiencia literaria y periodística, no era mi mejor día. Un rato antes había sido interferido mi teléfono celular. Bastante enceguecido por la furia de ese episodio, no terminaba de comprender qué podía aportarle. Rechazo ser un experto en el conurbano. Solo soy alguien nacido y criado en ese lugar, de contacto frecuente —tal vez frondoso— con su intimidad cotidiana.

En medio de aquel torbellino, recordé historias de las que había sabido por algunas fuentes y que llamaron mi atención por sus fuertes contrastes. Los aparentemente compelidos por la ley a ser justos no lo eran tanto, y los que, desde un prejuicio bastante extendido, podrían ser vistos como los que eligen estar al margen de la ley no desean otra cosa que ser reconocidos dentro de ese orden.

Tuve que volver a ellas con rigor informativo. De todos esos casos tenía solo versiones parciales. Rastreé a sus protagonistas y cotejé con ellos cuánto había de ciertas y hasta dónde podían ser parte de la imaginación de quienes me las habían contado. La mayoría tienen a los alrededores del río Matanza-Riachuelo como lugar común.

Por un rasgo cultural inherente a la fundación de Buenos Aires, los barrios que aparecen aquí se asentaron en las zonas cercanas a fuentes naturales de agua. Aunque, en este caso, ahora estén contaminadas.

Pero también es uno de los pocos ríos donde se asume, por costumbre, que nadie es sancionado por volcar desechos. Por lo general, los terrenos que se ocuparon fueron los más cercanos a las orillas porque son los que quedaron alisados por los cíclicos desbordes.

La práctica iniciada a fines del siglo XIX por quienes trabajaban en los mataderos de esa región fue recuperada a mediados del XX por aquellos que necesitaban tener un techo propio y no podían comprarlo ni tampoco costear un alquiler. Sobre esas tierras de casi nulo valor inmobiliario en aquel momento se fueron constituyendo las denominadas “villas”, donde, por supuesto, escasea el agua potable y no hay cloacas.

Esa lógica aluvional fue perfeccionada después por quienes percibieron la oportunidad de montar un emprendimiento comercial sobre la urgencia de millares de desposeídos. Se encargaron de organizar las ocupaciones e, incluso, vendieron tierras fiscales o de terceros sin ningún tipo de autorización legal para hacerlo.

El crecimiento poblacional y económico combinado con el destino de megalópolis que parece aguardar a Lomas de Zamora le hizo cobrar a esas tierras otro valor comercial y político. Allí habita casi el 40% de los electores de ese partido, que tiene casi 800.000 habitantes, según el último censo. Ese fenómeno es común a toda la periferia del Gran Buenos Aires y en él reside la importancia que cobra ese conglomerado en cada comicio.

En el conurbano viven dos tercios del total de los que votan en la provincia de Buenos Aires, que, a la vez, contiene a casi el 40% del total de electores de todo el país. Desde otra perspectiva, esos casi diez millones de personas ocupan y viven en una extensión de casi 13.000 kilómetros cuadrados. Es menos del 5% de la superficie total de la provincia de Buenos Aires: 307.571 kilómetros cuadrados.

Quienes viven a las orillas del río suelen trabajar en áreas de servicios de la ciudad de Buenos Aires, de la que están muy cerca en un sentido estricto. Tanto que muchos de ellos ni siquiera conocen el microcentro del distrito en el que viven. Tampoco su palacio municipal. Su vínculo con esa jurisdicción es casi inexistente. Pero cobra vida a raíz de la disputa entablada con sus autoridades por la legitimidad de sus derechos sobre esas tierras.

El municipio se empeña en demostrar que su presencia es irregular, y quienes están allí, en justificar lo contrario. La idea del consenso ligada al espíritu del Estado dentro del sistema democrático pasa a convertirse en una utopía en esta situación. Esas tensiones permiten descubrir gestos maravillosos, y otros, no tanto. Ese es el atractivo que despertaron. Y la razón para contarlas.

Algunas siguen apareciendo mientras estamos terminando este libro. Vale la pena referirse someramente a una: La chanchería. Un predio abandonado que recibió ese nombre porque mientras estuvo activo se dedicó a la cría de ganado porcino. Una vez que quedó vacío fue ocupado. Se ubica próximo al complejo deportivo que el Club Atlético Los Andes tiene en Villa Albertina. Uno de los parajes descriptos para llegar al barrio Nueva Esperanza (capítulo 4).

Como todos en esa zona, sus habitantes están expuestos a la inseguridad y al robo de sus pocas pertenencias. A esa modalidad se sumó ahora la sustracción de menores, aprovechando los momentos en que se ausentan sus padres. No piden rescate por ellos. Simplemente desaparecen. Algunos le atribuyen este fenómeno reciente a la inserción del narco en la periferia y a las nuevas formas del delito que ha incorporado.

1

La República de los Falcon

Los destartalados Ford Falcon "0,50" en una de las paradas de la estación de trenes de Gregorio de Laferrere (La Matanza).
FOTO: © Carlos M. Reymundo Roberts

Desde que terminó la cuarentena por el COVID, la Policía Bonaerense parece haber salido a la caza de automóviles que no estén al día con la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Durante las vacaciones de verano instrumenta severos controles en las rutas, sobre todo en las que van hacia la Costa Atlántica. Pero a ese afán regulador y recaudador se le escapó algo: en Gregorio de Laferrere (La Matanza) circulan a la luz del día al menos cuatrocientos autos sin papeles y prestando, en la más absoluta irregularidad, un servicio de transporte de personas.

Un extraordinario coto en el que la Bonaerense podría afinar la puntería.

Territorio feroz, interminable, el megapartido de La Matanza es una expresión cabal —acaso la más dramática— del conurbano profundo, la vasta región donde el país se queda sin niveles mínimamente razonables de vivienda, salud, educación, trabajo, asfalto, agua, cloacas, electricidad, gas…

A esa lista infinita de déficits estructurales hay que sumarle uno que, como aquellos, afecta en forma directa la calidad de vida: el transporte. Aun en zonas densamente pobladas, como Laferrere (unos 248.000 habitantes, según el Censo 2010; del Censo 2022 todavía no hay información desagregada por localidades), la falta de colectivos deja a barrios enteros prácticamente desconectados. Miles de personas están en un virtual aislamiento y se ven obligadas a traslados a pie que duran horas. Los que para ir a trabajar deben caminar por maltrechas calles de tierra o por intrincados senderos tienen por costumbre, no solo los días de lluvia, llevar un par de zapatos o zapatillas para hacer ese trayecto, y otro par que se ponen al llegar al asfalto; también es habitual recubrir los calzados con bolsas.

Eso hace, por ejemplo, Yamil Oroqui, de 34 años, vecino de González Catán, para ir a trabajar de mozo en un bar de Once: “Estoy acostumbrado. Vivo en una zona en la que no pasan colectivos”.

En muchos barrios apenas hay una línea y con frecuencias muy bajas.

Fruto de esa realidad nació en Laferrere, hace algo más de veinte años, un sistema de transporte ilegal probablemente único en el país: los "0,50" (cuando empezaron cobraban 50 centavos el viaje). Se trata de autos viejísimos, destartalados, algunos sin luces, bocina, paragolpes, cinturones de seguridad…, en su mayoría Ford Falcon con cuarenta y cincuenta años en la calle, para viajes cortos que en general son compartidos. A comienzos de 2023 cobraban 60 pesos, y tienen distintos recorridos, circuitos y precio fijos; como los colectivos: no van a las casas. Es decir, autos en estado de descomposición y que están fuera del mercado automotor oficial (no pagan patente ni seguro) andan por las calles transportando a muchos miles de personas.

El contraste con el sector formal resulta llamativo: un auto particular de apenas tres años que no tiene la VTV al día paga multas que, durante el verano de 2023, llegaban a 181.000 pesos, más la retención de la licencia de conducir; mientras, los despojos de lo que fueron Ford Falcon funcionan como transporte público sin restricción alguna.

Autoridades municipales dicen que la flota de 0,50 en Laferrere llega a cuatrocientas unidades.

Lo único en regla que ostentan es la oblea del GNC, porque, en caso contrario, las estaciones de servicio tienen prohibido cargarles combustible.

¿Cómo consiguen la oblea siendo vehículos indocumentados? Misterio.

"Mafiosos" y "patoteros"

En cambio, se conocen bien las causas que llevan a las autoridades a tolerar e incluso alentar la existencia de los 0,50, a no combatir ese negocio ilegal que pone en riesgo la vida de los pasajeros. Lo explicó en una entrevista con *La Nación*, en junio de 2017, Miguel Saredi, en ese momento concejal y precandidato a intendente de La Matanza por Cambiemos, hoy asesor del gobierno municipal: "Es cierto, se trata de

un mercado absolutamente informal. Pero ese servicio suple lo que no hace el Estado: lleva a la gente a su casa".

Es un secreto a voces que no solo los autos están flojos de papeles: en la misma situación se encuentran los choferes y los "empresarios" dueños de las flotas, que suelen ser caracterizados, incluso por fuentes del gobierno local, como "mafiosos".

"No conviene meterse con ellos o intentar averiguar nada, porque son gente pesada", advierte un puntero peronista con cincuenta años en el distrito.

Se los acusa también de ser un negocio cerrado, al que no dejan entrar a nadie, y de creerse los dueños de la calle. "Hay choferes que son terribles, te patotean, te tiran el auto encima para que te corras", dice Brenda, de 25 años, que los cruza diariamente cuando va a trabajar a un local de zapatillas del centro de Laferrere. "Y no se te ocurra enfrentarlos: la podés pasar muy mal".

A veces se producen peleas entre los mismos choferes, y ahí también, advierten los vecinos, "mejor no estar cerca".

Algunos comparan el fenómeno de los 0,50 con el de las combis (o *charters*) surgidas en los años noventa en el GBA, de norte a sur: un medio eficiente y económico, al principio con pocas regulaciones, para trasladar a las decenas de miles de personas que ingresan cada día a la Capital Federal. La primera diferencia es que se trata de vehículos en buen estado; además, enseguida quedaron bajo el encuadramiento del sistema oficial de transporte público.

En La Matanza, la ecuación entre legalidad e informalidad, o ilegalidad, invierte los términos habituales: la informalidad es ley. En un altísimo porcentaje, el comercio, tanto puertas adentro como a la calle, trabaja en "negro". Hay barrios en los que el pago con tarjeta o por medios electrónicos y la entrega de factura casi no existen. No solo se ven remises o taxis fuera de régimen; también circulan combis y hasta líneas de colectivos truchas, sin autorización alguna para cumplir ese servicio.

Años atrás, la policía secuestró cincuenta autos durante una serie de allanamientos en remiserías clandestinas de Laferrere y demoró a sus conductores. El operativo fue realizado por personal de la Jefatura Departamental de La Matanza y de la Comisaría Cuarta, donde se

instruyeron actuaciones por “robo y hurto de automotor y encubrimiento”. Esas remiserías solo funcionaban por la noche.

Según fuentes policiales, es virtualmente imposible erradicar el negocio. “Las cerrás y al día siguiente abren en otro lado y con otros autos. Autos robados”.

Cuba, Haití, África…

El espectáculo de ver desfilar por las calles a los 0,50, uno detrás de otro, es dantesco para quien no tiene el ojo habituado: en su clamorosa precariedad, remite a Cuba, Haití o algún país africano. Solo la geografía de ese conurbano irredento, marginal, entrega una postal así: decenas de autos chocados y desvencijados, que parecen volver de una guerra, se suceden en una caravana incesante, a veces con pasajeros que se sientan en las faldas de otros para que quepan más.

Los viajes arrancan en la estación Laferrere del Ferrocarril Belgrano Sur, verdadero hormiguero humano. “Lafe”, como la llaman todos, es la localidad más poblada del partido y una de las más pobladas de la provincia de Buenos Aires (el McDonald’s ubicado frente a la estación, sobre la avenida General Rojo, suele ser el local de la cadena con mayor facturación del país). El servicio tiene tres recorridos, todos hacia barrios de la zona sur; los tres, a unos diez o quince minutos de la estación. La línea de colectivos 378 circula por allí, pero con muy pocas unidades.

Más allá de esos barrios empiezan a aparecer, junto al río Matanza, villas y rancheríos —“el conurbano del conurbano”, describe un vecino —, a los que no ingresa ningún medio de transporte; tampoco los “cochecitos”, como también son conocidos los 0,50.

Un papel pegado en el parabrisas delantero de los Falcon, que están numerados, indica el destino. En uno de los puntos de salida, a media cuadra de la estación, espera Ubaldo, de 26 años, albañil; es el último de una cola de cinco personas. Dice que no tiene miedo de subir a esos autos. “Hacen lo que pueden… Yo los uso todos los días porque son baratos y me salvo de tener que estar una hora esperando el colectivo”.

Nazareno, estudiante universitario, vive sobre la calle Spiro y

también los toma a diario. “La verdad, me resultan muy útiles. No serán cómodos, pero si no tenés movilidad, como es mi caso, te solucionan el problema. Pasan todo el tiempo y en tres minutos llego a la estación”.

Los recorridos son fijos, no así las paradas: los pasajeros indican dónde quieren bajarse. De regreso a la estación, los choferes van mirando en las esquinas; si los que esperan son muchos, el conductor saca la mano por la ventana e indica con los dedos cuántos lugares tiene. “Con los dedos: alta tecnología digital”, sonríe Estanislao, 21 años, pasajero frecuente.

Hacia el norte —del otro lado de la estación— también circulan los 0,50, pero con solo cuarenta autos.

En abril de 2021, un chofer de 39 años fue detenido en Laferrere bajo la acusación de haber abusado sexualmente de una chica de 13 años a la que trasladaba a González Catán en uno de esos viejos Falcon. La víctima denunció que, durante el viaje, en el que era la única pasajera, el conductor se desvió del recorrido y la violó. Llevada por su familia al Hospital Germani, los médicos que la atendieron determinaron que presentaba sangrado en la zona genital y lesiones compatibles con la vejación. El Falcon fue secuestrado, pero con un dato sorprendente: la policía le informó a la jueza a cargo del expediente que el auto no tenía ningún impedimento legal para estar en la calle.

Pese a la conmoción que provocó el caso, los 0,50 siguieron circulando como si nada hubiera pasado.

“Funcionan”

Alejandro Capobianco, delegado del Municipio de La Matanza en Gregorio de Laferrere, sostiene que la mayor justificación para la existencia de ese servicio es que los mismos vecinos lo defienden. “La gente está muy conforme y nos pide que no desaparezca. Dicen que son eficientes, rápidos y baratos, que ya conocen a los choferes… Es cierto que el marco en el que se manejan es, desde lo normativo, precario, pero, la verdad, funcionan. Funcionan bien”.

Niega que las autoridades municipales se desentiendan del tema.

“Siempre estamos atentos, no es que pueden hacer lo que quieren. Además, el Municipio va a construir paradas para los 0,50, una forma de ordenar la circulación”. ¿El Estado va a hacer paradas regulares para un servicio totalmente irregular? “Sí”, responde. Y subraya otros aspectos positivos del sistema: trabajan a la noche, cuando ningún colectivo circula, y son utilizados por personas de todos los niveles socioeconómicos. “Son igualadores”, afirma.

Capobianco recurre a las circunstancias históricas que vivió La Matanza para explicar fenómenos como el de los 0,50. Dice que, a partir de las décadas de 1930 y 1940, durante el proceso de industrialización, el partido sufrió una explosión demográfica por las oleadas de inmigrantes que llegaron del interior y de países vecinos. “Laferrere es desde entonces, por su población, una provincia dentro de otra provincia, La Matanza, que a su vez está dentro de la provincia de Buenos Aires”.

Semejante flujo migratorio, sostiene, causó problemas de vivienda, de urbanización, de informalidad, agravados después, en los años setenta, por el proceso contrario, la desindustrialización. “Es imposible comprender nuestra realidad si no se tienen en cuenta estos factores, que llevaron a una desregulación de hecho en todo el partido”.

El inventor

En 1997, Pedro Luque, matancero, trabajaba en el Mercado Central, en Tapiales, para una cooperativa de transporte que cerró. Al quedarse en la calle, encontró que su salida laboral iba a estar… en la calle. Se hizo de dos viejos colectivos y los puso a llevar gente; él conducía uno. Tenían un solo recorrido: desde el llamado “Alto Laferrere”, al 24.700 de la ruta 3 (atraviesa toda La Matanza), hasta el centro de la localidad, ida y vuelta.

Otra vez: había una “necesidad de mercado” que nadie estaba atendiendo.

Por supuesto, la línea no tenía habilitación. “Los colectivos estaban en buen estado y con seguro. Pudimos trabajar bien, nunca nadie nos jodió”, dice hoy Luque, de 67 años.

Lo hizo hasta 2001. Ese año, durante la grave crisis económica y

política que sacudió al país, se juntó con un amigo, Carlos Palavecino, y compraron cinco vetustos Ford Falcon (diez años antes, en 1991, habían dejado de fabricarse) para hacer un servicio corto en el núcleo urbano más poblado de Laferrere. Por supuesto, en un marco tan irregular como el de los colectivos, su anterior emprendimiento.

"Elegimos los Falcon viejos porque tenían el asiento delantero integrado [los modelos posteriores venían con dos butacas]: eso nos permitía llevar a una persona más. Eran grandes, cabedores, resistentes. Un fierrazo. Cobrábamos 5 pesos si era un solo pasajero, y 50 centavos para viajes compartidos entre varios. Y les quedó ese nombre, los 0,50, hasta hoy".

Luque reivindica "a toda honra" el título de "inventor de los 0,50", y está sorprendido de que todavía sigan andando los Ford que él y Palavecino convirtieron en el más popular medio de transporte.

"¿Saben cómo se conoce a Laferrere? —alardea—. Como la República de los Falcon".

CMRR

2

Gustavo Menéndez, un intendente de película

Gustavo Menéndez, dueño de una biografía personal exuberante, que el largometraje sin estrenar no consigue abordar por completo.
FOTO: © Gentileza *La Nación*

Gustavo *el Tano* Menéndez estuvo a un tris de alcanzar lo que tanto había esperado: la reivindicación pública de su carrera política con el estreno de "Los bastardos", una versión cinematográfica de su biografía, basada en el guión que él mismo escribió en colaboración con su director, Pablo Yotich. El 12 de mayo de 2022 podría ser recordado como el día en que casi lo logra. Era la fecha prevista para el estreno en el complejo de salas que Cinépolis tiene en San Antonio de Padua, partido de Merlo. El municipio donde Menéndez es intendente desde 2015.

Así lo había anunciado una campaña en la vía pública que cubrió las principales rutas y accesos a esa localidad. Sin embargo, surgió un contratiempo inesperado en la promoción en redes sociales que provocó el efecto contrario al deseado. Esas imágenes que adelantaban su contenido captaron la atención de "Odisea Argentina". El ciclo que conduce Carlos Pagni en LN+ reveló el 25 de abril detalles poco conocidos de lo que debió haber tenido lugar diecisiete días más tarde. Fue suficiente para que el acontecimiento quedase atrapado en un misterioso y, en apariencias, interminable suspenso.

Ninguna comunicación oficial informó las razones por las cuales los responsables de la producción resolvieron cancelar la exhibición pese al *avant-première* que había tenido el 31 de marzo en el cine Gaumont, con una gala de invitados que incluyó a la mayoría de sus protagonistas y a otras figuras del espectáculo local. Solo por trascendidos, se supo que el círculo político que rodeaba a Menéndez había hallado en el trabajo de "Odisea Argentina" la excusa que no tuvo antes para tomar esa decisión. En algunos casos, sus miembros juzgaron providencial el hallazgo periodístico, que impidió que el reconocimiento que perseguía Menéndez se convirtiera en un despropósito. Probablemente lo hubiese catapultado a la cumbre de una fama de dimensión plantearía, pero sometiéndolo a un bochorno singular.

Un *casting* de estrellas

No existen antecedentes de un intendente del conurbano que pretenda laudar a su favor el paso accidentado que registró en la función pública con una expresión artística que lo revisa y corrige. Una desmesura en la que no pareció reparar Yotich. “La idea es estrenarla en los cines, pero veremos en qué situación de la pandemia nos encontrará. Necesitamos que la sala esté al cien por ciento de su aforo, porque es una apuesta grande y la realidad es que hoy, al 50%, no se están llenando. Un poco por el miedo de la gente a salir y por lo económico”, le había dicho el director al suplemento Zona Oeste de *Clarín* el 4 de agosto de 2021.

La crónica se encargó de revelar los planes que tenía el director para sortear esa eventual contingencia, planteada por la incertidumbre frente a la pandemia del COVID-19:
“De no llegar a la pantalla grande, el estreno será por *streaming* en alguna de las tres grandes plataformas con las que Yotich está negociando: HBO, Netflix y Amazon”. Algunos tramos de la cinta todavía inédita pueden verse en el espacio virtual gracias a las distintas versiones de anticipos que la promocionaron desde que comenzaron los preparativos de su rodaje en 2018.

La descripción efectuada por Estación Sur Digital probablemente sea la que mejor haya reflejado la expectativa que se trató de crear a su alrededor cuando su presentación parecía un hecho inminente. El sitio web especializado en noticias de Berisso y Ensenada no dudó en titular la referida a la película como “Un thriller que narra el duelo entre dos políticos”. El texto reproduce el que Pablo Cerrutti había publicado en su cuenta de Instagram el 6 de julio de 2021 para acompañar uno de los tráileres promocionales: “Es la película con mayor número de artistas de primera línea en la historia del cine nacional y la gran apuesta del cine argentino en 2022”, escribió Cerrutti, agente de relaciones públicas de acreditada experiencia en el mundo del espectáculo. No era para menos. El elenco de “Los bastardos” tenía a Gerardo Romano como uno de los protagonistas principales, con participaciones especiales de Nacha Guevara, Virginia Lago, Pablo Rago y Rodolfo Ranni, más un destacado *casting* de estrellas.

Betiana Blum, María Valenzuela, Vanesa González, Arturo Bonín, Gustavo Garzón, Roly Serrano, Rodrigo Guirao Díaz, Gonzalo Urtizberea, Toti Ciliberto, Sergio Surraco y Mario Alarcón fueron algunos de los que integraron el reparto, que Cerrutti se encargó de citar por orden alfabético y que convocó a no menos de cuarenta artistas de renombre similar, incluido el cantautor Víctor Heredia, a cargo de la dirección musical de la banda de sonido. Sin embargo, Ezequiel Guazzora era el nombre que sobresalía del resto. Un controvertido periodista que había trabajado al servicio de Menéndez en el Municipio de Merlo.

Talleres de periodismo

En 2020 Guazzora cobró notoriedad por realizar acciones de hostigamiento e intimidación contra Baby Etchecopar, Luis Majul, Eduardo Feinmann y Alfredo Leuco, a los que acusó de "difamar" a Cristina Fernández de Kirchner. El 3 de julio de ese año, *Clarín* recogió las declaraciones con las que el intendente defendió su contratación, que limitó exclusivamente al dictado de talleres de periodismo en los barrios para que "los chicos se animen a consultar a sus vecinos y a hacer reportajes".

En septiembre de 2021, Guazzora dejó de ser asesor de Menéndez. El 18 de noviembre fue detenido por atropellar a un policía de la ciudad en Caballito. El incidente ocurrió horas después del acto por el Día de la Militancia, organizado el 17 por la CGT en Plaza de Mayo. Guazzora criticó que en esa ocasión el presidente Alberto Fernández no había cantado la marcha peronista. Lo hizo a través de un video que posteó en las redes. Allí apareció sosteniendo una lata de cerveza. El periodista se negó a realizarse el test de alcoholemia cuando fue aprehendido. En 2014 ya había sido condenado por la Justicia en un caso de violencia de género contra su pareja, la exdiputada nacional Stella Maris Córdoba. El 2 de septiembre de 2022, Guazzora reapareció participando en la mesa contra los discursos de odio encabezada por el presidente en la Casa Rosada a veinticuatro horas del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su domicilio en la Recoleta.

El oficialismo le atribuyó a la Justicia y los medios propagar los discursos de odio que habrían preparado el clima político en el que se intentó asesinar a la vicepresidente. Guazzora volvió a cargar en esa oportunidad contra los mismos periodistas y los advirtió: “Si siguen tirando de la soga, va a pasar lo que no queremos. Y les puedo asegurar que esta vez la sangre no va a ser la nuestra”. Además de su reconocido protagonismo en la pantalla, lo que tienen en común quienes participaron de la película es la simpatía —y en algunos casos una adhesión ferviente— que profesan por Cristina.

Pero es preciso regresar al supuesto lance de honor en el que se batirían, al menos en la actuación, dos dirigentes políticos: Menéndez y Raúl *el Vasco* Othacehé, quien lo antecedió en el cargo de intendente. Los duelistas que, como en la novela homónima de Joseph Conrad, quedan anudados en ese trance, que se convierte en su único destino posible.

No muy distinto al que encuentra Juan Dahlmann, el personaje de Jorge Luis Borges en el “El sur”, su cuento preferido. Un desafío para enfrentarse a cuchillazos con otro parroquiano del almacén Santa Rita en Adrogué. No hay constancias que permitan inferir si Yotich y Menéndez utilizaron estas ficciones como fuente de inspiración para “Los bastardos”.

El debut

El director le contó a *Clarín* el 10 de febrero de 2018 cómo se había aproximado a este suceso. Recordó que, a pesar de haber nacido en el oeste del conurbano, la zona geográfica donde se ubica Merlo, “nunca había sentido especial curiosidad por esta región ni por su historia” hasta que comenzó a escuchar testimonios, mientras buscaba locaciones para “Huellas”, otro de sus largometrajes. En ese y otros diálogos con la prensa, reveló que así fue como había llegado hasta allí proveniente de Marcos Paz.

“Huellas” se estrenó en el Parque de la Unidad Nacional de Merlo el 25 de noviembre de 2019 y significó el debut actoral de Menéndez. En una breve aparición, personificaba a un intendente que se negaba a aceptar que el personaje principal, interpretado por Yotich, fuera un

violador. Presentada como un alegato contra la violencia de género en la misma fecha en que se conmemoraba internacionalmente ese día, el detalle siniestro era la acusación por intento de abuso que en enero de ese año había presentado Natacha Jaitt contra Yotich y su amigo Maxi Giusto.

Un episodio extraño, donde los límites entre imaginación y realidad se superponen de tal modo que hace muy difícil distinguir cuando se está en presencia de uno o de otro. Jaitt falleció al mes de haber presentado esa denuncia en circunstancias, cuando menos, turbias. El 23 de febrero apareció muerta en un salón del complejo de eventos Xanadú, en Villa La Ñata, Tigre. Desde entonces la causa que procura determinar las razones de su muerte no registró avances importantes.

Describir a Jaitt es una tarea sumamente compleja. Ella misma solía definirse como trabajadora sexual. Fue actriz en filmes porno y condujo un ciclo en la señal de cable Play Boy. Un perfil con el que supo concitar la atención de la prensa especializada en el espectáculo. Yotich fue sobreseído al poco tiempo de haber sido denunciado por Jaitt.

El 1° de marzo, *Clarín* reprodujo el testimonio que este dio sobre el asunto en el programa "Los ángeles de la mañana", que emitía Canal 13. Allí reveló que era amigo de Jaitt desde hacía siete años, pero que no habían vuelto a tener contacto por meses hasta que la invitó a cenar a su casa. Al parecer, el que mantuvieron esa noche fue intenso, ya que admitió que Jaitt, él y Giusto habían compartido una relación sexual consentida.

En "Los bastardos", Yotich personifica a Menéndez. Aunque en la película el apellido real es sustituido por otro de fantasía: Méndez. En apariencias, un curioso apócope que funcionaría como una licencia poética de los autores del guión. Sin embargo, existen antecedentes que permiten inferir que la causa de ese cambio fue otra. Sobre todo, porque Méndez es la forma algo despectiva con la que Sergio Massa había aludido a Menéndez un par de meses después de las elecciones de 2013, en las que venció con el Frente Renovador al Frente para la Victoria.

Ese resultado fue determinante para el acercamiento de varios intendentes del conurbano a esa coalición opositora. El de Merlo,

Othacehé, fue uno de los que abandonaron al oficialismo. Un claro perjuicio para Menéndez, que representaba a Massa en ese distrito. Precisamente, para oponerse al intendente.

Bajo el título de "La incorporación de Othacehé acrecienta las internas del Frente Renovador", la agencia oficial de noticias Télam difundió el 18 de febrero de 2014 un cable con un video alusivo a esa situación. (https://www.telam.com.ar/).

En la secuencia de imágenes puede apreciarse una supuesta conversación telefónica entre Massa y un interlocutor innominado a quien relata que "nosotros tuvimos acá (por Merlo) dos listas. Una ya se incorporó al bloque (de concejales) de Raúl (Othacehé) y la otra no sé qué hará". Esa reflexión es acompañada por carcajadas provenientes de un grupo de personas fuera del alcance de la cámara, exclusivamente concentrada en captar a Massa, quien responde con un gesto cómplice a la reacción que sus palabras provocan en esa claque.

"Méndez" es la respuesta, corta y seca, de Massa a la pregunta que se le efectuaría del otro lado de la línea: quién lideraba la lista que no llegó a un acuerdo con el intendente. Ese aparente espíritu de revancha predominaría en la sinuosa línea argumental que seguiría el guión para darle forma al aura heroica que rodea al relato sobre la disputa por la intendencia mantenida con Othacehé, interpretado por Gerardo Romano. Es probable que otras versiones tan interesadas como estas en demostrar lo contrario tengan el mismo defecto.

Locaciones originales

En una de ellas se da por seguro que el nombre de la película, "Los bastardos", es fiel al apodo que recibieron por mucho tiempo Karina y Gustavo, hijos de Yolanda Menéndez y nacidos de su relación con Cayetano Vitale, dirigente del sindicato del Neumático, que se habría negado a reconocer su paternidad. Yolanda tuvo una actividad política destacada en Merlo, y llegó a ser concejala con la renovación peronista que Antonio Cafiero lideró en la provincia de Buenos Aires.

El vínculo con el exgobernador peronista habría nacido durante la dictadura militar. La fragilidad en la que había quedado el gobierno de facto tras el intento de recuperar las Islas Malvinas relativizó la

prohibición que pesaba sobre la actividad política. La madre de Menéndez organizó uno de los primeros actos clandestinos del peronismo en Merlo. Lo hizo en su propia vivienda. Antonio Cafiero fue el único orador. Había llegado hasta allí en compañía de su amigo e historiador José María *Pepe* Rosa.

Yolanda fue el primer nexo entre su hijo y Othacehé, que gobernó Merlo entre 1991 y 2015. En la publicación que Cerrutti realizó en Instagram para anunciar el malogrado estreno de "Los bastardos" se destaca que "fue filmada en las locaciones originales" donde transcurrieron los hechos y la vinculación que tendrían con "la vida cotidiana desde 1976 a la actualidad". Una aparente intención solapada de vincular a Othacehé con la dictadura, aun cuando había sido electo a ocho años de la restauración democrática.

Yotich ya lo había adelantado en la entrevista con *Clarín* de 2018. "Soy consciente de la polvareda que está levantando el proyecto desde que se conoció. Como cineasta podría dedicarme a algo más comercial, pero sentí que tenía que contar esto como una forma de contribuir a que nunca más suceda algo así en democracia. Es lo que le dejo como legado a mi hijo".

La narración periodística se interna en el aparente estado de ánimo del director. "La primera sensación que tuvo cuando comenzó a escuchar las historias de quienes habían sufrido amenazas y persecuciones durante los veinticuatro años de gobierno (de Othacehé) fue bronca. Por lo sucedido. Pero, más aún, por haberse mantenido ajeno. Sin saber, y sin poder hacer nada al respecto… Aunque el eje principal será un relato ficcional, estará repleta de detalles reales que rápidamente podrán reconocer quienes vivieron el gobierno de Othacehé en Merlo".

Amigo del alma

Othacehé perteneció en su juventud al Movimiento Nacionalista Tacuara y, más tarde, a las Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional (JAEN), cuyos dirigentes más notorios fueron Rodolfo Galimberti y Carlos Grosso. El exintendente de la ciudad de Buenos Aires y Cafiero, entre otros, fundaron la renovación peronista,

que abrazó Othacehé en 1987.

Ese año Menéndez ingresó como empleado administrativo de la dirección de Asuntos Legales mientras cursaba la carrera de abogacía en la Universidad de Morón, de acuerdo con la biografía publicada por el sitio oficial de la Municipalidad de Merlo. Resulta evidente que, por sus antecedentes e historia, es mucho más probable que Othacehé haya permanecido, y recogido adhesiones, en expresiones de la derecha del peronismo y no entre las de la izquierda. Esto vuelve lógico que haya adherido al modelo político que impuso Eduardo Duhalde al Partido Justicialista bonaerense en la década de 1990 y cuyo rasgo más característico fue la enorme semejanza con el que sigue predominando en el sindicalismo peronista: la limitación de esas organizaciones para incluir a la representación de las minorías. En la mayoría de los casos, ese déficit estructural refleja el espíritu de las normas que regulan su sistema de elección de autoridades, uno de los motivos por los que un grupo significativo de intendentes recibió el sobrenombre colectivo de “barones del conurbano”.

Menéndez no fue ajeno a ese contexto político. Pero mucho menos un actor pasivo. Othacehé lo designó subsecretario de Tierras, cargo que ocupó entre 1992 y 1994, un período que coincidió con el apogeo de la corriente política liderada por Duhalde y, por esa razón, también denominada “duhaldismo”.

A Menéndez no pareció preocuparle en esa época la situación que, casi dos décadas después, se propuso revisar junto a Yotich en “Los bastardos”. La brevedad de su gestión junto a Othacehé no habría sido un obstáculo para ganarse su confianza, según aceptan en el entorno del exintendente. Quienes aseguran atesorar con presumida precisión recuerdos de aquella época describieron a Menéndez como alguien “pertinaz y entrador. Puede hacerte creer que será tu amigo del alma”.

Con ese supuesto encanto habría conquistado, al menos durante algún tiempo, a Othacehé. La pareja de dobles que compartieron para disputar matches de tenis en el Club Atlético Estudiantil Porteño de Ramos Mejía atestiguaría lo inseparables que llegaron a ser. Esa armonía fue interrumpida por el deseo de sucederlo que expresó en vísperas de las elecciones de 1995. Después de eso, Menéndez tuvo que renunciar a la Subsecretaría de Tierras.

En las fabulaciones de sus detractores, el seductor histrionismo que sería capaz de desplegar lo habría ayudado a superar ese trance. Menéndez habría echado mano a ese talento para subsistir en México, donde animó shows en clubes nocturnos. Al regreso de ese breve exilio, supo obtener provecho de la pelea entre Othacehé y Jesús Cariglino, intendente de Malvinas Argentinas.

Mochila verde

Los caudillos peronistas se enfrentaron por la primacía de su liderazgo en la Primera Sección, el circuito electoral que comprende los partidos ubicados en las zonas norte y oeste del conurbano. A esta última pertenece Merlo, con una superficie de casi doscientos kilómetros cuadrados y una población que supera los 600.000 habitantes, lo que la convierte en una de las concentraciones de electores más importantes de la región, por encima de los partidos de Moreno, San Martín, Tigre y Tres de Febrero y José C. Paz.

Gracias a Cariglino, Menéndez entró en contacto con Felipe Solá. Electo vicegobernador en 1999, a fines de 2001 se convirtió en gobernador por la renuncia de Carlos Ruckauf. En 2003 fue elegido para ocupar ese cargo hasta 2007. En el último tramo de su gestión, Menéndez fue designado director provincial de Casinos en la Lotería bonaerense. Una auditoría ordenada por el titular de ese organismo, Francisco *Franco* Laporta, detectó irregularidades en el flujo de fondos de los casinos Central y del Mar en la ciudad de Mar del Plata entre 2006 y 2007.

Menéndez y su jefe de la administración, Enrique de Luca, fueron denunciados judicialmente por un faltante de 600.000 pesos que habrían sido retirados del tesoro de esas casas de juego en una mochila verde. Las imágenes de las cámaras de seguridad aportadas como pruebas en la causa captaron el momento en que De Luca concretaría la maniobra, valiéndose para eso de un morral de ese color. La agencia Télam se apresuró a convertir “mochila verde” en un neologismo en el mismo cable donde Massa cambia su apellido por el de Méndez. Sus enemigos se apropiarían de esa idea y lo convertirían en un nuevo y descalificador alias.

Dólares

Menéndez fue hallado culpable del delito de defraudación al Estado por el que se lo había acusado y se lo condenó a dos años y seis meses de prisión en suspenso. Pero también se le impuso una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Justicia Correccional de Mar del Plata adoptó esa decisión a fines de diciembre de 2018, es decir, once años después de que se abriera la causa en su contra. Diez meses antes de ese fallo, Yotich anunció en *Clarín* el inicio del rodaje de "Los bastardos". La forma que halló para "saldar una deuda moral" por las amenazas y persecuciones en los veinticuatro años de gobierno (de Othacehé). Igual que en otras ocasiones, es probable que Yotich no haya imaginado el valor que podrían adquirir sus palabras en el futuro.

En 2019, Jorge Blanco Schmidt denunció a él y a Menéndez en la Justicia de Garantías del Departamento Judicial de Morón por supuesta malversación de caudales públicos, un delito en el que habrían incurrido, precisamente, con "Los bastardos". Producida y realizada en el Polo Audiovisual de Merlo, una dependencia creada por la gestión de Menéndez que, al menos hasta la presentación de Blanco Schmidt en la Justicia, no figuraba registrada como parte del organigrama municipal.

A instancias de Othacehé, Blanco Schmidt había sido concejal del Frente Renovador en Merlo entre 2015 y 2019. En su denuncia plantea que la actividad del Polo Audiovisual, la producción de largometrajes, no parecía guardar relación con la difusión de actividades vinculadas a los actos de gestión del municipio. No es la única conjetura que aventuró para que fuera investigada. También pidió que se corroborase si Yotich y Alejandro Fiore habían percibido ingresos en calidad de auxiliares del intendente (Menéndez) en 2018.

Al director se le habría fijado un salario de 45.000 pesos y de 20.000 para el actor de "Los simuladores", sumas equivalentes a cerca de 1200 y 600 dólares en cada caso, si se las convierte al valor que tuvo esa moneda en el mercado paralelo ese año. Blanco Schmidt realizó su presentación en la Justicia en 2019. Recién en marzo de 2022 la causa experimentó algún movimiento, sobre todo luego de que

el exconcejal le solicitara al juez de garantías N° 5 de Morón, Jorge Rodríguez, ser considerado en ella como particular damnificado.

Sin embargo, la investigación que llevaba adelante el titular de la Unidad de Instrucción Fiscal (UFI) N° 5 a cargo de Carlos Oviedo no obtuvo grandes progresos. Sobre todo, por un dato curioso: el municipio no respondió a los pedidos de documentación que le había efectuado para determinar si Yotich y Fiore habían sido empleados del municipio. La autenticidad de los recibos de sueldo que lo atestiguarían está puesta en duda por el ámbito donde circulan: las redes.

Igual que en los de Quilmes, Moreno y Avellaneda/ Lanús, el Departamento Judicial de Morón es uno donde el kirchnerismo ejerce influencia política. No está claro si Blanco Schmidt aportó como prueba las constancias que allegados a Othacehé habían obtenido de Nosis, una firma especializada en la búsqueda de antecedentes laborales y comerciales de empresas y personas. Según algunas copias de ellas, Fiore habría recibido pagos del municipio durante algunos meses de 2018. Yotich, hasta al menos enero de 2021.

En 2022 pasó a ser director del Polo Audiovisual, volcado ahora al dictado de cursos sobre producción audiovisual. A comienzos de ese año, Menéndez fue designado como nuevo titular del grupo Bapro, que nuclea a las empresas con las que el Banco Provincia participa en el mercado de las aseguradoras a través de Provincia Seguros, Provincia ART y Provincia Vida. La intervención de Martín Insaurralde fue decisiva para su llegada a ese lugar.

Insaurralde es intendente de Lomas de Zamora y Axel Kicillof lo designó como jefe de Gabinete bonaerense luego de la derrota que el Frente de Todos sufrió en las PASO de 2021. Desde su asunción, Insaurralde se convirtió además en el jefe de la campaña del oficialismo para intentar revertir ese resultado negativo. No lo logró, pero estuvo muy cerca. Juntos se impuso en las elecciones generales por poco más de un punto. En las primarias había obtenido una ventaja de cuatro.

Al mes de asumir, Menéndez presentó ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense un recurso extraordinario para que se revocara la condena en su contra. El 14 de diciembre de 2022 ese máximo

tribunal resolvió anularla, una decisión adoptada al menos una semana antes, y después de convocar a tres conjueces para desempatar el voto dividido de sus cuatro miembros. La Corte bonaerense tiene tres vacantes por cubrir, y una medida de esa magnitud debe saldarse por el pleno de todos sus votos.

La presidenta Hilda Kogan y Daniel Soria expresaron el suyo a favor de mantenerle la condena a Menéndez, mientras que Luis Genoud y Sergio Torres pidieron absolverlo. Genoud fue el autor de los fundamentos que acompañó Torres y dos de los tres jueces convocados desde el Tribunal de Casación Penal: Daniel Carral y Ricardo Maidana, miembros de la Sala 1. Con cuatro votos a favor de esa posición no hizo falta que emitiera el suyo María Florencia Budiño, de la Sala 5.

Esta resolución de la Corte le permite a Menéndez mantener el cargo de intendente y de titular del Grupo Bapro. Si la condena hubiera quedado confirmada, cuya parte más sobresaliente era, precisamente, la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, no podría haber permanecido en ellos.

Jugador profesional

Luego de la repercusión que rodeó al suspendido estreno de “Los bastardos”, Insaurralde le ordenó a Menéndez abstenerse de cualquier intervención en el espacio de lo público que pudiera volver a colocarlo en el centro de otra controversia, una instrucción que el intendente de Merlo viene cumpliendo con notable disciplina. Quizás una muestra más del afán de superación que él mismo se atribuye para ufanarse de haber recibido el título de abogado y de escribano por la Universidad de Morón.

O para reponerse de la aparente promisoria carrera que le aguardaba como futbolista profesional si una lesión no hubiese interrumpido su proceso de formación en las inferiores del club Boca Juniors. Allí donde sus compañeros de promoción le asignaron el sobrenombre por el que se lo conoce y en mérito a la voracidad para comerse un choripán y así evitar compartirlo: “Hacés lo mismo que los tanos. Parecés uno”. Probablemente una conducta signada por una historia de privaciones. Una aparente marca indeleble que guiaría sus

pasos. Tal vez el mensaje implícito de su obra inédita: “Los bastardos”. El título definitivo que se impuso a otros que no pasaron del borrador: “El bastardo” y “conurbano”. Todos tienen en común bastante más de lo que enuncian a simple vista. Justifican una idea primitiva que tal vez haya merecido otro desarrollo. Pero contribuyen a dar por lícita una afirmación. Si hay algo de lo que no puede haber dudas es que Gustavo Menéndez es un intendente de película.

DB

3

Ciudad Celina, la pequeña Bolivia

Locales y puestos sobre la calle Olavarría, epicentro comercial de Ciudad Celina.
FOTO: © Gentileza Bolivia al Aire TV

Para un porteño, Bolivia puede quedar muy lejos o muy cerca: son 2600 kilómetros hasta La Paz…, o apenas veinte minutos en auto hasta Ciudad Celina (antes, Villa Celina), uno de los mayores enclaves de bolivianos en la Argentina.

Es llamada “la pequeña Bolivia”.

Hacia el sur del vértice que forman la General Paz y la Autopista Riccheri, la patria de Evo Morales ha sentado sus reales. Como probablemente no ocurre en ningún otro lugar del país, vecinos, comerciantes y transeúntes son de ese origen; lo mismo los profesionales que atienden en el barrio: abogados, médicos, dentistas… Los locales tienen nombres tipo “Sucre” o “Cochabamba”, y no es extraño oír hablar en lengua quechua o aymara.

“Hay argentinos, pero es cierto que son muy pocos. Basta mirar en la calle para darte cuenta de que somos casi todos ‘bolitas’, como nos llaman ustedes”, dice Edgar, 45 años, encargado de una tienda de ropa sobre la calle Olavarría, en la zona céntrica. Nacido en El Alto, muy cerca de La Paz, lleva quince años viviendo en la Argentina y siete en Ciudad Celina (partido de La Matanza). Acá también están sus padres y un par de primos. “A los bolivianos nos gusta estar cerca de otros bolivianos, trabajamos con bolivianos, nos casamos con bolivianos...”, cuenta Edgar.

Según el cuestionado censo de 2010 (del que se hizo el año pasado todavía se conocen muy pocas cifras), en el país hay 350.000 bolivianos. Sin embargo, fuentes del gobierno argentino y de la embajada boliviana han admitido que la cifra real es muchísimo más alta, incluso bastante arriba del millón: es la segunda comunidad de extranjeros después de la paraguaya, y la mayor de bolivianos fuera de su país.

Villa próspera

“Se venía hablando de que somos 800.000, pero hay muchos sin papeles. Entre documentados e indocumentados debemos estar en un millón y medio o dos millones”, afirma el periodista Edwin Vladimir Sánchez, 41 años, conductor y productor de programas en la FM 96.5, una radio de la comunidad. Oriundo de Potosí, es muy conocido entre sus compatriotas afincados en el conurbano, y un estudioso del fenómeno de la inmigración llegada de su tierra. Su familia vino en los años noventa —primero, los tres hermanos mayores, y después los cuatro restantes y sus padres— y se estableció en Ciudad Oculta (Mataderos), en el vértice norte del cruce de General Paz y Riccheri. Tiene hermanas enfermeras y hermanos que trabajan en el comercio, la construcción y la industria textil.

Su segunda lengua es el quechua. “En Bolivia se habla más quechua. El aymara se hizo popular por Evo, pero Evo, contra lo que muchos creen y lo que suele salir publicado, es de origen quechua, no aymara”.

“Hay bolivianos en todas las provincias —señala—. Hasta en Comodoro Rivadavia, en Ushuaia... En Jujuy, el 70% de la población es de origen boliviano. Muchos son nacidos ahí, pero de padres o abuelos bolivianos. En La Matanza, ni el municipio tiene la cifra. Tampoco el viceconsulado de Bolivia en San Justo. Yo estimo que hay unos 100.000, la mayoría en Ciudad Celina y sus alrededores. Ese nivel de concentración creo que no se da en ningún otro lugar del país”.

En 2013, el “Villa” del nombre original fue cambiado por “Ciudad”, reflejo de su meteórico crecimiento poblacional y económico; hasta entonces era un barrio de Villa Madero y ese año fue reconocido como localidad por el Concejo Deliberante. Para algunos, sobre todo en ámbitos académicos vinculados con el progresismo, la anterior denominación tenía un tinte “estigmatizante”.

En todo caso, una villa muy próspera, donde florecen, con más impulso que orden, las construcciones, la industria textil y el comercio. La calle Olavarría, epicentro económico de la zona, es un hervidero de gente, especialmente los fines de semana, y el alquiler de los locales, apretujados sin solución de continuidad, puede resultar exorbitante.

Hasta las veredas se cotizan: los dueños de los locales las alquilan a

los puesteros. Sábados, domingos y días de fiestas también ocupan la calzada.

Un paseo por Olavarría es como estar caminando por La Paz. Los bolivianos están de los dos lados del mostrador, la comida es boliviana, lo mismo la música que se oye a todo volumen, y la mayoría de las especias ofrecidas, en impactante variedad y colorido, vienen de Bolivia. Además, hay bares, ropa, chucherías… Todo a precios accesibles, y a nadie se le ocurre dar o pedir factura: es el reino de la informalidad.

Por supuesto, resulta muy fácil conseguir hojas de coca, porque la ancestral costumbre de coquear, tan extendida en la región del Altiplano, no se pierde en la llanura. Se venden en bolsitas de nylon de distintos tamaños. "También hay argentinos que coquean", dice Rosmery, 27 años, que vende dulces y condimentos; en una cunita, pegada a ella, duerme su tercer hijo. "La coca tiene muchos beneficios para la salud. Por ejemplo, para los diabéticos, y saca el dolor de cabeza, el sueño, el hambre… Acá la usan los choferes de micros de larga distancia. Es la hojita milagrosa. Un regalo de Dios y de la Pachamama".

En 2010, la policía allanó un local donde funcionaba una distribuidora de cocaína y detuvo a varias personas; todos, inmigrantes sin papeles.

(No tener documentos, dice el periodista Sánchez, no es un problema: antes de cada elección, autoridades del Registro Nacional de las Personas y punteros políticos se instalan en Celina y reparten DNI).

Barrios en guerra

La llegada de oleadas de bolivianos a Ciudad Celina, un fenómeno que comenzó a mitad de los años noventa, provocó resistencias en los vecinos del llamado "casco histórico", unas diez manzanas, que de pronto se sintieron invadidos: una zona tranquila, residencial, estaba expandiéndose sin organización alguna y convirtiéndose en un ruidoso mercado, una feria callejera que atraía a gente de todo el conurbano.

Cambió drásticamente el perfil urbano: proliferaron construcciones de caseríos bajos, sin ninguna pretensión estética, y a partir de 2010,

monoblocks y edificios en altura.

“Nos cambiaron el barrio, quedamos como encerrados por personas que hacen sus casas de cualquier forma y que tienen costumbres y cultura muy distintas a la nuestras. Esto no tiene nada que ver con lo que era”, se queja L., que pide no ser identificado para “no herir susceptibilidades”. Vive allí con su familia desde hace treinta años y a dos cuadras tiene a sus padres.

Hubo incluso enfrentamientos, y se llegó a hablar de “guerra de barrios”: los que ya estaban contra los recién llegados. Inmobiliarias y referentes de la zona sostienen que lo que contribuyó a aquietar las aguas y llevar calma fue, con el tiempo, la revalorización de las propiedades que trajo aparejado el boom económico y comercial. Los que no se sentían a gusto pudieron vender muy bien sus casas; a bolivianos, claro.

Voces de la propia comunidad boliviana se alzan contra ese crecimiento desbordado. Un proveedor de almacenes del barrio y vecino de la zona dice, bajo reserva de identidad, que lo que se vive es un “auténtico caos”, especialmente en la construcción. “Se hacen casas y monoblocks sin planos, sin autorizaciones, amontonando departamentos uno arriba de otro. Lo increíble es que la Municipalidad de La Matanza no dice nada, mira para otro lado. Es una vergüenza”.

Los nuevos vecinos, que hoy son absoluta mayoría, no tienen un líder indiscutido, alguien que predomine, que haya alcanzado peso propio. “En realidad, son varios. No se pelean entre ellos, pero tampoco se unen para hacer cosas juntos”, dice un puntero peronista que conoce bien la zona e interactúa con esos referentes.

Liniers, desplazado

Antes, el polo comercial por excelencia de la colectividad estaba en Liniers, cerca de la estación del Ferrocarril Sarmiento, pero en los últimos cinco años fue opacado por Ciudad Celina. A lo largo de cuatro o cinco cuadras, el de Olavarría se constituyó en el mayor mercado boliviano del Gran Buenos Aires. Como si fuera un shopping, van familias enteras a comer, pasear, hacer compras… Básicamente el

programa consiste en ir y encontrarse con familiares y amigos, con compatriotas. Un estallido de bolivianeidad.

“Todo lo que buscamos, acá lo tenemos, está muy bueno. Incluso, las grandes festividades de mi país, como el Willka Kuti [el 21 de junio, Año Nuevo andino amazónico en la cultura aymara], las venimos a celebrar acá. ¡Somos miles! Por eso se habla de la pequeña Bolivia”, cuenta Luisa, 26 años, que camina con una hermana en busca de ropa y zapatillas. Además, van a comer las muy populares empanadas “salteñas”, que tienen ese nombre por haber sido llevadas a Bolivia por una salteña, Juana Manuela Gorriti (con el tiempo, la cocina boliviana las fue cambiando); por ser muy caldosas, las suelen comer con cuchara.

El “rey de las salteñas” es Valentín Lucio Choquehuanca (52 años, originario de La Paz), que emigró hace treinta años al país, donde ya vivía una hermana. En Bolivia trabajaba en una mina de oro, acá empezó como costurero y hoy es dueño de El Conejo, una muy exitosa cadena de empanadas que tiene una sucursal en Ciudad Celina, sobre Olavarría. Está conforme con el rendimiento de ese local, pese a que, dice, compite en inferioridad de condiciones. “Nosotros trabajamos totalmente en blanco, lo cual es una rareza. Debo ser el único estúpido en toda la zona que paga IVA e Ingresos Brutos”.

Debido a la creciente inseguridad, en los últimos años dejaron de hacer servicio de *delivery*.

“Olavarría trabaja más que el Once”, dice Sánchez, que por su cobertura periodística la visita regularmente. “Incluso locales de Once cerraron y se vinieron acá. En textiles y alimentos se están moviendo volúmenes enormes”.

La fiebre económica que vive el barrio se asienta en esos dos sectores y en la construcción, que no para de crecer. A la cabeza figura la industria textil, habilidad innata de la cultura boliviana. Hay decenas de talleres, cuya producción no solo está destinada a abastecer el mercado del GBA: también venden en muchas provincias.

“Es ropa buena, de calidad, pero sin marca o de marcas no conocidas, y mucho va al interior, donde no se le da importancia a la marca”, dice Osvaldo, dueño de un taller a tres cuadras de Olavarría, con clientes en Córdoba y Mendoza. Tiene diez operarios, pero en

momentos de mucha demanda contrata algunos más.

Hay tanto mercado para la ropa que el cuello de botella está siendo la mano de obra. Osvaldo dice que cada vez resulta más difícil conseguir un buen costurero, aunque se le pague bien.

“Hoy un costurero gana tanto como un dentista”, describe Sánchez. “Por mes, el salario básico va de 150.000 a 200.000 pesos [cifras de comienzos de 2023], y más si trata de un horario extendido. Todo en negro, por supuesto”. Comenta que la prosperidad de la industria textil, para la que ya trabajó, lo está haciendo pensar: quizás llegó el momento de volver a ella, sin dejar el periodismo.

Vienen, pero también se van

Según diversas fuentes, la escasez de mano de obra está vinculada a que en los últimos años viene disminuyendo el flujo migratorio, e incluso muchos se tuvieron que ir, expulsados por la crisis económica. Regresan a su país o buscan mejor suerte en países vecinos, como Brasil. Un fenómeno parecido al de la inmigración venezolana, que también se está revirtiendo.

Históricamente, los bolivianos venían a la Argentina en busca de “empleo, capacitación y estudio”, dice Sánchez. “Acá hay empresas, y donde hay empresas hay trabajo. También es bueno el sistema de salud, gratuito, pero no venimos por eso. Nadie viene por salud. Venimos por trabajo. Allá tenemos pocas fábricas, pocas empresas. Siempre vimos a la Argentina como un país que produce: en Bolivia se consumen muchos productos argentinos. Un ejemplo: acá se fabrican autos. En Bolivia, no. Bueno, ahora se está haciendo un auto eléctrico en Cochabamba, el Quantum, con batería de litio, pero es una fábrica chiquita. Acá siempre ha habido mucha demanda en construcción, en trabajo rural y en indumentaria, y nosotros en esos rubros somos muy buenos. Pero es cierto que la crisis se siente: a muchos se les ha hecho cuesta arriba y ya no les conviene quedarse. Ya no les alcanza la plata para hacer giros a sus familias en Bolivia. Entonces, se van”.

En cualquier caso, dice, la Argentina siempre será para ellos un buen recuerdo.

4

UNA ESPERANZA A LA VERA DEL RÍO

Calle de tierra y construcciones elementales en el barrio Nueva Esperanza.
FOTO: © Daniel Bilotta

Nueva Esperanza es una muestra en miniatura de la fisonomía irregular que puede configurarse en el conurbano por el encadenamiento de una serie de accidentes administrativos. Si bien está situado geográficamente en el partido de La Matanza, este barrio pertenece a la jurisdicción de Lomas de Zamora. Una de las consecuencias de la rectificación del curso original del río Matanza-Riachuelo en 1905, pero no la única. Otra muy llamativa es que solo se puede ingresar a él desde el partido de Esteban Echeverría, que linda con los otros dos.

Gracias a la tecnología aplicada por el INDEC a la confección de la cartografía de esa región, en el apartado correspondiente a "poblaciones" del censo 2010 se puede observar la morfología que adquiere esta curiosidad de su división política. Nueva Esperanza aparece allí como la fina punta alargada pero diminuta de una sofisticada aguja quirúrgica que se introduce punzante en Aldo Bonzi, dándole una continuidad artificial a Ingeniero Budge en el territorio de esa localidad.

Desde una perspectiva geométrica, podría ser comparado con un triángulo isósceles si no fuese por la irregularidad del lado derecho que dibuja el sinuoso cauce del río, en la mayor parte de su trayecto denominado "La Matanza". "Riachuelo" es el nombre que adquiere en la ciudad de Buenos Aires. Ese curso de agua en línea recta le da forma a la base que se despliega en paralelo al Camino de la Ribera. El lado izquierdo coincide con la demarcación que separa al partido de La Matanza del de Esteban Echeverría a la altura de San Sebastián y tiene una relevancia particular.

No hay otra forma de ingresar a Nueva Esperanza sin atravesar primero este otro barrio. El río es un límite natural para las más de sesenta manzanas distribuidas prolijamente en los tres kilómetros cuadrados de superficie que ocupa y en el que viven unas 10.000 personas. Dellepiane es su avenida principal, y finaliza en una

empinada barranca de unos seis metros de altura y con una inclinación de unos ciento diez grados sobre el margen derecho del Matanza, si se toma a la ciudad de Buenos Aires como referencia.

Una madeja de circuitos

Esa precipitación abrupta de la arteria hacia el vacío es interrumpida por el lecho de agua que corre por debajo. Entrar o salir de Nueva Esperanza obliga invariablemente a desandar el derrotero de dos rutas zigzagueantes y enmarañadas. Si se fija en la ciudad el punto de partida, una de las opciones es dirigirse hacia allí por la avenida General Paz, cruzar el Puente La Noria y tomar a la derecha la salida que lleva al Camino de la Ribera.

Por ese desvío se pasa debajo de la ruta provincial 63, más conocida como “Camino Negro”, aunque su denominación formal sea “avenida Presidente Perón”. Bordeándola se llega al Camino de la Ribera. A unos cinco kilómetros aparece el cruce con la ruta provincial 4 y, como a lo largo de todo este itinerario, es imprescindible girar nuevamente a la derecha y seguir hasta dar con una referencia infalible: lo que queda del fuselaje de un viejo avión de pasajeros. La promoción más visible de una chatarrería industrial.

Pero, para dar con él, antes es preciso recorrer cuatro kilómetros a través de Ingeniero Budge, la Feria La Salada, Villa Lamadrid y los barrios La Ribera, Presidente Perón y Antártida Argentina. Los últimos mil metros de este recorrido ya pertenecen al partido de Esteban Echeverría, donde aparece la ruta 4. Por ella se cruza el Riachuelo y se pasa por delante de lo que parece un Fokker destartalado.

Después hay que avanzar otros cuatrocientos metros, girar por última vez a la derecha en la calle Bouchard y transitar otro medio kilómetro hasta Lomas de Zamora, es decir, hasta Nueva Esperanza. Otra alternativa es ir desde la ciudad por el Puente Pueyrredón, dirigirse hacia Lomas de Zamora por la avenida Hipólito Yrigoyen y, a la altura del 8900, girar a la derecha sobre la calle Laprida hasta su intersección con el Camino Negro a la altura del barrio Parque Barón.

Allí hay que pasar por el pequeño puente en que se convierte la ruta provincial 75 sobre el Arroyo del Rey y que conduce hacia el barrio La

Loma. Un cauce que debe volver a cruzarse para dirigirse al barrio Santa Marta por la calle Homero hasta dar con el predio del Club Atlético Los Andes en Villa Albertina, una de las diez localidades de la región denominada “Cuartel Noveno” junto a las de Ingeniero Budge, Villa Fiorito, Villa Independencia, Villa Centenario, Villa Lamadrid, Villa Amelia, Santa Marta, 2 de abril y Juan Manuel de Rosas.

Ese es territorio de la zona periférica a Lomas de Zamora, ubicada al noreste y que es habitada al menos por el 40% de su población, que supera los 600.000 habitantes. Por Homero se bordea el predio municipal, se atraviesa Villa Lamadrid, y por la calle Escobar se llega a la diagonal Tuyutí, que desemboca en la avenida Juan Manuel de Rosas, pero mucho más conocida por el sobrenombre de “Olimpo”. Por ella se sale de Lomas de Zamora y se ingresa a la ruta provincial 4, se cruza el Riachuelo y luego el Matanza por Esteban Echeverría.

A cuatrocientos metros aparece la calle 3, la única cinta de asfalto que permite llegar a Nueva Esperanza para cualquiera que haya partido desde el microcentro de Lomas de Zamora. Por algunos años, la gente del barrio apeló a cruzar el río en balsa, una alternativa expeditiva pero peligrosa a esta compleja madeja de circuitos. Horacio Rodríguez Larreta estuvo cerca de presenciar esa experiencia. El 14 de octubre de 2021 visitó Nueva Esperanza en la campaña por las elecciones del 14 de noviembre.

En las PASO de la provincia de Buenos Aires, Juntos se había impuesto por unos cuatrocientos mil votos al Frente de Todos, que en las elecciones generales del 14 de noviembre consiguió reducir esa ventaja a casi la cuarta parte. Para lograrlo, el voto en las barriadas más alejadas de los centros urbanos en las regiones sur y este del conurbano fue decisivo. Desde su creación, la coalición opositora tiene serias dificultades para representar a esos electores.

Además de recoger una impresión personal de la adhesión que su precandidatura presidencial podría tener en ese universo aparentemente hostil, al jefe del gobierno porteño le interesaba saber cuánto había de cierto en la versión sobre el cruce del río aguas arriba de la barranca en Dellepiane y en dirección hacia la ciudad para acortar camino valiéndose de una balsa, que ya conocía por dirigentes de Juntos en Lomas de Zamora.

Un viaje en *pallet*

La forma en que se convino en denominar a esa precaria estructura no se ajusta a la definición clásica que la navegación hace de ella: un conjunto de maderos unidos para mantenerse a flote, un precepto ambicioso para las posibilidades de la que se utilizaba en Nueva Esperanza. Varios vecinos habían muerto ahogados en el intento y esa fue una de las razones por las que cayó en desuso. Cuando Rodríguez Larreta estuvo en Nueva Esperanza ya no se la utilizaba. Sin embargo, pudo constatar su existencia.

La tarde de aquel jueves caluroso y soleado permaneció amarrada a la sombra de un árbol en el margen derecho del río, debajo de la barranca. En realidad, la balsa consistía en la adaptación de una plataforma utilizada para empacar materiales de construcción, generalmente ladrillos, conocida vulgarmente como *pallet*. Se trata de dos rejas cuadradas de un metro y medio de superficie, conformadas por listones de maderas planas de unos diez centímetros de ancho y asidas entre sí por dos tirantes más gruesos en sus lados y otro al medio.

El 306 terminó por disuadir a los más audaces de insistir en el riesgo cotidiano de esa aventura incierta. El número es apócope de la línea de colectivos 306, propiedad de la firma Expreso Esteban Echeverría. La empresa comenzó a prestar ese servicio de transporte colectivo a fines de 2021. La conexión por ese medio con otros centros de trasbordo provoca todavía algún resquemor. Por eso, la promesa que les efectuó Rodríguez Larreta de hacer un puente que uniera Nueva Esperanza con el Camino de la Ribera cuando fuera presidente fue recibida con reparos.

La misma propuesta había sido efectuada antes por el Municipio de Lomas de Zamora y fue rechazada por un temor que nadie confiesa abiertamente: que el puente fuera copado por *soldaditos del narco*, que establecieran controles en ambos lados para exigir el pago de peaje a cambio de facilitar su tránsito. Si existiera, el puente conectaría Nueva Esperanza con Villa Lamadrid, una localidad dominada por el tráfico de estupefacientes durante el auge de la Feria La Salada.

Las causas judiciales en las que se investigó a sus propietarios por

trata de blancas, contrabando y comercio ilegal marcaron el inicio de la decadencia de la feria y, con ella, la de los talleres clandestinos en Ingeniero Budge, que la proveían de productos textiles. Para muchos investigadores, La Salada no era más que la pantalla que ocultaba el negocio de la droga. Su aparente ocaso es insuficiente para borrar la sospecha que mantienen en Nueva Esperanza sobre el vínculo del narco con Villa Lamadrid.

Con el tablero de dibujo a cuestas

El temor a que un ejército privado militarizara el barrio era una regresión movilizada por la traumática etapa posterior a su fundación, en 2000. Susana Perca tiene muy presente ese recuerdo, descripto por ella con imágenes vívidas y frescas. Hablar con Susana es entrar en diálogo con la memoria de Nueva Esperanza. Una dialéctica reveladora de los últimos veinte años de historia en el conurbano, incluso para alguien nacido y criado en ese hábitat. La conversación transcurre en un bar cerca de Plaza de Mayo.

Perca pertenece a la primera generación de argentinos en su familia, de origen boliviano. La población de Nueva Esperanza está compuesta por una amplia mayoría de esa nacionalidad. Lo mismo que en San Sebastián, el barrio contiguo donde vivían sus padres y el único portal de acceso a este predio encajonado por el río, que, curiosamente, por esa cualidad excepcional, tiene un extraño parecido con lo que en la actualidad se denomina comúnmente “barrio cerrado”. Un atractivo adicional para quienes en 2000 organizaron la usurpación de ese predio, presentándose como dirigentes del Partido Socialista Auténtico y con la intención de ensanchar la inexistente base social de esa fuerza en los barrios más populosos. Significó el primer contacto de Perca con la actividad vinculada a la militancia política, que hasta entonces desconocía por completo. Ni ella ni quienes participaron de la toma lo hicieron atraídos por alguna inquietud de ese tipo.

Su único interés real fue, y sigue siéndolo, convertirse en dueños de un bien muy preciado, pero inaccesible para los que menos tienen: una parcela de tierra para construir una vivienda. Todavía ahora, la gran mayoría de Nueva Esperanza está dispuesta a pagar por el espacio que

ocupa. Perca comenzó a asistir a las reuniones previas a la usurpación cuando regresaba de cursar el último año de la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata, de donde egresó con ese título. Era una perfecta desconocida entre tantos.

A los supuestos dirigentes les llamó la atención el tablero de dibujo que siempre llevaba consigo. Le preguntaron qué estudiaba y la pregunta resultó providencial, ya que al poco tiempo era una de las máximas responsables en planificar la urbanización del futuro barrio para evitar el hacinamiento. Pero sobre todo los laberínticos pasillos, que permiten la circulación interna pero se superponen con las viviendas, una de las principales causas de conflicto entre quienes las habitan y que, por lo general, se resuelve de manera muy violenta.

Esa rígida guía para conservar un orden espacial se llevó adelante en el año previo a la usurpación, un tiempo récord en el que la futura arquitecta se encargó de transformar en una esperanza nueva todo lo que al principio era solo tierra y agua. El barrio le debe su nombre a esa génesis. No resultó un trabajo sencillo. Los lotes fueron asignados de acuerdo con la cantidad de miembros en cada familia. Los de mayor extensión se adjudicaron a las más numerosas.

La tarea más compleja consistió en encuadrar, dentro de esa planificación rigurosa, a los que llegaban con su vivienda a cuestas. Sobre todo, para mantener libres de esos trapos y maderas los tres mil metros cuadrados de superficie lineal en los que se previó la traza de la calle 3, una ancha avenida de diez cuadras de longitud, imaginada como el futuro centro comercial y una conexión directa a Dellepiane. Perca fue de las primeras en descubrir la cara oculta del plan en apariencia idílico de aquellos seudodirigentes. Su máscara cayó cuando le exigieron que planificara otro barrio. Esta vez en Villa Lamadrid: del otro lado del río.

El supuesto emprendimiento transformador trocó entonces en la explotación de un vil negocio inmobiliario montado sobre la desesperación de los necesitados. Una actividad que encuentra, en la abundancia de tierra sin uso, un nicho de oportunidades importante para su desarrollo. En el segundo y tercer cordón la superficie rural supera el 40% del territorio. La mayoría tiene propietarios: privados o el Estado.

Golpizas

Perca se negó a participar en el proyecto y ese fue el comienzo de las tensiones con la patota socialista, que abandonó cualquier pretensión de liderar al barrio desde las ideas utópicas y pasó a ejercer la autoridad con un poder sostenido en la ostentación de armas de fuego y el riesgo latente de utilizarlas. Fue el inicio de la aplicación de métodos violentos para exigir el pago de la cuota mensual por los lotes. Los retrasos e incumplimientos se castigaban con golpizas brutales, sin excepción, a todos los miembros de cada grupo familiar. La recibían por igual padres e hijos.

A eso se sumó la reventa de propiedades cada vez que la crecida del río desbordaba sobre el barrio y obligaba a sus ocupantes a abandonarlas. Igual que los desalojos compulsivos, todas esas medidas coercitivas se ejecutaban durante la madrugada y a punta de pistola. En 2003 comenzó a madurar la idea de enfrentar a la patota. La planificación inicial diseñada por Perca le había asignado un número a cada manzana. Tal vez por su ubicación privilegiada en el centro del barrio, los vecinos de la 20 desarrollaron entre sí fuertes lazos de confianza.

De ellos surgió la propuesta de organizar asambleas donde cada manzana tuviese dos representantes. Perca lo fue por la 20. De allí nació la idea de instalar alarmas comunitarias en cada una. Cada vez que la patota intentaba ingresar a una vivienda alguien la activaba y todo el barrio salía a la calle. La eficacia de este mecanismo de defensa duró poco, ya que la patota la contrarrestó aumentando el número de sus miembros.

La indignación con aquella situación lleva a Perca a un viaje a toda velocidad hacia ese pasado. El sol cae a pico sobre la Plaza de Mayo una tarde de mediados de noviembre de 2022. En un café cercano, la arquitecta accede a dialogar y a contar esta historia extraordinaria de superación. Desde esa colina, recuerda lo inconcebible que le resultaba que veinte o treinta personas pudieran imponerse a más de seis mil.

No fue ella quien propuso una respuesta proporcional a la patota. Es decir: enfrentarla con armas de fuego. Si sabe quién lo hizo, lo disimula. Prefiere no hablar de eso. Tampoco de los detalles de la

noche de 2005 en que los hombres del barrio hicieron que las mujeres buscaran refugio seguro. Ellos esperaron en las sombras a la patota para cumplir con el plan que se habían trazado: correrla, literalmente, a los tiros.

Eso hicieron. El ruido de la balacera ni el olor de la pólvora quemada por los disparos y fácilmente esparcido por la brisa del río pareció llamar la atención del destacamento policial en Puente La Noria. O, tal vez, es posible que desde algún estamento impreciso alguien supuestamente innominado haya dado la orden de no intervenir. Probablemente, lo mismo que ocurrió muchas veces ante las denuncias de amedrentamiento efectuadas por los vecinos de Nueva Esperanza. Después de aquel tiroteo, los violentos parecieron esfumarse. Pero para Perca su desaparición fue apenas una sugestión. Las amenazas que recibió por teléfono, en la calle y en su trabajo, la obligaron a abandonar el barrio por un tiempo.

Tendiendo redes

En 2004, se encargó de colaborar en resolver otros dos temas esenciales: la provisión de agua potable y la regularización de dominio de sus viviendas. Se resolvió que la conexión a la red de agua sería una prioridad, incluso a la del tendido de otra red para abastecerse de energía eléctrica.

Fue una elección lógica. No solo porque algunos barrios persiguen la regularización de dominio hace medio siglo sin éxito. También porque ser reconocido como cliente por una empresa de servicios públicos acredita la posesión de una propiedad. Los hechos le irían dando la razón. Lograr que llegara el agua potable les serviría, además, para no desplazarse hasta el Olimpo a buscarla.

El Olimpo es uno de los diecisiete barrios de la localidad de Santa Catalina, también ubicada en la región noreste de Lomas de Zamora. En línea recta, esos barrios están separados por dos kilómetros. Pero entre ellos se interpone, además, el río. Eso hace que la distancia sea de 4,3 kilómetros, que durante mucho tiempo recorrieron los vecinos para dar con la fuente de agua potable ubicada en la intersección de las vías del ferrocarril Roca y la avenida Juan Manuel de Rosas/

Olimpo. Nombre que, por asociación, también recibe la feria que casi de forma permanente funciona sobre la avenida y es la más importante de la zona. Pero es también motivo de conflicto por el trato desigual hacia los comerciantes con negocios sobre las veredas. Ellos pagan tasas, mientras que la feria no. Hasta ese lugar, que impacta por el colorido de su actividad y la multitudinaria convocatoria que concita un día de semana a media mañana, tenían que llegar desde Nueva Esperanza para acceder a lo que rápidamente se convirtió en un servicio arancelado. Había que pagar por el agua.

En Nueva Esperanza les pareció más lógico abonarle a Aguas Argentinas (AA), la empresa concesionaria oficialmente a cargo de prestar el servicio. Los pedidos de audiencia a la firma francesa fueron acompañados por movilizaciones a la sucursal Lomas de Zamora. Un gerente de esa nacionalidad accedió finalmente a entrevistarse con una delegación. Perca, por supuesto, la integraba. Después de varias reuniones les ofrecieron ser parte del Modelo Participativo General (MPG), la forma en que los franceses resolvieron abordar el problema que les planteaba casos como el de Nueva Esperanza.

La presentación de una propuesta técnica era la condición indispensable para acceder a ese programa de financiamiento de las obras necesarias para proveer de agua potable a aquellos barrios que persuadieran a Aguas Argentinas de la factibilidad de su realización. Perca no tuvo elección para escapar al que parecía ser su destino inexorable: quedar involucrada en cualquier hecho trascendente ligado al progreso del barrio. Por formación, fue elegida para realizar la presentación ante AA. Nueva Esperanza fue uno de los barrios seleccionados para el MPG, que contenía otra particularidad: contemplaba la participación de los vecinos, Aguas Argentinas y el Municipio de Lomas de Zamora. La empresa quedaba encargada de la capacitación, los vecinos aportarían la mano de obra y el Estado personal técnico.

A último momento, el municipio desistió de participar en esa experiencia, que el grupo francés abordó con seriedad. Pero también con sentido común. Para planificar las obras, a los ingenieros y arquitectos de AA les pareció lógico respaldarse en Perca, que sentaría un precedente ineludible. Ese modelo fue la base para la provisión de

agua a toda Santa Catalina, que triplica en número de habitantes a Nueva Esperanza. Tal vez por su propia historia, los franceses comprendieron la importancia de abordar la cuestión territorial implícita en estas obras.

Hasta la intervención de AA, el municipio carecía de un relevamiento catastral de toda Santa Catalina. Pudo hacer el primero con los planos del MPG, que su Departamento Ejecutivo le pidió a la empresa a través del Concejo Deliberante. Los trabajos finalizaron en 2006 con los vecinos de Nueva Esperanza convertidos en usuarios de AA. Como al comienzo el correo no ingresaba al barrio, ellos mismos se encargaban de la distribución de las facturas casa por casa.

Desde inicios del siglo XXI, la abrumadora mayoría de los intendentes del conurbano es renuente a convalidar este tipo de conquistas, que obligan a los municipios a incluir esas nuevas realidades en la trama urbana de los territorios bajo su gobierno. Eso implica rectificaciones significativas a los planes de pavimentación, alumbrado público, centros de salud y de gestión de trámites. Pero también la afectación de recursos a esas obras de infraestructura para conectar entre sí y con los cascos céntricos a locaciones muy alejados de ellos.

Esa mirada, que contrasta con la desarrollada por el gobierno porteño para integrar la ciudad con las villas que la circundan, es una de las causas que dificulta la mayoría de los procesos de expropiación en la Legislatura bonaerense. El peso de los intendentes en ese cuerpo es un obstáculo que debe eludir el gobierno para aplicar la Ley 14.942, que lo habilita desde 2001 a cumplir con ese trámite. Los vecinos procuraron contactarse con los propietarios del predio para sortear esta reticencia. Así llegaron hasta Safe Place, una sociedad anónima en la que Darío Díaz Pérez figuraba como accionista.

Crónica de una relación conflictiva

Antes de ser intendente de Lanús, Díaz Pérez continuó con la empresa familiar, fundada por su padre y homónimo, dedicada a la compra y venta de bienes raíces. Como no podía ser de otra forma, Perca fue parte de la delegación que se reunió con el representante legal de la

firma, con oficinas en Puerto Madero, a quien le efectuaron una propuesta audaz: comprarle la propiedad.

Safe Place no aceptó. Estimó que no estaban en condiciones de garantizar el éxito de esa operación, es decir, pagar por su valor. Entonces les aconsejó insistir con la expropiación. Pero, además, hizo su contribución. Se encargó de conseguirles, y de abonar, los servicios de un abogado. En 2015, la provincia de Buenos Aires compró las tierras de Nueva Esperanza. A fines de 2022 seguía sin resolverse el traslado de dominio del gobierno bonaerense al Municipio de Lomas de Zamora: un trámite indispensable para ser reconocidos como propietarios.

Además de permitir a los vecinos tener su título de propiedad, habilitaría al Estado a cobrarles tasas e impuestos. Las autoridades municipales aseguraron que, para que la Fiscalía del Estado bonaerense reconociera al gobierno provincial la propiedad del predio, era preciso que primero se resolviera el trámite sucesorio en el pago de honorarios al abogado que había intervenido en la causa por Nueva Esperanza. Recién con ese trámite cumplido, el gobierno bonaerense podría delegarlo en el municipal.

Hasta ahora, la tensa relación con el municipio obstruiría las inversiones en obras de infraestructura que podría realizar la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), dedicadas específicamente a los complejos habitaciones ubicados en las orillas del río. La Acumar fue creada por ley después de la sentencia definitiva que la Suprema Corte dictó en 2008 en el denominado “Caso Mendoza”.

Beatriz Mendoza es psicóloga social y fue una de las diecisiete personas que en 2002 iniciaron una demanda contra el Estado nacional por la contaminación del Riachuelo sindicándolo como responsable de los desechos que volcaban en él cuarenta y cuatro empresas... Ese año descubrió que tenía en la sangre seis veces más tolueno (un tóxico derivado del petróleo) del tolerable para cualquier persona. La exposición a esta sustancia se había producido mientras Mendoza atendía en el centro de Salud que tiene el Municipio de Avellaneda en la localidad de Villa Inflamable.

La Corte le ordenó al Estado nacional, el bonaerense y a la ciudad

sanear la cuenca del río, el agua, el aire y el suelo a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El máximo tribunal se declaró incompetente para resolver otro de los reclamos contenidos en la demanda, un resarcimiento económico a los contaminados por ese tipo de intoxicación.

Veredas, cestos y el número en el frente

Esta crónica de la relación conflictiva entre el Estado y Nueva Esperanza no obstruyó, sin embargo, que en 2009 el Ministerio de Desarrollo Social incorporara a Perca a su planta de personal técnico gracias a Emilio Pérsico, que desde 2008 era subsecretario de Comercialización de la Economía Social. Pérsico es uno de los líderes del Movimiento Evita y, a diferencia de otros funcionarios, quedó gratamente impresionado por la pericia organizacional que Perca había aplicado en Nueva Esperanza.

Pérsico intercedió también para que por primera vez el Municipio de Lomas de Zamora contribuyera con obras en el barrio a través del programa de construcción de veredas efectuadas con los beneficiarios de programas de desempleo. Eso marcó el inicio de un cambio sustancial. Con la primera plataforma por la que podían desplazarse sin pisar el barro en día de lluvia, los vecinos desarrollaron otra perspectiva de sus viviendas. Ya con un domicilio fijado frente a Aguas y Saneamientos (AySA), cada uno colocó al frente de la suya una placa con el nombre de la calle y la altura.

A esa transformación le siguieron otras muy significativas. Se desplegó uno de los rasgos edilicios típicos de la comunidad boliviana en el conurbano: el máximo aprovechamiento de la superficie para levantar edificios de hasta tres pisos. Ingeniero Budge es el mejor ejemplo de esa arquitectura, caracterizada también por otro rasgo artístico peculiar en los enrejados, por lo general, rectángulos con puntas bien redondeadas. Los lados se confeccionan con caños huecos, y la superficie, con alambre grueso dividido en cuadrados perfectos. La pintura verde predomina en la mayoría de ellas.

En la Argentina, y especialmente en el conurbano, los bolivianos se destacan por una inusual contracción al trabajo que despliegan,

incluso a deshora o en los días dedicados al descanso. Pero sobresalen todavía más por su capacidad de ahorro, algo que le permitió a Nueva Esperanza contar con mayor fuerza laboral en la construcción cuando la demanda superó a la oferta de mano de obra local. Así pudieron contratar otra de calidad en 9 de abril, un barrio de Esteban Echeverría en el que la mayoría de sus habitantes son paraguayos. Y casi todos, albañiles de profesión.

En este modelo, sin embargo, la estética está en un segundo plano. La prioridad es aislar el interior de las viviendas con revoques y dejar despojado el exterior, donde relucen a simple vista los perfiles de los ladrillos huecos, una práctica destinada a racionalizar el gasto en materiales. Así y todo, el barrio se fue embelleciendo. Además de la aparición de cestos para los residuos luego de la construcción de la vereda, pagaron la pavimentación de diez cuadras de la calle 3 y luego de otras cinco más.

Para eso se organizaron colectas por el frente de cada una de ellas. El éxito de ese modelo llevó a otros barrios a replicarlo. Así ocurrió con los de 7 y 8 de agosto, Mariscal Sucre y el Sarmiento. La situación litigiosa entre el municipio y el barrio parecía atenuada a fin de 2022. En octubre se iniciaron los trabajos de pavimentación de la avenida Dellepiane. Aunque es probable que su traza, muy por debajo de la alta barranca en que termina sobre el río, sea cubierta por las inundaciones que cada cinco años provocan el desborde de este en jornadas de lluvias intensas. Lo mismo que el casco céntrico de Nueva Esperanza si no se llevan adelante obras de desagotes pluviales.

Para las autoridades, Nueva Esperanza es el más conflictivo de los diecisiete barrios de Santa Catalina. El último episodio de esa saga ocurrió en 2018, cuando, a través de una página de Facebook, los vecinos reclamaron por el supuesto incumplimiento con un convenio del Acumar que obligaba al municipio a realizar obras de infraestructura.

La página fue bloqueada. Aparentemente, por la denuncia de un usuario que se sintió damnificado. Otro hecho llamativo fue el intento de usurpar las tierras que el barrio había reservado y mantenía en custodia para la construcción de un jardín de infantes. El grupo responsable provenía de Villa Fiorito, la localidad situada enfrente de

Ingeniero Budge y separada de ella por el Camino Negro. Allí el peronismo hace valer su influencia en las elecciones, donde colabora activamente la barra brava del Club Atlético Los Andes.

Una carta que es leyenda

Pero el episodio que Perca tiene muy presente ocurrió en 2007, cuando recibió una respuesta por carta a una solicitud efectuada al municipio. No recuerda el nombre del funcionario que firmó aquel mensaje ni el contenido preciso, pero sí el tono destemplado en el que les desconocía el derecho a peticionar. Ella entonces reaccionó con furia. Mandó a reproducir cientos de copias de la carta y las hizo colocar en sobres. Alquiló un micro afectado al transporte escolar y lo cargó de vecinos.

Cada uno subía con dos copias ensobradas de aquella misiva. Perca sabía que aquella noche Cristina Fernández de Kirchner encabezaría un acto de su campaña presidencial en la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), cuya sede se encuentra en lo que fueron los viejos tallares ferroviarios de Remedios de Escalada. Hacia allí se dirigió el micro repleto de vecinos.

El pronóstico había anticipado que la noche sería más fría que aquella tarde. En Nueva Esperanza hay muchas madres solteras. Por eso, varias tuvieron que viajar con sus hijos para no dejarlos solos. La memoria la traiciona y no consigue precisar si corría el mes de julio o de agosto.

Cuando llegaron a la universidad fueron ganados por el desaliento. Comprendieron lo difícil que iba a ser cumplir con el propósito con el que habían llegado: que al menos uno pudiera acercarse a Cristina y entregarle una copia con la respuesta del funcionario municipal a sus reclamos. Un doble vallado rodeaba la zona del escenario, al que se sumaba un fuerte anillo de seguridad para custodiar a la candidata a presidenta. Perca miró a su alrededor tratando de dar con lo que en apariencias no tenía, una solución a ese imprevisto que no estaba en los cálculos que había realizado cuando imaginó darle la carta.

Del cielo plomizo llegaba el ruido de un helicóptero acercándose. Repasó rápidamente el terreno, un ejercicio al que estaba

acostumbrada. Después de todo, era la materia prima de su trabajo. A golpe de vista observó que la única posibilidad de hacer contacto con Cristina dependía de acercarse al trayecto que tenía que recorrer entre la aeronave de la que descendería y el inicio del primer cerco de vallas. Ese era el único espacio libre y sin vigilancia. Aunque, probablemente, Cristina estaría acompañada por sus custodios. Mientras evaluaba cómo hacerlo, detectó cerca la presencia de un menor de edad del barrio, que no superaba los diez años. El nombre es uno de los secretos que pidió preservar. Hoy es mayor de edad y sigue viviendo allí.

Perca lo llamó y le explicó lo que había estado pensando en ese breve lapso en que el helicóptero ejecutaba la maniobra de aterrizaje. Tenía que correr entre las vallas sin mirar atrás, donde, de seguro, aparecería personal de seguridad que trataría de atraparlo. Debía eludirlos. Pero, sobre todo, alcanzar a Cristina y entregarle el sobre. Para cerciorarse de que había comprendido esas instrucciones le preguntó si la conocía. La respuesta del pequeño la descolocó: "¿Quién es?".

La escena fue contemplada por un militante del Frente para la Victoria, que contribuyó a aclarar esa duda. Nunca se sabrá si por sorpresa, por solidaridad o por una combinación de esas dos probabilidades, desplegó un folleto de campaña con la foto de la candidata. "Es esta", le dijo al chico. "Ah, sí. ¡La colorada!", exclamó él. Lo que sucedió después fue parecido a lo que Perca le pidió. Corrió apenas Cristina bajó del helicóptero y comenzó a transitar los pasos que la separaban de la zona donde estaba el escenario.

El chico supuso que los gritos desencajados que escuchaba detrás provenían de los custodios. Temió que lo alcanzaran sin que cumpliera la misión que le habían encomendado. "¡Cristina, Cristina!", le gritó. Entonces ella dejó de avanzar, giró sobre sus pasos y, como un agente de tránsito, les dio a los custodios la orden de detenerse. Intercambiaron unas palabras. Ella tomó el sobre y lo guardó. Un rato después, el menor, hoy un adulto, reconstruyó para los vecinos aquel diálogo.

—¿Qué hacés acá a esta hora? Es tarde y hace mucho frío —le dijo Cristina.

—Vine porque tenía que darte este sobre. Para nosotros es importante que vos leas esta carta —le respondió él.

Ni Perca ni nadie en Nueva Esperanza supo qué pasó con aquella carta. Todo lo que se teje desde entonces alrededor de ella son conjeturas. El empeoramiento de la relación con el funcionario que la firmó tal vez sea el indicio más sólido de que Cristina la leyó.

En los pasillos de cualquier palacio municipal abundan las leyendas. El de Lomas de Zamora no tiene por qué ser una excepción. En una de ellas se alude a este episodio. Y quizás lo exagere. Resulta lógico; de otro modo, no sería una leyenda.

Lo cierto —dentro de lo que pueda tener de falso— es que, en ese relato, Cristina no solo la leyó. También se habría comunicado con las más altas autoridades del municipio, probablemente para pedir explicaciones. Puede que sea producto de la casualidad, pero desde entonces Perca recibe críticas en las redes en cada campaña electoral. Nunca fue candidata por ninguna fuerza política, pero, sin dudas, es alguien cuyo liderazgo es reconocido en el barrio.

No se atreve a asegurarlo, aunque no descarta que alguien del Municipio de Lomas de Zamora esté involucrado. Tampoco tiene certeza absoluta de que su imaginación no le juegue una mala pasada. Más de una vez le pareció reconocer varios rostros de aquellos violentos que, escudados en la sigla del Partido Socialista Auténtico, incitaron la usurpación que dio origen a Nueva Esperanza. Le pareció reconocerlos entre funcionarios de organismos descentralizados, del Acumar, del gobierno bonaerense e incluso del gobierno nacional. Pero prefiere no hacer hincapié en ese asunto. Y, si fuese posible, olvidarlo.

La tarde se está apagando mientras una manifestación tiene lugar en Plaza de Mayo. La conversación termina y también los dos pocillos de café consumidos. Perca insiste en pagar la cuenta.

DB

5

La escuela de Tigre invadida por sus vecinos

Uno de los boquetes hechos en la Escuela Primaria N° 7, de General Pacheco (Tigre), por vecinos del barrio; usaban el patio, los baños, el jardín…
FOTO: © Gentileza *La Nación*

Una escuela invadida por decenas de vecinos. Su patio, convertido en canchita de fútbol del barrio, y el tanque de agua, en pileta de natación. De los baños sale, envuelto en una toalla, un desconocido que acaba de ducharse. Alguien lleva caballos para que pasten en el jardín. De pronto la directora se ve obligada a llamar de urgencia a un recreo porque en horario de clases irrumpen veinte personas y se arma un "picado". Los fines de semana, intrusos instalan parrillas, ponen música a todo volumen y retozan al sol. Es habitual que haya guerras de padres en la puerta… A veces no alcanza con llamar al orden, y entonces hay que llamar a la policía.

Demasiado exagerado si se tratara de una ficción, y demasiado crudo cuando todo eso es auténticamente real: así transcurre el día a día de la Escuela Primaria N° 7 Baldomero Fernández Moreno, de General Pacheco, partido de Tigre, en el norte del conurbano; en el mismo edificio funciona también la Secundaria N° 14 Maestra Rosa María Casariego.

No es un caso aislado, ni mucho menos. Desde hace años, cientos de escuelas del conurbano dejaron de ser solo escuelas, y sus docentes, solo docentes. Abrir cada mañana las puertas es un desafío: no se sabe cuántos alumnos irán a clase (los días de lluvia, el ausentismo crece exponencialmente), en qué condiciones se presentan o qué llevan en la mochila. Al mediodía, los salones de actos se convierten en comedores, donde miles de chicos reciben, quizá, la única ración con la que se alimentarán ese día; a la noche, los establecimientos pueden transformarse en botín de ladrones que buscan desde lamparitas y muebles, hasta canillas y computadoras.

Las aulas reflejan patéticamente los dramas de los barrios en los que están ubicadas: pobreza, hambre, ausencia de servicios públicos (agua, cloacas, luz, gas), conflictividad familiar, violencia, inseguridad, narcotráfico…

"Yo pensaba que me iba a dedicar a enseñar, pero resulta que

también tengo que ser un poco psicóloga, un poco asistente social, un poco enfermera de primeros auxilios", contó por televisión una maestra de primaria de Almirante Brown, una de las tantas heroínas para las que ir a trabajar puede suponer un riesgo. "Sinceramente, el trabajo de contención que hacemos es casi más importante que las clases que damos. Hay nenes a los que les falta el padre o la madre, o que son sometidos a maltratos, o que sus padres son alcohólicos o se drogan, o que alguno de los dos está en la cárcel. Obviamente todo eso tiene su correlato en el aula".

No solo fútbol

El edificio de Pacheco que comparten la Primaria N° 7 y la Secundaria N° 14 es fiel testigo de las penurias que atraviesan cotidianamente las escuelas de zonas sumergidas del conurbano. Un sábado de marzo de 2017, por la mañana, un grupo de vecinos arremetió a mazazo limpio contra la pared del fondo del predio. De la faena participaron personas grandes y adolescentes, y derribar un sector de dos metros de largo por dos de alto les llevó menos de cuatro horas. No se proponían tomar por asalto las aulas, despachos o la cocina. Cuando el último de los ladrillos había cedido, el botín fue la canchita de fútbol del patio principal, que es descubierto. Enseguida se armó un partido. La cosa funcionó tan bien que siguieron usando la cancha todos los fines de semana durante años.

La historia ilustra el contexto social en el que se desarrolla muchas veces la educación pública en la provincia de Buenos Aires, y también las limitaciones presupuestarias: aunque la pared fue reconstruida, los vecinos no estaban dispuestos a perder su conquista e inmediatamente le hicieron un boquete a la nueva; hasta que se pudo levantar un muro más alto y reforzado, a prueba de forajidos, pasó mucho tiempo. Un reclamo de larga data de las escuelas es que no tienen dinero no ya para reformas, ampliaciones o compra de computadoras, sino para cambiar un vidrio roto, destapar una rejilla o arreglar la puerta de un baño. Suele ocurrir que los directivos les hagan frente a esos gastos con dinero de sus bolsillos.

No es difícil explicar los problemas de caja del Ministerio de

Educación bonaerense: el 95% del presupuesto está destinado al pago de sueldos, en su mayoría de docentes. Es la estructura educativa más grande del país: 16.000 escuelas, 275.000 maestros y profesores, 125.000 auxiliares, 3,5 millones de alumnos.

Para los vecinos invasores de Pacheco, los partidos en la cancha del patio al aire libre fueron apenas el primer impulso. Pronto descubrieron que esas instalaciones, que no cuentan ni con alarmas ni personal de custodia, equivalían a una suerte de club abierto y gratuito: allí había mucho espacio, jardín, árboles, baños… Los sábados y domingos, el patio se transformaba en epicentro del barrio: se congregaban familias enteras y además de fútbol había asados, música, baile, inclusive por las noches.

"Directamente se apropian del lugar, lo usan como si fuera de ellos. Los lunes, cuando volvemos, nos encontramos con cada cosa…", decía la entonces directora, Lucía Rolón, hoy ya jubilada.

Contrastes

En esa zona, Pacheco tiene mucho que envidiarle al Tigre glamoroso, donde florecen algunos de los *countries* más exclusivos del país. El entorno de la escuela es, como buena parte del GBA, ferozmente desigual. A un costado tiene, separado por un muro perimetral que termina en un rodillo de púas, el barrio privado Barrancas de Santa María, con sus grandes chalets, jardines, piletas y lagunas; por detrás, asentamientos y villas, y el arroyo Las Tunas, en cuyos márgenes se ven caseríos y ranchos, a su vez linderos con otros cotizados *countries*: Talar del Lago 1 y 2. Muy cerca de ellos, Nordelta.

El cielo y el infierno, pared de por medio.

Hasta la nomenclatura urbana de ese rincón de Tigre parece hablar de un sitio singular, producto de la improvisación o el descuido. La escuela está en la esquina de Padre Nuestro y Talán Talán. Muchas otras calles del barrio tienen nombres igualmente llamativos: Ventanita, Corazón, Francesita, Agua Bendita… Y se ve que en un momento se agotó el ingenio: Calle 1, Calle 2, Calle 3.

En la escuela N° 7, con alumnos que en su mayoría provienen de las villas vecinas o barrios bajos, se vive cotidianamente una realidad

común a cientos de escuelas bonaerenses de zonas marginales: chicos sin hábitos de convivencia, padres que amenazan a los maestros, ataques a los edificios, robos. “Es un barrio de alta vulnerabilidad y hay que lidiar con la droga, el alcohol y situaciones familiares muy complejas —declaró años atrás la entonces directora, Rolón—. La integridad física de los docentes está permanentemente en riesgo. Eso cansa y enferma”.

Verónica Leiva, actual vicedirectora, lo confirma. “Familias vecinas que están enfrentadas se encuentran acá, en la puerta, cuando vienen a traer a los hijos, y puede pasar cualquier cosa. Incluso hemos tenido que llamar al patrullero. Hay chicos a los que los hacen faltar precisamente para evitar las peleas. Otros no vienen porque han quedado al cuidado de tíos o abuelos y pierden continuidad”.

¿Cuántos alumnos tiene la primaria? “Unos trescientos”, responde Leiva. “Unos” significa que resulta imposible hablar de una población escolar estable. La deserción es un verdadero flagelo en toda la provincia: de cada diez chicos que empiezan la primaria en escuelas públicas, la mitad no completa la secundaria; queda fuera del sistema educativo, en la calle. Entre quienes continúan sus estudios, el 65% no sabe hacer operaciones básicas de matemáticas y el 50% tiene graves deficiencias en lengua, según los resultados de las pruebas Aprender.

También es habitual la ausencia de docentes. En la primera visita a la escuela de Pacheco, en 2017, para conocer el tristemente célebre boquete por el que se colaban los vecinos, poco antes del mediodía había chicos de la secundaria que deambulaban por los pasillos, se reunían para charlar o jugaban al ping-pong o al fútbol. “Tuvimos muchas horas libres porque faltaron varios profesores”, explicó una chica de tercer año que, de jeans y remera, se entretenía con su celular sentada en el piso del patio.

El altísimo nivel de ausentismo docente es uno de los fenómenos más alarmantes de la educación pública en la provincia y causa de estragos pedagógicos y económicos: según datos oficiales, solo el 28% de los docentes tiene asistencia perfecta, y el 25% falta más de 50 días por año. Hay meses con más de 90.000 licencias por enfermedad (equivale a la tercera parte del total de docentes). Las normas indican que “maestro (o profesor) que falta, maestro que debe ser

reemplazado", y muchas veces se necesitan hasta dos y tres suplentes para cubrir al que está con parte de enfermo. Así, más de 90.000 licencias originan la contratación de no menos de 150.000 suplentes. En un año lectivo se llegan a perder hasta 700.000 horas cátedra por ausentismo, y el costo económico anual que implica reemplazar a los que faltan es superior a los 160.000 millones de pesos (unos 400 millones de dólares).

La comparación con las escuelas privadas que tienen subvención estatal y dependen del mismo ministerio deja la realidad al desnudo. El 30% de faltas en la esfera pública cae al 0,2% en la privada. Otro dato alimenta las sospechas de abuso: los viernes y los lunes son los días con más inasistencias; de las 3000 diarias se pasa a 6000.

Romina Del Plá, sindicalista docente y diputada nacional por el Partido Obrero, no niega que el ausentismo es un problema, pero lo atribuye a las condiciones de trabajo. "Los docentes tenemos que hacer hasta dos y tres turnos para llegar a fin de mes, los edificios son un desastre, no se planifica la actividad ni se previenen las lesiones y enfermedades más habituales, sufrimos agresiones... ¡Y nadie nos protege!".

Zona de riesgo

La crítica de Del Plá al estado de los edificios —muchos de ellos, alquilados— se aplica perfectamente a cientos de escuelas que apenas sobreviven, víctimas del paso del tiempo, de la falta de mantenimiento y también de agresiones. En el conurbano se producen mensualmente unos cinco robos o ataques a escuelas, cifra que no incluye acciones de ratería y de vandalismo menor. En general, ocurren los viernes y sábados a la noche, y el blanco preferido de los ladrones son los insumos informáticos, los que más cuesta reponer.

La escuela de Pacheco, violentada para convertirla en plaza pública y polideportivo, ha sufrido también otras incursiones. En el Ministerio de Educación provincial está catalogada como "zona de riesgo", por lo cual su personal recibe un plus salarial. "Acá atravesamos situaciones muy conflictivas, que no son fáciles de manejar", dice Leiva, la vicedirectora.

Un día, en la escuela descubrieron que los fines de semana un señor de la zona llevaba su caballo a pastar en una franja verde que atraviesa el predio; el césped no abunda en ese barrio marginal, con casitas que parecen apretarse una contra otra. Metía el animal forzando un portón ubicado sobre la calle Padre Nuestro, por el que ahora ingresan los alumnos de la secundaria. Hubo que reforzar esa entrada. En otra escuela de la zona pasaba lo mismo: un vecino usaba el jardín para alimentar a su caballo. Como el señor usaba ese caballo para hacer un reparto de verduras, las autoridades de la escuela llegaron a un acuerdo con él: podía seguir llevándolo a pastar, pero a cambio tenía que entregar verdura para el almuerzo de los alumnos. Pastura por verdura: en el conurbano, el trueque a veces tiene expresiones muy singulares.

En otra oportunidad, durante los tiempos del boquete, un vecino salió recién duchado del baño de la primaria, con una toalla que le daba vuelta la cintura; en las manos llevaba un frasco de champú. Sofocón en las aulas.

En ocasiones, la invasión futbolera de “los del pueblo” (como los llaman en la escuela) ocurría los días hábiles y en plena hora de clases; entonces, la consigna era hacer sonar el timbre y llamar a un recreo, sin salida al patio externo, convertido nuevamente en canchita.

El tanque de agua, sobre los techos del segundo piso, fue otro tesoro que atrajo a la gente del barrio. Durante los veranos, se las ingeniaban para hacerlo derramar un torrente aliviador. “Convirtieron esa zona en una especie de pileta de natación”, cuenta Estela, que vive en una casa pegada a la escuela. “Alguna vez se pusieron pesados y tuvo que venir la policía para sacarlos”.

Todo el edificio está cubierto por un tejido metálico, que en algunos sectores del frente fue arrancado. “Se lo llevan para después venderlo”, dice Leiva. “En el Municipio de Tigre nos dijeron que van a reponerlo, pero no sabemos cuánto va a durar”.

En el primer piso, cerca del despacho del director de la secundaria, sobre una pared está apoyado un cartel grande de chapa con el nombre de la escuela, que una noche también fue arrancado de la fachada.

“Es terrible”, se queja amargamente Estela, la vecina. “No respetan

nada”.

CMRR

6

La vecindad del cartón

Calle Unamuno, uno de los ingresos a Villa Fiorito. Restos de basura llevada desde la Capital Federal para buscar materiales reciclables.

FOTO: © Daniel Bilotta

Cité a NT durante mucho tiempo sin saber quién era. En 2021 conté con frecuencia una anécdota que lo involucraba directamente porque me parecía un ejemplo apropiado para explicar por qué el peronismo conservaba un significativo ascendiente electoral en la población de la periferia del conurbano. Lo hice la mayoría de las veces que fui convocado a exponer durante la campaña sobre el eventual resultado de los comicios de ese año. A ese efecto, sus datos personales carecían de relevancia frente a lo que en ese momento me pareció importante: evitar que la atención de quienes me escuchaban pudiera distraerse con una información accesoria. La necesidad de conocer su nombre y apellido se volvió ineludible casi dos años después, cuando con Carlos M. Reymundo Roberts decidimos incluir esa historia en este libro.

Pero, cuando finalmente los tuve, resolví protegerlos con una sigla que no reflejaba la abreviatura de los originales. Si aparecieran, la persona en cuestión podría sufrir una pérdida significativa en sus ingresos. O, tal vez, su trabajo. Lo que sigue es la reconstrucción de la forma en que me enteré de ese acontecimiento por Guillermo Viñuales, con quien conversé regularmente durante los diez años que fue el jefe de Gabinete del intendente Martín Insaurralde. Nuestras reuniones pasaron a ser más esporádicas cuando renunció a ese cargo el 10 de noviembre de 2020. En la que mantuvimos unos días antes de que ese año finalizara tuve la primera noticia de NT.

La calle donde vivió Diego

Un mes después de abandonar la función pública, Viñuales recibió en su domicilio la visita de un grupo de vecinos de Villa Fiorito que le contaron que un sobrino de NT había fallecido pero que ni él ni su familia tenían el dinero suficiente para comprar un cajón y cumplir con la ceremonia del velatorio. Las novedades suelen llegar tarde a los

barrios alejados de los centros urbanos y recién en ese momento ellos se enteraron de que Viñuales había dejado de ser funcionario. Mientras lo fue, era el de mayor jerarquía del municipio, con la responsabilidad de visitar las zonas más alejadas y de atender sus requerimientos. Por eso habían recurrido a él.

Por lo general, los presupuestos municipales tienen partidas específicas de subsidios para resolver emergencias de este tipo. La sorpresa de quienes intentaban asistir a NT fue mayúscula: la solución que habían imaginado se les esfumaba. Viñuales percibió la desesperación de quienes se habían presentado en su casa un sábado a la tarde. Aunque ya no pertenecía al gobierno municipal, contribuyó para que NT consiguiera el cajón.

Hasta allí, podría ser apenas la crónica de una de las penurias que a diario padecen quienes forman parte del mayor bolsón de pobreza que tiene la Argentina. Pero lo que atrapó mi interés fue lo que ocurrió después de aquel funeral. Viñuales visitó a NT, que, como todo su grupo familiar, vivía de recolectar materiales en la vía pública. Especialmente cartón, y enfocado sobre todo en la ciudad de Buenos Aires.

Para eso debió ingresar al barrio 8 de diciembre, otro de los que integraban la periferia de Villa Fiorito, una localidad que el exfuncionario suponía conocer muy bien ya que la había recorrido durante una década. La noche que se acercó hasta la vivienda de NT lo hizo reconsiderar esa creencia. El barrio comenzaba luego del 700 de Azamor, la calle que ganó notoriedad porque en el número 523 había vivido Diego Armando Maradona.

Un poco más adelante de esa altura, la calle desaparecía como tal y se transformaba en un pasillo. Viñuales lo transitó desorientado. Carecía de cualquier punto de referencia: la zona comenzó a resultarle un territorio de incógnitas. Ese horizonte se despejó al llegar a la casa de NT, una construcción pequeña pero de materiales sólidos. Y de una prolijidad que contrastaba con el resto del paisaje, conformado por montañas de basura frente a las moradas de quienes, como NT, subsistían cartoneando.

Probablemente Maradona sabía bien de lo que hablaba cuando en 1998 criticó a Mauricio Macri comparándolo con un cartonero. En

1995, Macri había sido elegido presidente de Boca Juniors y la reducción de las primas abonadas a los futbolistas fue una de las primeras medidas que adoptó. Maradona era uno de los integrantes destacados de aquel plantel profesional. Para esa época, la actividad del cirujeo se había incrementado en las grandes ciudades con la nueva oleada de pobres que buscaba, en ese y otros empleos informales, una salida laboral.

Esa fue una de las paradojas de la Convertibilidad, el plan de estabilización económica que llevó adelante desde 1991 Domingo Felipe Cavallo, ministro de Economía del presidente Carlos Saúl Menem en sus dos mandatos. Ese programa disparó el histórico alto índice de empleo informal en el conurbano. Los cartoneros se multiplicaron. La decisión de Macri fue resistida por los jugadores, con Maradona a la cabeza.

En medio de esas tensiones el futbolista lo acusó de ser como "el cartonero Báez", para sugerir que quería imponerles condiciones de vida similares a las de Rafael Crisanto Báez, un mendigo paria de los suburbios de Mar del Plata que vivía del cirujeo y que se había presentado en público como testigo presencial de asesinato de Alicia Muñiz en esa ciudad a manos de Carlos Monzón, su pareja y excampeón mundial de boxeo.

La prensa lo apodó rápidamente "cartonero Báez". Esa expresión fue recogida por Maradona, seguramente al tanto de lo que ocurría unas cuadras arriba de la calle Azamor. Pese a que se mudó a una casa en el barrio de La Paternal que le había comprado Argentinos Juniors, el club con el que debutó en primera división, Diego se esmeró en mantener vivas las raíces con su barrio. Probablemente a través de María Gaitán, la vecina a la que Dalma Salvadora Franco, su madre y más conocida como *La Tota*, decidió donarle la casa que ocupaban en Villa Fiorito. Así y todo, Maradona no se desprendió de su barrio de origen. Meses antes de fallecer había asegurado: "Yo no me olvido de (Villa) Fiorito". El exfutbolista colaboraba con la distribución de alimentos a comedores de la zona. Allí los medios de vida se dividen en dos grandes rubros: la búsqueda en los residuos de materiales para la reventa y los subsidios que otorga el Estado a través de programas sociales.

Hola Susana

Una parte importante de los casi cuarenta mil planes Potenciar Trabajo que recibe Lomas de Zamora se concentran en esta localidad. De acuerdo con los datos provisorios del Censo 2022, este distrito tiene 691.000 habitantes. Con casi tres veces más de población, en La Matanza se distribuyen 92.000 planes. La mayoría de los cartoneros registran una doble condición de trabajo. Suelen estar nucleados en cooperativas registradas ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para recolectar en sus barrios. Pero después efectúan la clasificación y venta de lo producido en forma individual o por núcleo familiar en su lugar de residencia.

Para comprender esa modalidad, hay que remontarse al primer período de Macri en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2011). A pocos días de su asunción, la Secretaría de Transporte suspendió el servicio de "trenes blancos" o "trenes cartoneros", que trasladaban desde el conurbano a quienes ingresaban a la ciudad para desarrollar ese trabajo.

Quienes utilizaban el Ferrocarril Belgrano Sur para ir y volver de la ciudad ya no contaron con ese medio para poder hacerlo. Los cartoneros comenzaron a pernoctar en las veredas de los barrios porteños. Ese acampe desató una ola de protestas entre los vecinos damnificados. Tal vez la más recordada sea la que lideró desde su programa "Hola Susana" Susana Giménez, la popular conductora de shows en el *prime time* de la televisión abierta.

El Gobierno de la Ciudad tomó contacto con los cartoneros para encontrar una solución. Después de complejas negociaciones se llegó a un acuerdo que, en líneas generales, perdura en la actualidad. Mediante la suscripción de contratos de gestión social para la prestación del servicio público de recolección de residuos sólidos secos, la ciudad financia el transporte de los cartoneros y sus cargas en camiones y micros.

Pero también les abona mensualmente una suma equivalente a 200 dólares en concepto de incentivo a quienes cumplen con un régimen de presentismo, que incluye horarios de trabajo y la condición de que no sea realizado por menores de edad. Divididos en doce cooperativas,

participan de este sistema alrededor de seis mil quinientas personas.

Cuando llegan a sus hogares o centros de acopio, los cartoneros seleccionan aquello que resulta un bien transable. Es decir, lo que pueden vender en forma colectiva o individual, según se trate de asociados a cooperativas fuera de la ciudad o de cuentapropistas. El resto queda amontonado como desecho, sin que nadie disponga su deposición en algún centro de tratamiento.

Ese es el motivo por el que la basura se apila en los barrios marginales de Villa Fiorito, promoviendo malas condiciones de sanidad entre sus habitantes y generando un ambiente propicio para la aparición de roedores, que suelen transmitir diversas enfermedades. A Viñuales le asombró la pulcritud y limpieza alrededor de la vivienda de NT. Igual que la mayoría de quienes cartonean en el barrio 8 de diciembre, NT presta servicios en una de las cooperativas encargadas de la recolección de residuos reciclables en la ciudad de Buenos Aires. Pero tal vez lo que lo impresionó más todavía fue la gente que entraba y salía de la casa. NT mantenía viva una costumbre iniciada por sus padres: atendía una olla popular para asistir a vecinos necesitados. Mientras esperaban por los alimentos, los vecinos podían sentarse en sillas dispuestas en el patio: a NT le parecía denigrante que los vecinos tuvieran que hacer cola. De eso Viñuales se enteró más tarde, dialogando con él y sentado en ese mismo lugar.

NT le agradeció que hubiera participado en la gestión por el cajón que finalmente le entregó el municipio. La charla se prolongó y tocó otros temas. Viñuales le preguntó a quién votaba en las elecciones, una curiosidad bastante lógica. Después de renunciar a ser funcionario de Insaurralde, Viñuales se sumó a la alianza Juntos por el Cambio para disputarle el cargo de intendente en Lomas de Zamora. Casi el 40% del distrito vive y vota en Cuartel Noveno.

Villa Fiorito es una de las localidades con mayor número de electores en esa región y conserva con el peronismo una identidad simbiótica que completa el fanatismo por el Club Atlético Los Andes. Excepto en el casco histórico y el centro comercial, delimitado por las avenidas General Paz y General Hornos, el Camino de la Ribera Sur y la calle Recondo, en el resto de su geografía es inconcebible que en esa ciudad alguien no sea peronista. Y, esencialmente, no vote por esa

fuerza.

El futuro de la democracia

Esa realidad no era nueva para Viñuales. Pero era la primera vez que accedía a la intimidad de alguien que podría revelarle algún secreto de aquella trinidad localista, luego de haberse despojado de lo que, quizás, podía percibirse como una barrera para atreverse a hacerlo: el cargo que había ocupado durante diez años. A la pregunta por su preferencia política NT respondió seguro que votaba al peronismo. Viñuales no se desanimó. Al contrario. La respuesta le pareció el indicio de un buen comienzo.

Decidió insistir. Le hizo notar a NT que el peronismo no aparecía en las boletas como tal. NT se sinceró. En verdad, se dirigían al cuarto oscuro y colocaban en la urna la boleta prolijamente doblada dentro de un sobre que le entregaba gente vinculada al municipio. Probablemente y en forma sucesiva haya depositado en las cajas de cartón plegable votos a favor del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana y el Frente de Todos.

Pero añadió un dato que podría representar algo parecido al misterio que Viñuales deseaba revelar, aunque el resultado fuese todavía más sorprendente. “Si me traés otra boleta y estás, te voto a vos”. En 2021 me valí de esa respuesta para intentar dar otra a un interrogante que apareció en casi todas las exposiciones en las que participé: por qué el peronismo ganaba las elecciones en el conurbano por un margen tan amplio. Apelaba entonces a un clásico de la ciencia política. Las reglas que debía cumplir una democracia para diferenciarse de la autocracia, citadas por Norberto Bobbio en *El futuro de la democracia*. Para este pensador italiano, son tres: quién está autorizado a tomar decisiones y bajo qué procedimientos; la que confiere esa facultad a un número elevado de representantes y por eso denominada “de la mayoría”, y la de las alternativas reales, es decir, que tanto quienes vayan a elegir como quienes resulten elegidos tengan opciones reales para hacerlo. La anécdota de NT me permitía hacerle notar a la audiencia la responsabilidad que tenía la oposición en garantizar que la tercera regla se cumpliese. Debía estar allí para

garantizar que, en efecto, los electores de lugares como el barrio 8 de diciembre tuvieran la opción real de elegir. Es decir, de convertirse en una alternativa distinta a la que ofertaran los delegados del municipio el día de los comicios antes de ingresar al cuarto oscuro. Hasta allí lo que sabía de esa historia y el vínculo que había establecido con ella. Pero terminé de conocerla cuando indagué más para poder contarla.

Entonces comprendí cuánto aplicaba la validez de esa tercera regla y los obstáculos para que se cumpliera. Así como es cierto que en la periferia del conurbano las noticias demoran en circular, también lo es que finalmente consuman ese propósito en algún momento. Y, como suele ocurrir en estos casos, probablemente van modificándose de acuerdo a quién las transmite. Son variaciones de una primera versión original.

Lo mismo ocurre con las reacciones que despiertan. Aquello que esa noche NT le dijo en el patio de su casa a Viñuales llegó a oídos de Natalia Zaracho, tal vez la cartonera más prominente de todo Villa Fiorito. Seguramente bajo el impacto de esas distorsiones, varios testimonios recogidos allí aseguran que Zaracho le advirtió a NT que corría el riesgo de perder el ingreso por incentivo que le abonaba la ciudad como cooperativista si se atrevía a no votar al peronismo. Lo que le había insinuado a Viñuales.

Zaracho representa al Movimiento de Trabadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois en Villa Fiorito y es la titular de la cooperativa Nuevo Amanecer de los Cartoneros, ubicada cerca del 8 de diciembre pero bastante alejado de La Cava, el barrio arquetípico del universo cartonero. Concentra la mayor parte de las actividades relacionadas con esa práctica. El 16 de diciembre del 2021, Zaracho juró como diputada nacional y cubrió la vacante de Daniela Vilar, que renunció a su banca para asumir como ministra de Ambiente de Axel Kicillof en el gobierno bonaerense.

Vilar es la dirigente más importante en Lomas de Zamora de La Cámpora, la organización política más cercana a Cristina Fernández de Kirchner, que lidera su hijo Máximo. Grabois controla la mayoría de las cooperativas que recolectan cartón en la ciudad, pero cuyos miembros residen en Villa Fiorito y Villa Caraza, dos localidades emblemáticas de Lomas de Zamora y de Lanús, separadas por la

avenida General Hornos.

En el gobierno de la ciudad se le reconoce a Zaracho el poder para decidir altas y bajas entre los miembros de las cooperativas afectadas a esa tarea. Zaracho juró luciendo el uniforme oficial que el Gobierno de la Ciudad les provee a sus miembros y que permite identificarlos como tales. La buena relación política entre Zaracho y Vilar es un reflejo de la que existe entre Grabois y La Cámpora.

Desde el 2019, los cartoneros ligados al MTE gozan de privilegios para recoger cartón en las zonas más codiciadas del microcentro de Lomas de Zamora: la calle peatonal Laprida y el circuito del complejo gastronómico Las Lomitas, dos zonas de alta densidad de desechos. Aquellos que intentan aventurarse en ese territorio vetado a quienes no adhieren a Grabois se exponen al decomiso de sus carros y del contenido por parte de los inspectores municipales, escudados en el convenio suscripto entre el MTE y las autoridades locales.

Este tipo de escarmientos a quienes desafíen el orden conservador establecido por la versión degradada del capitalismo de amigos parece corresponderse con la sustitución del peronismo por el kirchnerismo. O, tal vez, por el reemplazo de la cultura del trabajo por la del subsidio. Entre los cartoneros impera el desprecio hacia las formas de vida que desarrollan quienes son asistidos económicamente por el Estado.

Ese decidido sentimiento “antiplanero” obliga a los punteros políticos a recurrir a métodos coercitivos extremos para asegurarse la fidelidad de los barrios más postergados, en un esfuerzo por eludir el denominado, y temido, “voto bronca”: el rechazo a esa situación que los electores podrían expresar en los comicios. Esa posibilidad estimula la expectativa de adhesiones a Javier Milei, pone en crisis al Frente de Todos y desconcierta a Juntos.

Pero esas adhesiones de carácter emotivo no son representativas de algún tipo de reivindicación de ninguna fuerza política. Una actividad que solo infunde desconfianza entre quienes luchan por permanecer ajenas a la influencia de las cooperativas cooptadas por espacios como el de Grabois e intentan preservar su independencia.

A diferencia de la posición histórica sostenida por el Partido Justicialista, el Estado no interviene en este conflicto a favor de los

más afectados por los efectos nocivos en este mercado de la marginalidad, sino para doblegar su resistencia a un sector del kirchnerismo con el que mantiene vínculos privilegiados. Esa es la atmósfera inhóspita recreada por una competencia hostil por el cartón a través de métodos ásperos.

Huellas verdes

Manolo está entre quienes pelean por defender su autonomía y perciben a Zaracho como una representación de la política. Ni siquiera reconoce en ella a una cartonera. Tampoco en Jackie Álvarez, su mano derecha, y designada por Vilar como subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular en el Ministerio de Ambiente bonaerense. Manolo es el fundador de Huella Verde, una cooperativa asentada en La Cava. La condición para ser miembro de ella es ser adicto recuperado.

Aunque fue fundada en 2011, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) la reconoció legalmente en 2020. El INAES es controlado por el Movimiento Evita de Emilio Pérsico y Fernando *el Chino* Navarro a través del politólogo franco argentino Alexandre Roig. Manolo rompió con el MTE después de haber colaborado con su aparición en La Cava. El MTE integra la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), cuyo secretario general es Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita.

El requisito para ser miembro de Huella Verde es, a la vez, la norma esencial que regula su funcionamiento interno y que Manolo aplica con una rigidez que no reconoce contemplaciones. Cualquiera que la viole es expulsado inmediatamente. En esta cooperativa está terminantemente prohibido que sus miembros vuelvan a consumir.

Manolo también es un adicto recuperado. La dependencia del alcohol y las drogas está íntimamente ligada a la creación de Huella Verde, conformada por treinta y cinco miembros. Su sede fue construida sobre un lote que la cooperativa recuperó de un *transa* que lo usurpó en el barrio de Manolo. *Transa* es el apodo que reciben los vendedores minoristas de estupefacientes.

Como todo La Cava, el barrio de Manolo no está en ninguna

cartografía oficial. Es una de las zonas blancas del catastro de Lomas de Zamora. La única referencia externa visible es el club Juventud Unida de Villa Fiorito, el acceso más cercano a la cooperativa, a la que es imposible llegar sin la ayuda de un guía. En cierto sentido, Manolo lo es para su barrio.

Es lo que le permite suplir la ausencia del Estado y ejecutar una expropiación como la practicada con el *transa* en tierras donde la ley y la propiedad privada no existen. El edificio de Huella Verde es modesto, pero cuenta con las instalaciones necesarias para albergar a un comedor social. Un techo de chapa por donde no filtra el agua, instalaciones eléctricas, una cocina con garrafa y baño. Condiciones mínimas de comodidad de las que carece Manolo en el hábitat precario que tiene frente a la cooperativa y que solo es posible denominar "vivienda" en el contexto de un barrio donde las carencias resultan difíciles de enumerar en un orden de prioridades. Manolo se rehúsa a mudarse a Huella Verde, una alternativa sugerida con insistencia por quienes contribuyen a sostener la tarea social del comedor.

"No me corresponde hacer eso. Esto es propiedad de la comunidad", es la respuesta invariable a esa pregunta. Jorge Lugones estuvo en Huella Verde antes de la pandemia. El obispo de Lomas de Zamora visitó el comedor, donde compartió un asado con los cooperativistas, probablemente al tanto de su obra. Algunos rumores insisten en que intentó sumar a Manolo a la Pastoral Social de esa diócesis. Si en apariencia fue así, esa iniciativa no prosperó.

Hasta antes de la etapa más cruda del aislamiento, Huella Verde tenía un acuerdo con supermercados, casas de artículos para el hogar y electrónicos y otros grandes generadores de cartón para retirarlo. A las cooperativas independientes no les interesa cobrar por esa tarea, sino hacerse de esa materia prima para venderla sin intermediarios. Un sistema diferente al que monopolizan las que trabajan para la ciudad.

"Hay suficiente cartón en el conurbano para dejar de ser pobre y vivir de prestado con un plan o el incentivo que perciben quienes trabajan con Zaracho", confió uno de ellos bajo estricto pedido de reserva de sus datos. Quizás otro indicio de la animosidad entre los cartoneros con los programas asistenciales.

Cuatro décadas de peronismo

Igual que NT, Manolo es considerado alguien de pocas palabras. Parece lógico en un ambiente donde la hosquedad define el promedio de cualquier relación social. Pero la mañana del 31 de diciembre de 2021 no tuvo más remedio que hablar ante la insistencia de los cuarenta vecinos reunidos en Barrio Obrero, cerca de la unidad penal 40, en la localidad de Santa Catalina.

En realidad, no estaban reunidos allí para escucharlo a él, sino a Horacio Rodríguez Larreta, que visitó ese lugar como parte de la recorrida organizada por La Marea, una corriente del PRO en el conurbano liderada por Milagros *Millie* Mailyn, secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad de la Ciudad en el Ministerio de Salud porteño y extitular del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) en el gobierno de María Eugenia Vidal.

La insistencia de los vecinos obligó a Manolo a modificar por unos minutos su carácter silente para repetir lo que suele decir en ocasiones como esa. “Yo no confío en los políticos. Ellos hacen su negocio y nosotros seguimos viviendo mal: cuarenta años votando al peronismo y todo sigue igual”. Una versión bastante fidedigna asegura que por un instante todos se callaron. Pero no conviene tomarla muy en serio. Probablemente sea el resultado final de otra que antes haya sufrido varias distorsiones.

DB

7

Feria del robado, pasión de multitudes

Sucesión interminable de locales en la concurrida Feria de Solano, verdadero shopping de productos robados o falsificados.
FOTO: © Gentileza *La Nación*

Un famoso actor recordaba, tiempo atrás, que de chico su madre lo llevaba a la feria del barrio. “Se hacían cada tanto, y cuando aparecían, gran noticia. Se conseguía todo a muy buenos precios. Íbamos con un changuito y bolsas y los llenábamos hasta que estaban a punto de reventar. ¡Qué lindo era!”. Cercanas, baratas, atendidas por gente servicial y sencilla (muchas veces, los propios productores), ir a las ferias barriales puede resultar una experiencia de compra bastante más amigable que las góndolas impersonales de una cadena multinacional.

En el conurbano bonaerense, como en tantos conurbanos del país, siguen proliferando estos mercados abiertos, callejeros y rotativos, en general impulsados por los propios municipios. Pero uno, fundador de una dinastía, rompió el molde y se fue de escala, basado en un cambio de modelo: la Feria de Solano. Para entender la metamorfosis y el suceso de esa monumental concentración a cielo abierto, que se extiende a lo largo de unas treinta cuadras en el límite de los partidos de Quilmes y Almirante Brown, conviene reparar en el nombre con que ha ganado fama entre la gente: “la feria del robado”. Nada de productores ofreciendo el fruto de su trabajo: buena parte de lo que está a la venta proviene del delito.

Nacida hace unos cincuenta años en el cruce de las avenidas Donato Álvarez y San Martín, fue creciendo hacia el norte y hacia el sur y hoy es la mayor de la Argentina y una de las más grandes de Sudamérica. El origen más que dudoso de su mercadería salta a la vista; a la vista, y también al oído: “Bueno, sí, es obvio que muchas cosas son robadas. Eso explica los precios que se ven, tan bajos”, admiten Elsa y Oscar, de unos 40 años ambos, que venden gaseosas en la entrada de un baldío sobre San Martín, repleto de manteros; amables, buenos anfitriones, reciben al cronista con dos advertencias: que cuide su billetera y su celular, y que no ande preguntando nombres, porque algunos se pueden sentir incómodos. “En el mejor de los casos van a contestar

cualquier cosa", se ríe Elsa.

Precaria, altar de la informalidad y atracción para muchos miles de personas, la feria abre los miércoles y los sábados entre las 9 y las 15. "Esto es una especie de Mercado Libre: se consigue todo lo que uno busque y viene gente de todos lados. Recién atendí a una señora que se vino desde La Plata", cuenta Susana, que atiende un pequeño puesto de ropa para chicos.

Efectivamente, entre mercadería nueva y usada la oferta es de lo más amplia: en primer lugar, indumentaria, pero también alimentos, artículos para el hogar, muebles, electrodomésticos, celulares, *bijouterie*, herramientas, repuestos, motos, incluso algún auto (o lo que queda de él); y a precios en muchos casos insólitos: en productos nuevos, una bicicleta, 12.000 pesos (todos los precios corresponden a enero de 2023); una caja de herramientas importadas de cincuenta piezas, 15.000; un tapado largo de piel sintética, 17.000; doce platos playos Durax, 2000. En una suerte de góndola, alimentos envasados y de marca están a la mitad del valor que tienen en almacenes y supermercados.

Delito organizado

"Comprar lo que se sabe o se sospecha que es robado demuestra una tolerancia social frente a ese delito y explica su expansión —dijo Diego Gorgal, un politólogo experto en temas de seguridad, en declaraciones a *La Nación*—. Si en la Argentina proliferan los mercados ilegales es porque a mucha gente, con tal de pagar menos, no le importa de dónde viene lo que compra".

Ladrones, vendedores y compradores se asocian de hecho para constituir esos mercados: infinitas transacciones de bienes originalmente legítimos que han sido sustraídos para ser comercializados. Solo en los tres principales rubros, celulares, autos y cargas de camiones, la suma de los bienes supera los 1200 millones de dólares anuales. En el área metropolitana se roban, por día, 9500 teléfonos celulares (casi 400 por hora); en todo el país, 115 autos por día (uno cada 12 minutos) y 4,4 camiones y camionetas, para saquear lo que transportan. Este último índice creció mucho en 2022 y se

explica por el auge, a partir de la pandemia, de la modalidad "paquetería"; es decir, mercadería que se compra por plataformas digitales y se distribuye casa por casa en vehículos utilitarios.

"Una mañana iba por una avenida de Quilmes con el camión recién cargado y, cuando paré en un semáforo, de pronto veo a dos tipos, uno en cada ventana, encañonándome. Yo iba sin *culata* [auto de custodia]. Me corrieron del asiento, me tiraron al piso y manejaron ellos hasta una calle de tierra que estaba cerca. Ahí pasaron casi toda la carga a dos camionetas, me dejaron maniatado y se fueron", cuenta Oscar F. (36 años, dos hijos), chofer de un viejo Scania que transportaba alimentos.

"Es un delito organizado, con estructuras celulares, independientes entre sí, que se juntan para una operación. Está el gatillero, el chofer, los informantes... Un buen dato, por ejemplo, que de tal lugar y a tal hora va a salir un camión grande con electrodomésticos, se paga el equivalente a 1000 o 1500 dólares, que pueden llegar a 3000 si lo que lleva es celulares o artículos de computación", dice Víctor Varone, abogado penalista de empresas y experto en piratería del asfalto. "También hay bandas chicas, sobre todo en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que hacen operaciones rápidas, más sencillas. Mayoritariamente son gitanos."

No existen muchas bandas grandes —no más de diez o doce, según los investigadores—, pero son poderosas y se han ganado fama de ser verdaderos "empresarios del delito", la mayoría operando en el GBA. A la cabeza está el reducidor, que recibe la mercadería, la "stockea" y la vende. Tienen depósitos, sistemas de comercialización y distribución, contadores y hasta facturas truchas. Incluso se descubrió una "cueva" que recibía cheques, para que las bandas no tengan que estar manejando tanto efectivo. Los alquileres de galpones se hacen por tiempos breves, y también rotan el personal que contratan. Años atrás, escuchas telefónicas revelaron cómo hacía una banda para disfrazar una operación que estaba montando: "Che, el partido se juega mañana a las 9. Necesito un arquero, dos defensores y un delantero, ¿OK? ¿Entendiste todo? Después nos juntamos en lo de Carlitos a comer un asado".

Fenómeno social y cultural

Los especialistas advierten que el problema es complejo, porque no todo es blanco y negro: las fronteras entre legalidad e ilegalidad a veces son difusas. Las mercaderías robadas no solo van a parar a circuitos de comercialización informales, como la Feria de Solano. “Supermercados chinos y otras cadenas chicas venden muchas cosas que les llegan de los piratas del asfalto. Los que compran ahí no tienen idea de que eso es afanado. Pero, si ven algo demasiado barato, que sospechen”, sostuvo un exfuncionario del Ministerio de Seguridad de la Nación que pidió reserva de la fuente.

No se trata simplemente de delincuencia mal controlada, señalan los expertos, sino de un fenómeno de raíz social y cultural. Todo lo que se roba es reducido, es decir, sale a la venta para que se convierta en dinero. Muchas veces en forma consciente, miles, millones de argentinos compran en ferias, locales, estaciones de tren, desarmaderos o por internet productos o mercaderías que provienen del delito. La gente es el último eslabón de la cadena y la que impulsa con su demanda el accionar de las bandas que asuelan las calles.

“No se roba lo que no se vende”, sostiene Varone.

En número de homicidios, el país tiene buenas calificaciones en América Latina: figura en el tercer escalón, lejos de los que encabezan el ranking. Pero en robos no le gana nadie. Su tasa es de 973 casos cada 100.000 habitantes (y solo se denuncia aproximadamente el 20% de los hechos), seguido a considerable distancia por México (688) y Brasil (573).

En el GPS de la inseguridad, la Argentina es zona de catástrofe, y con un territorio convertido en paraíso de la delincuencia: el conurbano.

Por acción u omisión, otro activo jugador es el Estado. Desde las autoridades, que permiten la existencia de los mercados ilegales, hasta la policía, que libera zonas para el asalto de autos o camiones, son partícipes necesarios del delito.

Hace años, una persona que había hecho desaparecer una camioneta 4x4 para poder cobrar el seguro se presentó en una comisaría de Vicente López a denunciar que se la habían robado. Cuando le

preguntaron dónde había sido, descubrieron que estaba mintiendo. La policía manejaba ese mercado: sabía perfectamente cuál era el área del partido en la que permitía operar.

O robado o trucho

“Ojo, acá no todo es afanado”, se ataja Bruno (45 años, cuatro en la Feria de Solano), vendedor de chucherías en una lona tendida sobre los márgenes del arroyo De las Piedras, a media cuadra de Donato Álvarez.

En ropa deportiva, lo habitual es que se trate de imitaciones. Las marcas más truchadas de la feria son Adidas y Nike. “Puede agarrarlas: va a ver que son buenas, resistentes”, invitan en un puesto de “Adidas”. Lacoste es otro blanco de los falsificadores; de gran factura, el cocodrilo trucho no tiene nada que envidiarle al auténtico.

En el área de los puestos más importantes, sobre Donato Álvarez, con largas mesadas y toldos de media sombra, algunos locales de ropa cubren lo que está a la vista con redes. “Te das vuelta un segundo y te chorean”, protesta Walter, que ofrece productos Adidas originales; con toda seguridad, robados.

En ese sector, el más ancho y largo, hay hasta cinco filas paralelas de puestos, y a unos veinte metros está “la canchita”, descampado de unas cinco cuadras —décadas atrás por ahí circulaba un tren provincial, del cual todavía quedan unos metros de vías— en el que se ubican manteros. Venden de todo, básicamente cosas usadas, y, sin ser oficialmente un mercado de truque, es habitual que acepten artículos como forma de pago. Un señor se llevó algunas herramientas y a cambio entregó unas botas de goma que lucían como nuevas.

¿Baños públicos? En el medio de la canchita hay uno, chico y en pésimo estado, con un joven en la puerta que cobra entrada.

Debajo de un árbol, tres veinteañeros fuman un porro.

Colorida, ruidosa, siempre atestada, la feria es también informal en sus estrategias de promoción: “¡Qué locura! ¡Qué locura de precios!”, alienta a viva voz una vendedora de vajilla. Otra: “Señora, póngale la tapa a su marido. Tápele la boca. Llévele un buen ‘taper’”. Otro: “Termos Stanley, los mejores, directamente de China a Solano”.

En un local de ropa a granel, amontonada en grandes canastos, un cartel proclama: “Pase y revuelva. Se va a sorprender”.

Más discretamente, también se ofrecen remedios, incluidos antibióticos. ¿Origen de esos medicamentos? Incierto.

Consultados varios puesteros, coinciden en que el volumen de ventas es muy alto, salvo los fines de mes. Ninguno niega que mucho de lo que se ofrece es robado, especialmente en el mercado de cosas usadas. “Llega gente a la que le entraron ladrones en la casa y vienen a ver si pueden recuperar algo”, cuenta Elsa, la vendedora de gaseosas.

A Raúl, veterano de la feria, una vez se le acercó un señor y le mostró una foto de una espada antigua heredada de su abuelo. “Se la habían afanado de su departamento, creo que en el centro de Quilmes, y me preguntó si sabía dónde podía encontrarla”. Raúl le sugirió que si no estaba allí se corriera hasta la feria de la avenida Olimpo, en Lomas de Zamora. “Seguro que a alguna feria fue a parar”, le dijo.

El mercado abierto de Solano es una expresión patente de ilegalidad, pero también fuente de recursos en un territorio con creciente desocupación y el 40% de la población viviendo en la pobreza o en la indigencia. Roberto, de 46 años, está sentado en una silla de madera y a sus pies puso una manta en la que desplegó objetos caseros que parecen el descarte de una mudanza, eso que ya nadie quiere: un maltrecho ventilador de pie que probablemente no funcione, revistas dominicales de diarios, una vieja linterna, cubiertos sueltos (una cuchara, un cuchillo y tres tenedores), perchas de plástico, una sidra, dos pares de zapatos… “Cosas que la gente me regala o que voy consiguiendo en la calle”, cuenta. Vecino de una villa que está en la cuadra siguiente, dice que lo que recauda miércoles y sábados lo destina a “parar la olla de los pibes”.

(En ese rincón perdido del GBA, a las puertas de un asentamiento miserable, puede ocurrir lo inesperado. Roberto lleva unos minutos hablando con el cronista y de pronto interrumpe la conversación: “Perdón, ¿usted no es el de *La Nación* que escribe los sábados? Lo leo y lo he visto en la tele. Estamos en veredas opuestas, soy peronista de toda la vida, pero lo leo”).

En las lonas de los manteros es muy común ver cosas rotas o en muy mal estado; pero, dicen, en Solano “hay gente para todo”.

A partir de las dos de la tarde, los vendedores empiezan a levantar la mercadería. Se supone que a las tres ya no debe quedar ningún puesto abierto, aunque siempre alguno se pasa de hora: todavía hay mucha gente caminando por la feria.

A pocas cuadras de allí, un lavadero de autos muestra otra cara sorprendente del conurbano, esa geografía generosa en matices y contrastes; en el corazón de un barrio bajo, el local está identificado por un cartel en el frente que dice: “Car wash”.

CMRR

8

Barrio de la Ribera, tierra de nadie

Cerco perimetral que rodea el barrio Ribera Sur, una de las medidas de seguridad adoptadas tras el intento de desalojo el 8 de julio de 2021.
FOTO: © Daniel Bilotta

El arroyo Santa Catalina es uno de los afluentes del río Matanza, que en sus sesenta y cuatro kilómetros de extensión atraviesa a la mayoría de los partidos de las zonas sur y este del conurbano. Esa trama coincide con la que abarca a todos los de la Tercera Sección. Junto a la Primera, constituyen los dos circuitos electorales más importantes de los ocho que tiene la provincia de Buenos Aires para definir quiénes representan a cada una de esas regiones en su Legislatura.

Entre la Primera y la Tercera, concentran a los dos tercios de ciudadanos en condiciones de emitir su voto, unos nueve millones de personas sobre un total de doce millones, que convierte a esa llanura en la más densamente poblada de toda la Argentina. Allí vive al menos el 15% de sus habitantes. Igual que otras decenas de meandros, el Santa Catalina descarga sus aguas en las del río, aunque no se destaca particularmente por la contribución a su caudal, un orden en el que sí sobresalen el Cañuelas, Chacón, De Castro, Los Pozos y Morales.

Lo que distingue a este arroyo del resto es que divide al barrio de la Ribera en dos mitades imperfectas a la altura de su confluencia con el río. A diferencia de las rutas laberínticas que hay que seguir para llegar a Nueva Esperanza sin perder la orientación entre curvas y contra curvas que exigen girar a un lado y otro todo el tiempo, el camino hacia este aquí puede hacerse en una serie de líneas rectas.

Ubicado a un lado del Camino de la Ribera Sur, que vincula a Lanús con la ruta provincial N° 4, quien arribe desde la ciudad al Puente La Noria debe doblar a la derecha y desviarse por el acceso a esa ruta que antes de llegar a destino obliga a transitar por Ingeniero Budge y el área conocida como La Salada que integran los predios feriales Ocean, Punta Mogote y Urkupiña. Siguiendo en esa dirección se llega a la desembocadura del arroyo Santa Catalina en el río.

Otra alternativa es ir por la avenida Colombres desde la estación ferroviaria de Lomas de Zamora y por ella hasta la avenida Presidente Perón (Camino Negro), ingresar al Puente la Noria, descender en la

bajada Fiorito y acceder al Camino de la Ribera, que bordea el río Matanza, hasta el arroyo Santa Catalina. El barrio está flanqueado por dos referencias que conviene no perder de vista en esta historia: un templo evangélico y las obras para una nueva estación de bombeo que regule el desborde del río y el arroyo en períodos de grandes lluvias.

No man's land

Igual que Nueva Esperanza, este barrio es otra intromisión del partido de Lomas de Zamora en el de La Matanza. Particularmente, sobre una parte de la superficie que ocupa el Mercado Central en la localidad de Aldo Bonzi, un ente estatal tripartido cuya administración depende del gobierno nacional, el bonaerense y el de la Ciudad. A pesar de la presencia de una institución de semejante envergadura, no resultaría inapropiado referirse al predio que ocupa el Ribera como tierra de nadie. Una expresión nacida con las guerras que precedieron a la formación de los Estados en Europa entre los siglos XIV y XV y que aludía a las zonas donde ninguna de las partes que libraba esa disputa podía arrogarse su anexión, precisamente por ser el espacio libre entre las primeras líneas de dos ejércitos enfrentados. La traducción literaria de su acepción en inglés, tierra de ningún hombre (*no man's land*), cobró un nuevo significado en la Primera Guerra Mundial para referirse al área que separaba a las trincheras de dos bandos en pugna.

Pero tal vez la etimología contemporánea asignada a esta frase sea la que mejor se ajuste a la situación en el barrio, una zona expuesta a cualquier tipo de peligro por la falta de protección de los poderes públicos. La peculiaridad en este caso es que los vecinos acusan a uno de ellos, la Justicia, de intervenir a favor de una de las partes y desviarse de la misión original con la que fue creada: hallar una solución pacífica, pero sobre todo equilibrada, a las diferencias entre seres humanos. Como el conflicto por la propiedad por estas tierras.

Probablemente a eso se deba el inquietante silencio que impera entre los habitantes del barrio si detectan entre ellos la presencia sospechosa de alguien en quien no reconocen la condición de vecino. Una experiencia incómoda para cualquiera que se atreva a ingresar al perímetro alambrado que lo rodea a través del alto portón habilitado

sobre el Camino de la Ribera, que permanece abierto los fines de semana. Por lo general, durante las horas del día.

Para no vivirla, lo conveniente es concertar una cita previa y obtener el permiso verbal de acceso que solo un grupo reducido de ellos está autorizado a conceder. El trámite tiene su morosidad para cerciorarse de las intenciones de quien lo solicita. Sobre todo, si es periodista. Y mucho más si adelanta el interés por interiorizarse de los acontecimientos que dieron lugar al barrio. En particular los que amenazaron con desintegrarlo. Carlos Pouza fue quien otorgó el consentimiento final a ese salvoconducto, siempre transitorio.

Vecinos vigilados

Pouza es el abogado defensor de las doscientas treinta y siete familias que habitan en el barrio y su prevención resulta comprensible. Todavía se mantiene sobre al menos un miembro de cada una de ellas la imputación que se les dictó por resistir la orden de desalojo que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, firmó el 7 de julio de 2021 e intentó ejecutar personalmente el 8 poniéndose al frente de un importante operativo combinado de fuerzas de seguridad y máquinas viales del municipio de Lomas de Zamora, con las que se demolieron viviendas de una sólida construcción en hormigón armado.

Los rígidos controles que deben superar quienes deseen visitar el barrio son la secuela más evidente de la violencia desproporcionada autorizada por Villena, y que además incluyó una prolongada presencia de efectivos uniformados a cargo de vigilar los movimientos de sus vecinos. Pouza confirmó el último visado con un diálogo telefónico que franqueó el paso, pero cuya negociación había comenzado un mes antes con T, un seudónimo arbitrario para mantener a resguardo la identidad de uno de los miembros de esas doscientas treinta y siete familias que aparecen imputados. Fue la única condición impuesta por Pouza para que uno de los líderes del barrio de la Ribera se prestara al diálogo.

No fue fácil dar con T, a pesar de convenir previamente la reunión de aquella tarde de sábado a mediados de noviembre de 2022. T pidió encontrarse por la calle central que recorre el Ribera. Un surco

desparejo de badenes que se sobrepone con dificultad al rellenado realizado por el municipio, en un intento por mejorar la altura de la cota en ese inmenso humedal.

Para el trabajo se había utilizado tierra colorada: una promesa de dificultades en el futuro cercano. Seguramente en el invierno, cuando el régimen de lluvias es más intenso. La tierra colorada es un material típico del suelo del conurbano, que se encuentra con facilidad en la capa inmediatamente inferior a la superficie del suelo. Se caracteriza por su inédita capacidad de absorber humedad, lo que la vuelve barrosa con suma facilidad al contacto con el agua.

El remís no tuvo otra opción que detenerse frente al abrupto abismo que interrumpía la calle y se asomaba al arroyo. Desde su borde podía apreciarse el modesto puente de madera dispuesto encima de él para cruzarlo unos siete metros abajo. Una vertiginosa caída a pico que no amilanó al conductor de una bicicleta de montaña que descendió por allí con pasmosa serenidad y templanza. Esa pirueta acrobática fue una distracción que contribuyó a matar el tiempo. T avisó que demoraría unos instantes en llegar.

Ladrillos huecos en una tarde calurosa

Ese breve lapso coincidió con el momento en que un grupo de vecinos decidió acercarse hasta el lugar donde habían divisado a supuestos intrusos, para interrogarlos. El tono coloquial utilizado no bastó para disimular la tensión de aquel inquietante momento hostil, donde fue inevitable ocupar el centro de la atención tras la pregunta de rigor: qué hacían allí. La respuesta no resultó convincente. Por supuesto que se invocó a T. Pero ese mismo acto reflejo llevó a reparar en un detalle que antes había sido ignorado. No se tuvo la precaución de consultarle su apellido. Fue lo que convirtió de inmediato a su nombre real en una excusa inverosímil.

Abatidos por un hecho evidente que equivalía a una derrota, se ofertó abandonar el barrio para que regresase el estado de apaciguamiento que, en apariencias, habían quebrado esa presencias extrañas. La propuesta fue asentida, pero sin emitir palabra. Aquel círculo que rodeaba a esos presuntos indeseables volvió a cerrarse

sobre su silencio después del diálogo minimalista en el que se preguntó por T. Cuando el chofer del remís se aprestó a poner en marcha el auto, emergió una figura maciza y robusta con abdomen prominente desde alguna de aquellas viviendas. Se presentó como Pablo.

Traía en las manos una botella de gaseosa cola empañada por el frío de un refrigerador y dos vasos descartables. “Muchachos, tomen algo fresco mientras T llega: ya está en camino”. Aquellas palabras funcionaron como un encantamiento. El círculo se disolvió en medio de la misma calma tirante con la que se había formado. La figura menuda y pequeña de T apareció detrás de una esquina. La conversación tuvo lugar en una de las sólidas construcciones de lo que en algún momento se transformaría en una vivienda de unos ciento cincuenta metros cuadrados en la planta baja: sus estructuras de hormigón estaban preparadas para continuar con un piso más, como mínimo. La mayoría de las ya edificadas tienen al menos dos. T eligió con cuidado los ladrillos huecos e hizo con ellos dos pilas, que sirvieron de asiento a la sombra de una pared donde transcurrió una larga charla.

Un buen lugar en una tarde calurosa. Igual que Susana Perca y Daniela Pallarols, T es el arquetipo de los líderes en estos asentamientos al borde del río, que, a menudo, constituyen un desafío al poder institucional por la convicción con la que defienden el interés que representan. En la mayoría de los casos son madres solteras, menores de 40 años y jefas de hogar, que mantienen gracias a su profesión.

Algunas ya obtuvieron el título de grado en una carrera universitaria. Otras están a punto de hacerlo o aguardan inscribirse para cursarla. Muchas se diplomaron de enfermeras y trabajan en los hospitales Churruca, Ramos Mejía, Cosme Argerich y el Italiano. T quiere estudiar Derecho después de la experiencia atravesada en el barrio desde 2021 y donde se reveló como una eficaz asistente de Pouza.

Los negocios del barrio

T desciende de una familia boliviana, la comunidad que predomina entre los 1500 habitantes del barrio que fueron llegando desde todos los departamentos del país altiplano. Excepto los de Pando y del Beni, limítrofes con Brasil. Las primeras noticias que T tuvo del Ribera fueron en 2017. Un año después pagó 10.000 dólares por una de las primeras fracciones de ocho metros de frente por veinticinco de largo puestas a la venta por Adrián y Gustavo Mancebo.

Adrián es pastor evangélico y está a cargo del templo que linda con el barrio sobre el Camino de la Ribera Sur. Oscar, su padre, estuvo a cargo del cuidado de esos campos durante los treinta años que se los utilizó para la cría de ganado vacuno. Por eso, en 2012 inició el trámite de usucapión. Pero nunca lo terminó. Como otros, T se enteraría de este dato mucho tiempo más tarde.

Conocido también como prescripción adquisitiva, la usucapión es el derecho real que adquiere una persona sobre un bien por tener su control durante un tiempo determinado y continuo fijado por ley. Si cumple con ese requisito, puede presentar un reclamo para ser reconocido como su propietario. Contemplado por el artículo 1897 del Código Civil y Comercial, en la provincia de Buenos Aires ese derecho está regulado por la Ley 24.374, sancionada en 1994 y cuyo autor fue el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri. También se denomina “Ley Pierri” a la que estableció un régimen de regularización dominial a favor de los ocupantes de inmuebles urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente y acrediten su posesión durante tres años continuos. Nancy pasó a ocupar el lote que le vendió Mancebo recién en 2019 con una casilla de madera. Para ese entonces, los Mancebo se ocupaban de la seguridad, un negocio de segunda generación en estos barrios.

A cargo, en la mayoría de los casos, de quienes resolvieron la ocupación de las tierras, este aparente servicio encubre un mecanismo extorsivo para seguir percibiendo ingresos por los lotes luego de su venta. El pago de ese arancel mensual es la única garantía contra el desalojo, que se practica con quienes lo incumplen. Una situación subyugante para los supuestos agentes inmobiliarios porque favorece a otro emprendimiento: la reventa de esos terrenos.

En marzo de 2019, cada familia pagaba 3000 pesos mensuales por ese concepto. Unos 70 dólares al cambio oficial, que, multiplicados por los doscientos treinta y siete que residían allí, sumaban unos 16.500 dólares. T sindicó a José Luis Romero como el encargado de la recaudación y responsable del servicio, cubierto con barras del club Los Andes. Romero estaba afincado en el barrio y en aquel momento se desempeñaba como director de Tierras del Municipio de Lomas de Zamora.

T especuló que, probablemente por lo escandalosa, esa situación había puesto en alerta a las autoridades municipales. Romero desapareció del barrio. Al poco tiempo su lugar fue ocupado por Héctor Ontivero, delegado municipal en Villa Lamadrid, el primer puesto de relevancia que logró en la estructura política del peronismo, que gobierna el municipio desde 1983 y con la excepción del breve lapso entre 1999 y 2001, donde lo hizo la Alianza con el intendente Edgardo Di Dío.

Ontivero ya no ocupa ese cargo, pero sigue siendo parte del equipo que administra el Estado municipal. Su permanencia en esa estructura está íntimamente ligada al ascenso en ella de su jefe político, Julio Riquelme, con una larga carrera en ese escalafón, que comenzó a ser reconocida hace unos años cuando se lo designó director de Tránsito. Riquelme se inició en el municipio como custodio personal del intendente Hugo Toledo durante su gobierno (1987-1991): es un experto en artes marciales. En la actualidad es el subsecretario de Medio Ambiente.

En el recuerdo de T, con Ontivero comenzó una etapa de cierta convivencia con el municipio que contribuyó a que los vecinos obtuvieran documentos de identidad y la provisión de luz y agua potable. La llegada de esos servicios acompañó el crecimiento significativo de la construcción de viviendas. Llamativamente, en medio de ese auge la policía local instaló un puesto fijo de vigilancia sobre el portón de entrada al barrio en el Camino de la Ribera Sur. Su presencia comenzó a dificultar el ingreso de camiones que transportaban materiales de construcción.

Los Mancebo dejaron trascender una versión inquietante. Jorge Bonino exigía 600.000 pesos mensuales para evitar ese tipo de

inconvenientes. Bonino era el subsecretario de Seguridad. Ahora es el titular del área de la que depende la policía local. Tal vez por su pasado, el nombre de Riquelme apareció vinculado a este supuesto procedimiento vidrioso. El riesgo de otro estrépito pareció ser presentido por el municipio. Los efectivos abandonaron su puesto.

Los vecinos comenzaron a tratar con Guillermo Viñuales, jefe de Gabinete del intendente Martín Insaurralde. Su figura quedó asociada a un período de tranquilidad que terminó siendo muy breve. Viñuales renunció en noviembre de 2020 para concretar su pase a Juntos, la principal alianza opositora, y prepararse para disputarle a Insaurralde la intendencia en 2023. Casi al mismo tiempo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resolvió financiar la construcción de una estación de bombeo en el arroyo Santa Catalina.

La virtual simultaneidad de esos dos acontecimientos alimentó una serie de conjeturas difíciles de comprobar que se asociaron con Viñuales por la modesta edad de oro que había atravesado la relación entre el municipio y el barrio mientras él lo visitó como funcionario. Un mito acrecentado por la política llevada adelante por los funcionarios que lo sucedieron en esa tarea. La entrega de documentos de identidad y la instalación de los servicios públicos que los reconocían como clientes supuso la tácita acreditación de los vecinos como poseedores de sus propiedades.

Fue tan abrupto y profundo el cambio que pasaron a recibir del Estado que, como represalia, estos resolvieron imponerle a una calle el nombre y apellido completo del funcionario saliente: Guillermo Viñuales. Casi una travesura infantil. Para que ese acto fuera legal debía tramitarlo el Concejo Deliberante, a quien la Ley de Municipios le reserva esa facultad en forma exclusiva.

Helicópteros y camiones hidrantes

El barrio de la Ribera es una de las zonas en blanco en el mapa de Lomas de Zamora. Sus 7,5 hectáreas de superficie no figuran en el catastro municipal. Aun así, el municipio las eligió para emplazar la estación de bombeo. Realizada a fines de 2020, la licitación le adjudicó las obras a Ecodyma E.C.S.A., de Marcelo Scaramellini,

procesado en 2016 con Amado Boudou en una causa donde se acusó al expresidente de recibir dádivas mientras se desempeñó como ministro de Economía.

Scaramellini también es propietario de JasFly S.A., dedicada al transporte de pasajeros en helicópteros. En 2011, Boudou visitó Necochea y utilizó un aparato de esa flota para desplazarse. Este antecedente no fue un obstáculo para que JasFly fuera contratada para vuelos oficiales por el gobierno de María Eugenia Vidal. Ecodyma tenía que comenzar a ejecutar los trabajos en abril de 2021. Para esa fecha comenzó a circular en el barrio el rumor de su desalojo.

Los vecinos se contactaron con funcionarios municipales y fueron cayendo en la cuenta de la precariedad de su posición. Sobre todo, por los boletos de compra venta entregados por la familia Mancebo. Llegaron a presentar un hábeas corpus en el Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora, que subrogaba Federico Villena, el mismo magistrado a cargo de investigar el supuesto espionaje a dirigentes oficialistas, opositores y periodistas, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Villena está acusado de mal desempeño por el Consejo de la Magistratura por una investigación de un supuesto caso de narcotráfico en la que allanó la vivienda de la hija de Hugo Moyano, Karina. En ese procedimiento se había secuestrado medio millón de dólares, que Villena se apresuró a restituirle cuando la causa estaba en poder del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, circunstancialmente a cargo de Villena por la licencia solicitada por Juan Pablo Auge, su titular.

El expediente de Villena está retenido desde 2021 en la Comisión de Disciplina de ese organismo, pese a los reclamos de la oposición para que sea girado a la de Acusación y se resuelva si debe ser citado a declarar. En el relato de T, Villena tomó contacto con ella los primeros días de julio para adelantarle que los Mancebo, ella y el resto de los vecinos serían acusados del delito de usurpación. En su memoria, el juez empleó un tono intimidante cuando la citó el día 5 en su despacho junto a otros veinte representantes del barrio.

Villena los instó a olvidar que poseían una casa y les aseguró que los papeles que atestiguaban su propiedad tenían una utilidad inferior a la

del papel higiénico. Aunque no les permitió grabar, T memorizó con precisión el momento en que se ofreció a colaborar para que consiguieran “algunas chapas” y se mudaran “a otro barrio”. Y ofertó algo más: la firma de un acuerdo por el que perdían cualquier derecho a reclamar. Las cuarenta y ocho horas posteriores fueron vertiginosas. Probablemente los hechos no hayan ocurrido en el orden que les asignó T.

Villena realizó una inspección ocular al barrio escoltado por un escuadrón de gendarmes, a los que les encargó realizar un relevamiento del número de familias. Los gendarmes habrían contabilizado cincuenta y ocho. Es un dato curioso. En la causa judicial constaba que eran doscientos treinta y siete. Al juez lo habría sorprendido el tamaño de las casas a demoler. Por alguna razón las imaginó más pequeñas. T le preguntó por qué lo hacía. “A vos qué te importa”, le respondió.

La noche del 7 de julio una asamblea de vecinos resolvió solicitar los servicios de Pouza. Villena no demoró en enterarse. A las 23.15 firmó la orden de desalojo para que fuera ejecutada la madrugada del 8. El abogado defensor vio por televisión el operativo encabezado por Villena y que solo transmitió Crónica TV. El diálogo con Pouza sobre aquellos hechos transcurrió en sus oficinas de la ciudad de Buenos Aires, una semana después de haber visto a T.

Las imágenes captadas por la señal de cable premiaron la audacia de su equipo de exteriores: burló el cerco estricto de la seguridad, montado con dos mil efectivos entre gendarmes, guardia de infantería y policías. Los corresponsales de Crónica ingresaron por el curso del arroyo Santa Catalina, que divide el barrio en dos, y atravesaron el puente que las une. El operativo incluyó máquinas viales, que demolieron once viviendas, una de tres pisos, y camiones hidrantes. T fue detenida con los veinte delegados que se habían entrevistado con Villena un día antes. Lo mismo ocurrió con Oscar, Adrián y Gustavo Mancebo.

Un cambio de llaves

La orden impartida por el juez desató nuevamente suspicacias.

Viñuales había estado en el barrio quince días atrás. Los vecinos interpretaron el desalojo como una represalia a su visita. Con el tiempo se sabría que el conflicto era mucho más complejo, a tal punto que los gendarmes quisieron retirar el puente sobre el arroyo. Si no pudieron fue porque los vecinos los resistieron. Pouza retuvo vívidamente las escenas reproducidas por una pantalla cuando ultimaba detalles para aceptar el caso y mientras instaba por teléfono a los periodistas que estaban en el lugar a romper el bloqueo de los uniformados.

También se mantuvo en contacto con organismos de Derechos Humanos y la Defensoría General de la Nación para solicitarles su intervención. Esas gestiones parecieron surtir efecto. Villena tuvo que suspender a las 16 el desalojo que había iniciado a las 5. Todos los detenidos fueron liberados. Pero comenzó una tensa vigilia. Un destacamento de gendarmes quedó a cargo de vigilar el interior del barrio. Enervados por aquel suceso los vecinos se dirigieron al Puente La Noria con la intención de impedir la circulación del tránsito. La policía evitó que llegaran a ese lugar.

Lo consiguieron una semana después, cuando Alberto Fernández compartió un acto con Insaurralde. El 13 de julio el presidente anunció en el Club Ituzaingó de Lomas de Zamora el otorgamiento de un bono extraordinario de 5000 pesos a jubilados y pensionados. Los vecinos dejaron sin efecto el corte después de conseguir una reunión con Martín Choren, el sustituto de Viñuales en la jefatura de gabinete municipal.

Pouza apeló el desalojo ordenado por Villena, que fue apartado de la causa por haberlo hecho sin aviso previo ni notificación alguna. Villena y la Gendarmería Nacional fueron denunciados penalmente por la demolición de viviendas. Allí se le objetaron al juez algunas omisiones llamativas, como no mencionar la fecha de la usurpación de la que había acusado a los vecinos ni la mecánica que habrían seguido para practicarla. De haberlo hecho, tal vez habría confirmado el ridículo de todo el operativo.

El delito de usurpación prescribe a los diez años y ya pasaron treinta desde la ocupación de esas tierras. Villena fue sustituido primero por Auge y después por Luis Armella. El juez Federal de Quilmes instó a

las partes a una negociación. La última oferta que realizó el municipio en marzo de 2022 consistió en construir nuevas viviendas de ciento veinte metros cuadrados en el denominado “barrio Pons”, contiguo al de la Ribera, y un subsidio de 200.000 pesos a cada familia para que pudiera alquilar una propiedad hasta tanto se construyera esa edificación.

El promedio de la superficie de una vivienda en el barrio de la Ribera era de ciento ochenta metros cuadrados. Sus vecinos propusieron un cambio de llaves. Entregar la sus propiedades cuando les garantizaran las necesarias para ingresar a otras nuevas. En julio, el Departamento Ejecutivo le solicitó al Concejo Deliberante autorización para comprar el predio del barrio Pons e instalar allí la planta de bombeo que originalmente había previsto instalar en el barrio de la Ribera.

Precisamente, barrio Pons era el predio donde se había propuesto trasladar a sus habitantes una vez construido el complejo edilicio que se pensó en levantar para albergarlos. Hacia allí se mudaron también los gendarmes que habían permanecido desde la frustrada orden de desalojo. Armella le denegó a Pouza el pedido de sobreseimiento de los doscientos treinta y siete imputados por Villena. El letrado apeló esa decisión del juez en la Cámara Federal de La Plata. Si el fallo resulta a favor de su presentación, los vecinos tendrían otro argumento para legitimar su presencia en el predio.

La relación con el municipio cambió. T gestionó con sus autoridades el relleno de una depresión de cuatro metros de profundidad que están cubriéndose con tierra colorada. Algunos funcionarios se habrían comprometido a convertir al de la Ribera en un barrio modelo. Ninguno de los actores involucrados en este conflicto estuvo interesado en removerlo ahora que, en apariencias, estaría superado. Nadie quiso aventurar alguna explicación lógica a este inesperado cambio de planes que experimentó el municipio.

Sin embargo, alguien que siguió con detenimiento ese expediente judicial sugirió averiguar por un hecho que pasó desapercibido en abril de 2022 y que no está registrado entre esas actuaciones. Una mañana de ese mes los vecinos fueron sorprendidos por la aparición de una gigantografía que había sido instalada en la entrada pero que fue

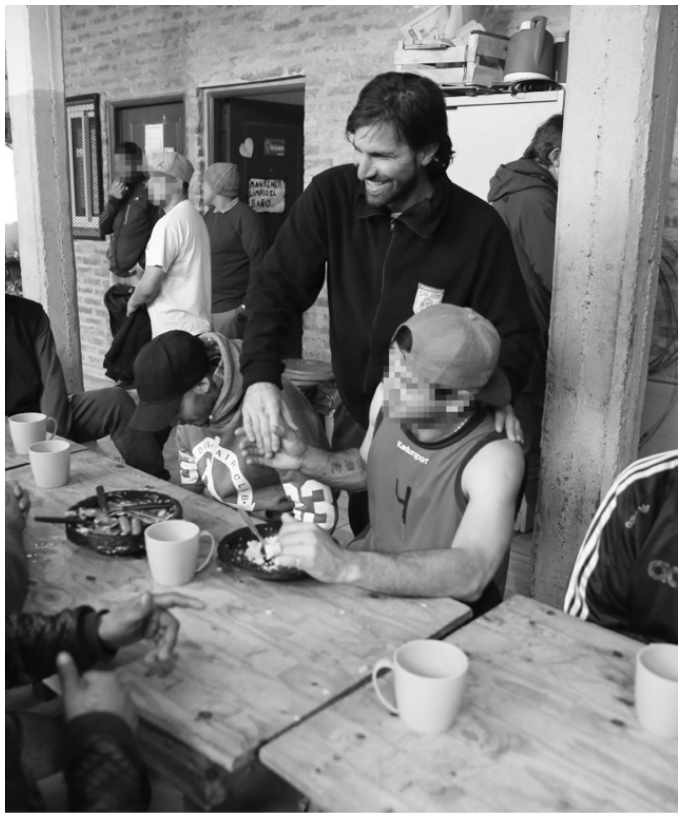
retirada de allí a las pocas horas. El cartel detallaba la obra de la estación de bombeo, su fecha de inicio original y el nombre de la firma a cargo de llevarla adelante.

Pero, sobre todo, el monto del crédito comprometido por el BID para financiarla. Alrededor de 22.000.000 de dólares al cambio oficial de ese momento, a juzgar por esa apariencia, la causa de la premura que desató el conflicto en el que intervino la Justicia Federal. Pouza evitó referirse a esta impresión que no alteró su juicio sobre este asunto. Hasta que el expediente judicial sobre este asunto no sea resuelto, el barrio de la Ribera seguirá siendo una tierra de nadie.

DB

9

Milagro en el infierno



El padre Tano (de pie, en el centro), con residentes de un centro en La Matanza para personas en situación de extrema vulnerabilidad.
FOTO: © Gentileza *La Nación*

A veces, las revoluciones son silenciosas. En uno de los rincones más pobres y violentos del conurbano viene creciendo, sin que el fenómeno haya sido captado por los radares, un programa social que, por volumen y velocidad, no tiene parangón en el país.

El escenario grande de este proyecto impulsado por curas villeros es el partido de La Matanza, el más poblado (1,8 millones de habitantes) y postergado del conurbano, histórico feudo del peronismo. El escenario chico, algunas de las villas que, como Puerta de Hierro y San Petersburgo, en Isidro Casanova, han cobrado celebridad por ser verdaderos shoppings de la droga. Junto con la 17 de Marzo y la 17 de Marzo bis, conforman lo que se conoce como "el triángulo de las Bermudas".

Ahí llegó en 2017, con 34 años, el padre Nicolás Angelotti, al que nadie llama por su nombre. Es el Tano; o el padre Tano. Ojos verdes y pinta de galán de cine, exjugador de fútbol en las inferiores de River y San Lorenzo, lo que encontró al hacerse cargo de la entonces pequeña capilla de Nuestra Señora de la Esperanza —después, parroquia San José, en 17 de Marzo, diócesis de
San Justo— fue un panorama desolador. Pobreza extrema, dominio del narcotráfico, delincuencia, guerras entre barrios. "Esta era una zona marginada, abandonada por el Estado y también por la Iglesia, hasta que monseñor Jorge Bergoglio [entonces arzobispo de Buenos Aires] empezó a involucrarse", dice.

Aplicó entonces lo que había aprendido desde que, a los 17 años, ayudaba al padre Pepe Di Paola, el más famoso de los curas villeros, en la villa 21 de Barracas, y después con el padre Gustavo Carrara en la 1-11-14, del Bajo Flores: un plan integral que, con epicentro en las parroquias, abarcase a todas las edades y prácticamente toda la vida de la comunidad. Lo llaman "pastoral capillera".

Enseguida, el mapa de la zona sufrió una brutal transformación. Ya en los dos primeros años habían aflorado, distribuidos en las cuatro

villas, una escuela primaria y una secundaria (después se alzarían otras), jardines de infantes, hogares de día para chicos, un club con un estadio polideportivo, salas de primeros auxilios, comedores populares, centros de formación de oficios, granja para rehabilitación de adictos, una cadena barrial de medios de comunicación y catorce casas, llamadas "Hogares de Cristo", para personas en situación de calle, adictos, ancianos, enfermos y discapacitados.

"Todo esto se hizo con aportes privados, en primer lugar, y de los tres niveles de gobierno. El 80% de los recursos vienen de empresas y particulares, y un 20%, del Estado", explica el obispo de San Justo, monseñor Eduardo García. Su diócesis, que comprende a 1,8 millones de personas, es una de las más postergadas del GBA. "Las necesidades en estos barrios son tremendas. En las casas viven hasta cuatro generaciones de la misma familia, y acá reinan la droga y el sicariato".

La cruda realidad de la zona se manifiesta a gritos en la cantidad de gente que asiste a los cuatro comedores de la parroquia, uno en cada villa. Allí se distribuyen, todos los días, cuatro mil raciones de comida, provista por dependencias públicas, empresas y ONG, como el Banco de Alimentos.

RM, ejecutivo de una importante empresa privada, conoció al Tano en 2017 durante una obra de teatro a beneficio del programa que empezaba a desplegar la parroquia San José. "Quedé impresionado por su carisma, y además después fui a La Matanza, y cuando vi aquello y lo que se proponían hacer, dije: 'Hay que ayudarlos'". Convenció a la empresa y también a un grupo de amigos, que desde entonces se convirtieron en donantes e impulsores del desarrollo.

Detrás de la multiplicación de centros educativos, culturales, deportivos y sociales que están cambiando la cara de barrios que en sesenta años de existencia (nacieron como núcleos habitacionales transitorios) no han vivido otra cosa que su degradación, hay una estrategia de despliegue territorial que el Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia, los curas villeros, tiene muy claro: estar adentro de las comunidades, ser parte de ellas, llegar a todos, aportar soluciones. "Se trata —dicen— de cambiar las tres C de calle, cárcel y cementerio, que son las sedes del abandono, por las C de capilla, colegio y club, que son las sedes de la vida".

En 2019, la entonces ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que empezó a trabajar con los curas villeros desde que ocupaba el mismo cargo en el gobierno porteño, afirmó: “El modelo que se está aplicando en La Matanza es muy similar al de la 1-11-14. Se basa en el empuje de todo un equipo, en este caso comandado por el obispo García. Yo recorro el país y no he visto ninguna iniciativa como esta, que en tan poco tiempo haya logrado tantos resultados. Por eso estamos ayudándolos, y porque además es una zona históricamente olvidada y muy necesitada”.

“San José no es una isla”, sostiene monseñor García. “Tenemos diez curas villeros en la diócesis, que trabajan muy juntos y con la figura del papa Francisco como gran inspirador”.

Inquietos, no pararon hasta involucrar al Estado en forma directa: cedieron terrenos de la parroquia para que allí se ubicaran, en oficinas y *trailers*, representaciones permanentes de Anses, AFIP, Renaper, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo y Desarrollo Social.

Otra forma de empujar fue ir por delante. “Construimos la escuela y entonces llegaron el asfalto, la luz, el agua... Va dejando de ser tierra de nadie”, apuntan colaboradores del párroco.

Pero al programa le faltaba su golpe maestro, que ya ha empezado a concretarse. También por iniciativa del Obispado de San Justo y la parroquia San José, en un predio ubicado sobre la avenida Crovara se construyen mil cien viviendas, para ubicar allí a todas las familias que hoy están en Puerta de Hierro y San Petersburgo. Sería el final de esos asentamientos, dos de los rincones más oscuros y temibles del conurbano.

El predio pertenecía al Estado nacional, que lo cedió.

Estudiar bajo las balas

En un auto que le prestaron (él se maneja en bicicleta), el Tano llevó a *La Nación* a una recorrida por Puerta de Hierro, un descenso a los infiernos de la marginalidad. En una calle de tierra apenas transitable, que cruza largos y oscuros pasillos, tres chicos de no más de diez años lo saludan y le sonríen. “¡Grande, Tano!” Uno de ellos levanta la mano derecha, con los dedos hace la forma de un revólver y simula que

apunta al auto y dispara. “Es su manera de jugar —tranquiliza el sacerdote—. Están acostumbrados a llevar armas desde muy pibes”.

Dos años antes, una visita como esa, pero a San Petersburgo, produjo un antes y después en la vida de Katherine Crichigno, una maestra de Boedo a la que el Tano llamó con idea de sumarla al proyecto educativo. Recuerda que le impresionó la cantidad de chicos que estaban en las calles, es decir, no escolarizados, y cómo se sorprendían al verla. “¡Una seño, una seño!”. Colgándose de su delantal, uno le preguntó: “Seño, ¿te vas a quedar?”. Eso la decidió. Ahí sí que la necesitaban.

Cuando Katherine (45 años, casada, dos hijos) aceptó el ofrecimiento para ser directora de la primaria y de tres jardines, la escuela todavía no existía. Pero en poco más de un año se levantó el edificio, de tres pisos. Hoy lo muestra con orgullo. “En diciembre del año pasado [2018] abrimos la preinscripción y a las pocas horas ya se había completado el cupo de trescientos chicos, ciento cincuenta a la mañana y ciento cincuenta a la tarde, de primero a sexto grado. Es que es la única escuela que está dentro de la villa”.

El equipo docente, veinticinco maestras y una psicopedagoga, debe lidiar con situaciones complejas: familias desintegradas, chicos que no tienen DNI ni están vacunados, o que a los 12 años no saben leer ni escribir. “Se ven muchas carencias afectivas y también materiales. La semana pasada se incendiaron dos casas de alumnos nuestros porque las calefaccionaban con brasas”, cuenta Katherine, que sigue viviendo en Boedo y todas las mañanas se toma el colectivo 180, que tarda una hora en llegar a La Matanza.

En 2019, la inauguración de un jardín en San Petersburgo terminó de la manera menos esperada: un tiroteo en la puerta que obligó a maestras y chicos a tirarse debajo de las mesas. Como hechos así son habituales, tuvieron que diseñar un protocolo para esos casos. “Este no es solo un proyecto educativo, sino social y pastoral —dice la directora —. Eso es lo que me gusta, lo que me enamora de trabajar acá”.

Junto a la escuela y los jardines, que son gratuitos, hay, en contraturno, lo que llaman “casitas”, hogares de día atendidos por personas del barrio, con actividades instructivas y recreativas. El objetivo es que los chicos estén al menos nueve horas seguros,

contenidos y alimentados, lejos de la calle. “Calle es droga”, dice un colaborador del Tano.

Las tareas las hacen en el aula y la escuela les provee de todos los materiales. Y a partir de las cinco de la tarde tienen actividades en el campo de deportes del club.

En Puerta de Hierro, un jardín y una “casita” a los que asisten ciento cuarenta chicos es el orgullo del barrio y de la parroquia: hasta poco tiempo antes de que empezaran a funcionar, ahí vivían dos *transas* (traficantes).

“¿Ven a ese chico? —pregunta Katherine mientras muestra el patio de la escuela durante un recreo—. Es Tobías, de sexto grado. El otro día me dijo que estaba recontento porque antes no tenía nada que hacer y se entretenía tirándoles piedras a los trenes”.

Conectar con la vida

En un predio de dos manzanas frente a Puerta de Hierro, el Club Atlético San José es el emprendimiento más poderoso y llamativo de la “pastoral capillera”. Hasta no hace mucho era un terreno abandonado, un basural a cielo abierto. Se inauguró en 2018 y tiene un polideportivo techado y con tribunas, una cancha de fútbol grande, cinco chicas (una, de pasto sintético), cancha de básquet, dos quinchos y cinco parrillas. Junto a él se levantaron seis aulas para una escuela de formación de oficios.

Un baldío infame se convirtió así en polo de atracción para cuatro barrios en los que el 60% de la población son menores de 21 años. “El club está abierto a toda la comunidad y a otras escuelas de la zona”, dice Nidia González, de 32 años, catequista y una de las coordinadoras del club. Unos mil chicos de 4 a 18 años y sus familias pasan semanalmente por acá”. Barrios que antes estaban enfrentados ahora aprenden a convivir, afirman en la parroquia.

Además de fútbol, básquet, taekwondo, voleibol y boxeo, hay danza, jazz, folclore, canto, guitarra, violín, orquesta, teatro, patín y acrobacia. Y talleres para jóvenes (la Fundación River tiene a su cargo uno de fútbol). “Si se conecta el deporte con el arte es una conexión con la vida, frente a la delincuencia y la droga, que es cultura de

muerte", dice Nidia.

El padre Tano tiene una pequeña oficina pegada a la parroquia. Allí, siempre vestido con bombachas de campo, zapatillas y una camisa con cuello de cura, se convierte en una suerte de asistente social todoterreno: a cada momento llega alguien que va por trabajo, comida, enfermedad, adicciones, un hijo que desapareció, un marido golpeador. "Así es la vida acá. Yo siempre digo que a la vida hay que abrazarla como viene. Después se buscan los recursos para solucionar los problemas, y no al revés", reflexiona.

Con ese criterio, a la velocidad del rayo crecen y se multiplican los Hogares de Cristo: casas distribuidas por las cuatro villas en las que se acoge a gente desamparada, básicamente proveniente de la calle, la cárcel o los hospitales. En su mayoría, adictos al paco. Ya hay catorce, en las que viven unas trescientas personas. Y cada día se suman más, lo que obliga a abrir nuevas casas. "No hay cupos, porque la realidad es acuciante y no queremos dejar a nadie en la calle", explican en la parroquia.

Concebidos como "familias extendidas", esos hogares, que son chalets sencillos que se compran y reacondicionan, dan techo, cama, ropa, comida, acompañamiento y asistencia de profesionales —médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, profesores de educación física— a gente desahuciada o que no tiene dónde vivir; también a discapacitados. "Es la obra más linda que hace la parroquia. La más evangelizadora", dice el Tano. En cada casa hay entre veinte y treinta residentes, más otros que están bajo un régimen ambulatorio.

Ángel Nieva (35 años) llegó a un Hogar de Cristo en 2016, en la villa 1-11-14, de Flores. "Mi vida estaba perdida. Yo me drogaba desde chico y había estado cuatro años preso por robo en Ezeiza, Devoto y Marcos Paz. El hogar me rescató, me dio un lugar en el mundo".

Ya recuperado, en 2017, cuando el Tano fue destinado a La Matanza, decidió acompañarlo. Pasó a formar parte del dispositivo de atención a los hogares. "Los recorro permanentemente, porque siempre aparecen dificultades, situaciones complicadas".

En cada hogar hay dos o tres acompañantes fijos, en general exresidentes ya recuperados. Y una "madraza": una vecina que supervisa el funcionamiento de la casa y que no falte nada, desde

jabones y toallas hasta frazadas y comida. Andrea Flores (74 años, una hija) es madraza del Hogar de Cristo Don Orione, en el barrio 17 de Marzo. “Cuando perdí a mi hijo Pedro Antonio en Cromañón, pensé que ya nunca me iba a poder recuperar —recuerda, llorando—. Pero ellos, los residentes, son ahora mis hijos. Los quiero y los cuido como hijos”.

Mafiosos al ataque

Nieva cuenta que periódicamente los hogares organizan “noches de caridad”, en las que salen a hacer rondas para buscar a personas en situación de calle, enfermas o bajo efectos del consumo de droga. “Solemos ir a la estación Justo Villegas, del llamado ‘tren del paco’, porque ahí es habitual encontrar gente que ha sido acuchillada o baleada en enfrentamientos con los *transas*”. También recorren cárceles y hospitales.

Pegado a un Hogar de Cristo que está en la parroquia San José vive el Tano, en un cuarto sencillo y despojado. Al caer el sol, se lo ve agotado. Desde muy temprano ha pedaleado en su bicicleta de acá para allá y ha tenido que hacerles frente a dramas que ahí son el pan de cada día. Dice que su único secreto es trabajar y rezar. “Todas las mañanas, al despertarme, me pongo en manos de Dios. Sin su ayuda ya hubiese abandonado”.

En octubre de 2020, el sacerdote fue víctima de un violento robo cerca de la parroquia, en lo que se consideró un acto intimidatorio por parte de una mafia vinculada a las tomas de terrenos. Meses antes, los curas villeros de La Matanza habían criticado públicamente esas tomas mediante un comunicado del Obispado de San Justo. El texto denunciaba a “oportunistas” que aprovechaban la necesidad de la gente para hacer “negocios turbios”.

El ataque al padre Tano fue perpetrado por ocho motociclistas que lo abordaron, le pegaron un culatazo en la cabeza, dispararon seis veces contra el piso y le robaron el celular y el auto, que días después apareció en Merlo.

“Algún costo siempre hay que pagar —declaró el cura—. Pero vamos a seguir trabajando”.[1]

CMRR

1. La versión original de este artículo se publicó el 4 de agosto de 2019 en el diario *La Nación*. Aquí se reproduce con datos y cifras actualizados.

10

Escuela N° 43: de Fiorito a Estambul

Escuela Secundaria N° 43, en La Cava de Villa Fiorito.
FOTO: © Daniel Bilotta

Originalmente, La Cava de Villa Fiorito fue un lago hacia el que escurrían las lluvias en un territorio naturalmente bajo, ocupado en la década de 1950 por inmigrantes europeos, mayormente italianos y españoles. Un flujo reemplazado progresivamente, desde los años setenta, por otro proveniente de países limítrofes, Paraguay y en menor medida Bolivia, hacia el barrio más importante de la periferia de Lomas de Zamora. En 1995, Villa Fiorito fue declarado ciudad como parte del proceso de urbanización en su casco histórico.

La sustitución de pasillos por calles de pavimento atemperó el rango de zona violenta que aún mantiene. El espejo de agua que setenta años atrás había alentado la instalación de hornos de ladrillos para aprovechar la cercanía con su materia prima, el barro, pasó a convertirse, con el tiempo, en una depresión seca del suelo que, en los años ochenta, comenzó a ser rellenada. Un proceso junto al que aparecieron los primeros atisbos del cartoneo, que es como se denomina usualmente a la recolección de residuos reciclables.

Ese medio de subsistencia determina la vida de las 15.000 personas que ocupan las veinticuatro manzanas en esa zona. También conocida como “cirujeo”, esa actividad es la principal fuente de ingresos para un sector importante de su población. Los subsidios que distribuye el Estado mediante diversos programas sociales son la que le siguen en importancia. La incorporación a la oscura fuerza de trabajo empleada por el narcotráfico es otra, más irregular e insegura, por fuera de esa escala.

La Cava está situada al noroeste de Lomas de Zamora, entre las avenidas Ejército de los Andes y General Hornos y las calles Roberto Arlt y Recondo. Su urbanización en diagonal al resto de Villa Fiorito es el rasgo que le debe al proyecto destinado a que la avenida General Paz se prolongue sobre su superficie hasta Lanús para unir a esa ciudad con el Puente La Noria, del mismo modo que el Camino Negro lo hace con Lomas de Zamora.

En algunos viejos mapas catastrales pueden hallarse las huellas de esa iniciativa inconclusa, que sentó las bases de otra muy distinta sobre tierras del Estado nacional a pocas cuadras del Camino Negro. Para llegar desde la estación de Lomas de Zamora hay que tomar la calle Boedo, al 600 girar a la derecha por Azara y continuar su recorrido hasta el cruce con Alberto Larroque. Desde allí hay que seguir, y doblar en Unamuno a la derecha hasta la avenida Ejército de los Andes.

Quien ingrese desde la ciudad por la avenida General Paz tiene que descender por el desvío hacia Recondo después de cruzar el Riachuelo y pasar por el distribuidor debajo del Puente La Noria. La Unidad de Pronta Atención (UPA) de Fiorito y el cuartel de bomberos homónimo sirven de referencia para confirmar que se está en el camino correcto.

En el cruce de Recondo con la calle Filardi, un kilómetro más adelante, es preciso girar a la derecha. Allí aparece el Club Juventud Unida de Villa Fiorito, una de las entradas a La Cava. Pero, si se continúan otros doscientos metros por Recondo hasta Plumerillo, aparece un imponente edificio de tres plantas identificado como el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC), tal vez el mayor símbolo de la comunión entre Víctor Grosi y *Manguera*, el apodo por el que se conoce a Rodolfo Aguilera, exjefe de una de las tres parcialidades que se disputan el control de la barra del Club Atlético Los Andes sobre la que todavía conserva cierta influencia. Grosi es el secretario general del SITRAIC, una facción disidente de la UOCRA que resolvió constituir su propio gremio ante la imposibilidad de pelearle a Gerardo Martínez el liderazgo del sindicato de los trabajadores de la construcción.

Cómo deshacerse de un muerto

Algunos enfrentamientos entre sus sectores más violentos para disputarse afiliados tuvieron lugar en los obradores. El más recordado ocurrió en febrero de 2011 en la avenida Las Heras y Almafuerte de Banfield oeste, mientras se construía la sucursal de un hipermercado. Grosi tiene domicilio en Lomas de Zamora y en 2018 se convirtió en presidente de Los Andes tras vencer a Vicente Rudi, el candidato

apadrinado por el intendente Martín Insaurralde. Grosi se alió al poco tiempo con el intendente de Lomas de Zamora para fortalecer su posición en el club, cuya popularidad en Villa Fiorito es abrumadoramente superior a las de Temperley y Banfield, otros dos clubes de la zona. Solo la que despierta Boca Juniors es equiparable a la de Los Andes. No es la única afinidad. Hay una estrecha conexión entre sus barras a través de Marcelo Aravena y Maxi Coronel.

Alias *el Manco* o *Marcelo de Lomas*, Aravena lidera la fracción más violenta de La Doce. Así es como se denomina a la barra de Boca, que lidera Rafael Di Zeo. A su amparo, Aravena y Coronel pasaron a liderar la barra de Los Andes. Esa comunión está rota y cada uno encabeza ahora uno de sus sectores. Lo que no cambió es el ascendiente de Di Zeo sobre sus dos secuaces.

Al comienzo, Aravena fue secundado por Coronel en Boca y en Los Andes, pero después entraron en conflicto. Detenido en 2017 por la causa judicial abierta por ilícitos en la Feria La Salada, Aravena sufrió en 2020 un intento de asesinato en su domicilio de Lomas de Zamora mientras gozaba del régimen de prisión domiciliaria. Algunas versiones sindican a Coronel como el autor intelectual de ese atentado.

Condenado a dos años y medio de prisión como jefe de una asociación ilícita, Coronel accedió después al mismo beneficio que Aravena. En 2021 recrudecieron sus enfrentamientos con los familiares de José Paz, el jefe histórico de la barra de Los Andes, que lideraba el tercer grupo en discordia. Paz fue condenado en 2014 a catorce años de prisión por el asesinato de un hincha de Banfield.

La recaudación ilegal en las fechas en que Los Andes juega de local es uno de los botines que se disputan. El otro es la organización de torneos de fútbol en el predio que el club tiene en Villa Albertina y cuya final suele jugarse en el estadio Eduardo Gallardón: la cancha de Los Andes.

Manguera ya era un histórico empleado de la Municipalidad de Lomas de Zamora y mantenía un vínculo con Grosi, que terminó de estrecharse con su gestión en Los Andes y de consolidarlo como responsable de los servicios de seguridad contratados por las empresas constructoras para que las maquinarias y herramientas utilizadas en las obras no sufrieran percances.

Aquellas firmas que dudan de la necesidad de contratar ese sistema de vigilancia son evacuadas rápidamente luego de ser víctimas de un siniestro que —según versiones que nadie parece dispuesto a confirmar— se le imputa a la organización controlada por *Manguera*, que recluta empleados para su emprendimiento en La Cava, particularmente entre barras de Los Andes.

Esa tarea de custodia no siempre es rutinaria. La sobreoferta de interesados en brindarla supera la demanda en un mercado muy concentrado y fija reglas de competencia, a veces violentas y con muertes. A *Manguera* se le atribuye al menos una cuando tenía a su cuidado los trabajos de lo que ahora es la terminal de ómnibus de Puente La Noria, adjudicada al empresario Néstor Otero, procesado junto a Ricardo Jaime en una causa por entrega de dádivas.

Jaime fue secretario de Transporte en la presidencia de Néstor Kirchner. En agosto de 2018, Otero fue condenado y detenido por la denominada "Causa de los cuadernos", en la que el exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, describió la ruta de las coimas que pagaba un presunto club de la construcción para repartirse las licitaciones de obras públicas. Baratta fue un funcionario de extrema confianza de Julio De Vido en los doce años que fue titular del Ministerio de Planificación Federal.

En octubre de ese año, Otero fue beneficiado con la prisión domiciliaria. El homicidio que se le atribuye como una certeza a *Manguera* en La Cava habría sucedido en la zona de la terminal, a unos mil metros del barrio, en circunstancias difíciles de establecer. El supuesto temor a las consecuencias legales lo habría impulsado a arrojar ese cuerpo sin vida al otro lado de la avenida General Hornos, que divide a Lomas de Zamora y Lanús, o más precisamente a Villa Fiorito de Villa Caraza. Pero deshacerse del muerto no le habría resultado tan sencillo como habitualmente debería ser cruzar de una vereda a la otra. Las autoridades policiales de Lanús advirtieron a las de Lomas de Zamora que ese cadáver no tenía que ver con un hecho ocurrido en su jurisdicción sino en la de ellos. Precisamente, en la que *Manguera* protegía el predio de la terminal.

El jefe de la barra de Los Andes pudo sortear cualquier dificultad derivada de ese episodio por la condición de *poronga* que le reconoce

la dirigencia política. Una denominación que reivindica el supuesto coraje y agresividad de quienes se ganan ese rango en una jerarquía que dejó de ser utilizada exclusivamente entre la población del sistema carcelario y se extrapoló al universo paralelo en que los barras conviven y defienden intereses de partidos políticos, sindicatos y empresas.

La invocación a un *poronga* puede determinar el modo en que será resuelto un conflicto por el robo de un automóvil en el casco histórico de Fiorito, a manos de una banda que actúa allí pero que reside en los barrios de la periferia. Como La Cava. Hay pocas opciones para saldar las diferencias en un episodio de este tipo. Por lo general son dos: el diálogo o los tiros. Si el apodo que recibe el *poronga* no funciona como clave de acceso para habilitar la primera de esas alternativas, lo que sigue es una balacera.

La secuencia de ese protocolo respeta, más o menos, la siguiente cronología. Se publica el siniestro en las redes sociales, preferentemente Instagram, acompañado de una foto del vehículo sustraído y el número de patente. Por el aporte de los posteos, el damnificado va siguiendo el rastro. Si esa pesquisa resulta efectiva, establece el lugar donde está retenido. Ahí pasa a indagar entre sus contactos sociales quién mantiene vínculos con el *poronga* de esa zona y si es posible llegar a él o a su entorno.

Para eso recurre a otro *poronga*, por el que hace llegar un mensaje. Si entre ambos hay respeto y concordia, el automóvil es devuelto con un pedido de disculpas. La dificultad puede surgir si fue robado por *soldaditos del narco* —menores de entre 11 y 15 años— a pedido de otra banda para cometer un delito. Probablemente allí haya que recurrir a disparos intimidatorios para proceder al rescate y soportar una respuesta equivalente.

Los *soldaditos* tienen peso en los pasillos. En la periferia, esas vías de comunicación sustituyen a las calles y a todas las actividades que estas suelen contener, en el más amplio sentido de su acepción. El control del tránsito en los pasillos confiere una posición de poder. Aquel que lo ordena y lo regula es el que manda. La búsqueda de vehículos robados en su interior es algo natural para quienes viven en Villa Fiorito. Forma parte de sus hábitos cotidianos y de su forma de

convivencia.

Esto puede suceder cualquier día de semana, usualmente por la noche, a pocas cuadras de la ciudad de Buenos Aires y sin que el Estado intervenga. Por eso es literalmente imposible que estos hechos sean reflejados en sus estadísticas. Algo bastante lógico: a ninguna de las partes involucradas en el robo de un auto se le ocurriría acudir a la policía. Les resultaría descabellado. Ese tipo de práctica recoge un rechazo casi absoluto en su cultura.

Pero si eventualmente alguien la llamase, podría lograr que quienes estén disputándose la posesión de un bien depongan transitoriamente sus diferencias para unirse y enfrentar mancomunadamente a las fuerzas de un orden que les es por completo ajeno. Ese veto es un poderoso disuasivo para los uniformados.

Los que se atreven saben que cruzan una frontera peligrosa. Ingresan a un territorio donde imperan reglas en las que su representación es desconocida, lo que le confiere otra connotación mucho más inquietante a su falta de inserción en el catastro municipal. La Cava es otra de las zonas blancas en el mapa de Lomas de Zamora.

El robo no siempre tiene como finalidad cumplir con la cuota de aporte exigible a quien integre la cadena de producción de una organización criminal. Muchas veces, está asociado a la necesidad de volver a experimentar la descarga de adrenalina que concita la emoción de robar. Esa pulsión induce a quienes la realizan a recaer en esta supuesta adicción al delito, donde encuentran un goce que no satisface la prosperidad alcanzada con los emprendimientos de gastronomía, mantenimiento de automotores y limpieza de oficinas, entre otros rubros que administran legalmente. Un estatus al que *Manguera* habría accedido por su alianza con Grosi: le permitió asegurar su emprendimiento comercial y transformar la modesta unidad básica que regenteaba en Recondo y Plumerillo en la sede más importante del SITRAIC.

Esta es una descripción parcial del entorno en el que un grupo de docentes decidió crear en 2008 un colegio secundario con orientación en artes visuales sobre la base de la Escuela Nº 43 de La Cava de Villa Fiorito, en la que venían desempeñándose como maestros de grado. Pero, para completar la versión de lo que circunda a esta experiencia

que acumula más de diez años, resulta imprescindible dialogar con Leonardo Álvarez sobre el hambre, otro estrago cotidiano que vuelve un verdadero flagelo la absurda competencia por mitigarlo entre organizaciones del denominado tercer sector y los punteros políticos que intermedian con el Estado.

Belleza y felicidad

La Escuela Nº43 está en la esquina de Islandia y Morazán, a unos cincuenta metros de Milán 1821, donde se encuentra Sal de la Tierra, la ONG presidida por Álvarez, que es algo más que un observador privilegiado. Fue ordenado pastor evangélico en 1994 en la iglesia Luz de Esperanza, que lo eligió para presidirla. Aunque duró poco en ese cargo, ya que renunció ese año para fundar la agrupación de pastores villeros.

En 2001 creó Sal de la Tierra, que asiste alimentariamente a casi el 70% de La Cava. La disputa por socorrer a los necesitados no es abierta y se expresa en el choque de lógicas antagónicas. Esa rispidez de apariencia incomprensible es la que lo induce a sostener que, “lamentablemente, este municipio (por el de Lomas de Zamora) no quiere a los pobres”.

Su pasado, del que no reniega, tal vez sea el argumento más consistente para sostener una afirmación de ese calibre. “Comí de la basura”, revela sin avergonzarse. Es el modo en el que verbaliza su discrepancia con el manejo de las áreas locales dedicadas a la asistencia, aunque evita llevarla al plano de la confrontación.

Álvarez defiende la ayuda inmediata como el credo con el que predica su fe en el templo que creó en Remedios de Escalada. Esa entrega sin dilaciones ni intermediarios de los recursos públicos y privados que recibe Sal de la Tierra es la gran desavenencia con la práctica que predomina históricamente en la mayoría de los municipios del conurbano, donde los canales de distribución quedan sometidos al interés que privilegian los punteros políticos para captar, y canjear, el voto por el beneficio de su acción, un paso burocrático que condiciona su capacidad de dar una respuesta rápida. Álvarez describe esta perversa manipulación de manera solvente y simple

como “el manejo político”. Esa demora cobra carácter crucial en situaciones críticas e inesperadas, como las que se atravesaron en la pandemia, un período en el que Sal de la Tierra afianzó la relación con dependencias oficiales, que, bajo esas circunstancias, aplicaron su modelo de gestión.

Aportó noventa voluntarios que fraccionaron y distribuyeron cincuenta mil litros de lavandina enviados por el gobierno nacional, y colaboró con el Plan Detectar del gobierno bonaerense, lo que permitió aislar y asistir a trescientas familias que habían contraído el COVID-19. En la actualidad, hay mil ochocientas familias empadronadas que reciben semanalmente una entrega de alimentos, que Sal de la Tierra distribuye gracias a las veintitrés toneladas de comida que le envían los ministerios de Desarrollo Social de la nación y el bonaerense.

Escuelita *beia*

El reparto incluye la provisión de agua mineral. La falta de agua potable es otra carencia inquietante en la zona de la ribera del río Matanza. La BBC de Londres estrenó el 29 de septiembre de 2022 el documental de radio “Argentina: la vida con hiperinflación” (www.bbc.co.uk), donde quedó reflejada la actividad de esta ONG en este ambiente hostil, donde en 2009 la Dirección General de Escuelas (DGE) bonaerense aprobó la creación de un bachillerato con orientación en artes visuales en la escuela N° 43.

No deja de ser curioso que una audiencia potencialmente planetaria pueda enterarse antes que otra más cercana geográficamente a La Cava de lo que significa la experiencia de vivir en ella. Y del ambicioso proyecto presentado en 2008 a la DGE por Lorena Bossi y Leandro Tartaglia con la intención de transformar ese hábitat, y que en 2013 llevaron a la Bienal de Arte de Estambul. Los dos comparten la doble condición de maestros y artistas.

Bossi dirige en la actualidad el Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en las instalaciones de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y fue galardonada en 2022 por la Fundación Konex con el Premio Platino en la categoría “colectivos artísticos” en

reconocimiento al Grupo Arte Callejero (GAC), que integra desde 1997. Bossi y Tartaglia coincidieron en La Cava en 2008.

Como él mismo lo relata (www.youtube.com), llegó ese año para dar clases en la escuela. Bossi se había incorporado en 2005 a la N° 349. Pero fue Fernanda Laguna la pionera en abrir una puerta a esa aventura. En 2003, inauguró en Villa Fiorito una sede de la galería Belleza y Felicidad, que funcionaba en el barrio de Almagro. En 2006, asesorada por Mariela Scafati, Belleza y Felicidad presentó un proyecto al Fondo Nacional de las Artes para dictar a jóvenes de esa localidad talleres de arte, a los que llamaron "Liliana Maresca".

Maresca nació en Avellaneda en 1951 y falleció en 1994 a causa del HIV en la ciudad de Buenos Aires. Desarrolló una extensa y ecléctica obra artística entre las décadas de 1980 y 1990, que fue redescubierta después de su muerte. Dentro de ella se destaca la muestra "Recolecta" (1991), en el Centro Cultural Recoleta. Una crítica al consumismo plasmada en la transformación de desechos en objetos artísticos, de los que sobresalieron cuatro carros con su caga completa adquirida por Maresca a cartoneros del exalbergue Warnes.

Esa exposición significó la confirmación pública de su cercanía con el universo de los marginados, que había comenzado en la década de 1980. Laguna y Scafati tomaron contacto con Bossi para sumarla a esa iniciativa, que en 2007 comenzó a dictar cursos de pintura, dibujo y poesía. Tartaglia se incorporó al año siguiente, a lo que en La Cava se citaba como "escuelita *beia*".

Los cuatro fueron convocados por el director de la Escuela N°43, Diego Llanos, para desarrollar el proyecto pedagógico del bachillerato, con la premisa de que el arte se adaptase a las necesidades de la villa y adoptando como propio el nombre que habían recibido los cursos. La DGE aprobó su creación en 2009, en el marco de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, que promovió la obligatoriedad del ciclo segundario y sustituyó a la Ley de Educación Federal.

Historia, conflictos y deseos

"Una iniciativa así no iba a llegar desde el Ministerio de Educación. Lo usual es que este tipo de experiencias tengan lugar en centros de élite.

Yo ya trabajaba en otra escuela y luego fueron tomando horas otros docentes preparados para llevar adelante este programa de vanguardia en la formación de nuevas generaciones", recuerda Bossi. La voz de Tartaglia refuerza esa idea: "Somos docentes de aula. Construimos este proyecto con la comunidad educativa y la barrial".

"Es un programa de formación que piensa el arte contemporáneo como una herramienta de transformación social y descubrimiento personal", añade sobre esta propuesta, donde se promueve que "el acompañamiento de su formación como adultos origine cuestionamientos creativos a la problemática cotidiana. Las chicas y los chicos atraviesan su adolescencia en medio de dificultades económicas típicas de las villas".

"Viven ese período intensamente, con responsabilidades en sus hogares y, en varios casos, incorporados al mundo del trabajo informal para colaborar con la economía de sus familias. Lo que nos proponemos con el arte es contribuir a una experiencia estimulante de trabajo y de conocimiento", completa la voz en *off* de Tartaglia en su canal de YouTube, donde puede verse el documental que recopila la historia de esta escuela.

De poco más de media hora y subtitulado en inglés y turco, este audiovisual fue realizado en 2013, cuando el bachillerato fue invitado a participar en la Bienal de Arte de Estambul, que tuvo lugar entre el 7 y el 14 de septiembre, por sugerencia a sus organizadores del curador argentino Javier Calle. Un tipo de muestra donde, usualmente, son invitados a exponer sus obras los representantes de cada uno de sus géneros, pero no instituciones educativas.

A Tartaglia y Bossi se les ocurrió aprovechar esta situación excepcional para poner a prueba la premisa desde la que partieron cuando crearon el bachillerato: combinar arte y territorio para promover una transformación social. Un año antes, había egresado la primera promoción de la escuela secundaria. Los alumnos fueron invitados a escribir con aerosoles sus nombres en un muro del edificio junto a la leyenda: "Lo imposible solo tarda un poco más".

Bossi le propuso al curso de sexto año diseñar tres mapas del barrio —historia, conflictos y deseos— y disponerlos en una maqueta que les permitiera mostrarlo a escala en la bienal. De los estudiantes surgió la

idea de darle denominación a cada pasillo de La Cava como una forma de brindar respuesta a los problemas de esa forma de circular en su interior: casos de gatillo fácil, violencia institucional y de género.

"Los nombres no siguieron ningún criterio en particular. Fueron apareciendo como alegorías de situaciones cotidianas. A uno se lo llamó 'Floral' porque una de las viviendas ubicadas allí tenía la peculiaridad de tener un jardín con muchas flores", precisa Bossi. Uno de los docentes que integraron la delegación que viajó a Estambul junto a dos alumnos. En 2016, el bachillerato participó de la Bienal de Arte en París, esta vez con un proyecto de postales sobre La Cava.

En 2020, Bossi fue designada en el Centro Cultural Haroldo Conti y dejó el bachillerato. Aunque el resultado de la experiencia de la bienal en Estambul fue positivo, no pudo cumplir por completo con la expectativa que había generado. "Fue un intento de sensibilizar a la política para que le prestara otro tipo de atención a una escuela olvidada", señala Alicia Moreno, docente de Literatura en el secundario.

Tal vez una esperanza signada por los lazos profundos de aquella lejana ciudad con la historia del cristianismo haya estimulado el deseo de que se produjera un verdadero milagro: el reconocimiento a la tarea de este enclave como "un espacio de la educación pública y una experiencia positiva para el conurbano", subraya Tartaglia, que sindica a "la lentitud de burocracia estatal y las condiciones precarias de trabajo" como "una de las mayores dificultades con las que nos encontramos".

El hecho prodigioso

Formulada en 2013 para el documental que llevó hasta Estambul a la Escuela N°43, su crítica mantiene una demoledora actualidad, donde la indefinición de la DGE para resolver un trámite iniciado junto al de su creación —que pueda llamarse oficialmente "Liliana Maresca"— es apenas un detalle revelador de un riesgo ciertamente mayor: convertir en un hecho aislado a lo que se propusieron Bossi y Tartaglia, es decir, intervenir con el arte en los pasillos para mitigar la violencia que caracteriza a cualquier territorio que sea el centro de disputas.

En los dos últimos meses del ciclo lectivo 2022, seis de los trescientos cincuenta alumnos de la matrícula del bachillerato murieron a causa de hechos relacionados con el narcotráfico. Especialmente el consumo del paco. Tenían entre 18 y 20 años. Pese a que el consumo y el tráfico de estupefacientes es el factor de mayor riesgo de muerte en las villas, no es el único con el que se convive. Aunque quizás sea menos perceptible, otro inquietante es la dificultad creciente de formar en el secundario a los que llegan desde el ciclo primario sin ser alfabetizados.

La falta de alimentación condiciona el aprendizaje. Un contexto en el que, sin embargo, es notorio el contraste en el nivel de lectoescritura entre quienes provienen de países limítrofes y los nativos. Un proceso en el que se destaca el avance progresivo del flujo migratorio desde el Paraguay, que comienza a predominar frente al declive del litoral: la otra corriente que le sigue en importancia. En el aula, los alumnos de origen paraguayo aventajan abismalmente a los argentinos.

Diseñada en los talleres de arte por la primera promoción del bachillerato, la cartelería que designa con los nombres elegidos por sus alumnos permanece en el mismo lugar donde fue colocada hace diez años. Tal vez la Escuela N° 43 sea el hecho prodigioso por el que aguardan los jóvenes en La Cava de Villa Fiorito.

DB

11

Narcos en patrulleros

Decomiso de droga y otros elementos en un búnker de narcomenudeo que funcionaba dentro de una villa del conurbano.
FOTO: © Gentileza *La Nación*

Cierto intendente había logrado llegar al cargo después de una campaña electoral en la que, entre otras cosas, prometía combatir el narcotráfico. Lo decía en serio: se proponía perseguirlo y desterrarlo de su partido, en una geografía neurálgica del conurbano bonaerense, donde tanto daño estaba haciendo.

"El narco —afirma— es un virus letal, con consecuencias furibundas en todos los planos: la seguridad, la familia, la convivencia social, la salud, la educación… Recorriendo los barrios [villas] he visto la cara desfigurada de pibes que consumen paco, he visto a madres llorando porque la droga entró en su casa y destruyó todo, he visto soldaditos de 12 años que no van a la escuela porque con el negocio de la merca les va bárbaro…".

Peronista, de formación católica y fama de honesto, se juró hacer algo contra ese flagelo, y hacerlo rápido. "Desde el primer momento", cuenta hoy, bajo la expresa condición de que se reserve su identidad.

En ese entonces gobernaba Mauricio Macri. El flamante intendente fue a ver a un alto funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, al que conocía desde hacía tiempo, para pedirle ayuda en la guerra que estaba a punto de entablar contra el crimen organizado; solo, con las pocas fuerzas de las que disponía, iba a resultarle imposible. No pudo encontrar mejor eco. Su interlocutor le dijo que le pasara veinte lugares en las villas de su distrito donde tuvieran identificados "quioscos" de venta de drogas. Él se ocuparía de mandar gente; una primera avanzada.

Cumplió. Después de recibir el listado, casi de inmediato envió personal a una de las villas, la que estaba más comprometida. Eran dos agentes encubiertos, para un trabajo de inteligencia previa.

Esos dos hombres fueron un lunes y caminaron por el barrio, charlando discretamente con vecinos. Ese mismo día, a la noche, el intendente tuvo una visita inesperada en su casa: los dos principales jefes locales de la Policía Bonaerense.

“Señor —lo apuraron—, ¿usted mandó a esos dos muchachos que hoy anduvieron en el barrio X husmeando y preguntando sobre droga?”. Les contestó que sí. No dijeron más nada; subieron al patrullero y se fueron. El hombre entendió perfectamente el mensaje: nada pasaba en esa villa sin que ellos se enteraran, y él debía enterarse de que no se estaba metiendo con los narcos, sino con una caja de la policía.

Por supuesto, la incipiente coproducción antidroga Nación-municipio quedó abortada en ese mismo momento.

Otro intendente de un partido de la misma zona relata esta historia. Una vez le pidió a un comisario de la Bonaerense que apartara o pasara a disponibilidad al agente a cargo de la seguridad en un barrio. “Sabíamos perfectamente que andaba en la joda, no solo con merca, y causaba muchos problemas”. El agente fue desplazado. Dos meses después hubo un furioso tiroteo en la villa. El intendente llamó al comisario para saber qué estaba pasando. El diálogo fue en estos términos:

—Comisario, terrible lo del tiroteo. ¿Qué pasó?

—Bueno, usted se acordará, me pidió que sacáramos a XX.

—Es verdad, pero algún quilombo habrá ahora para que se caguen a tiros.

—Usted me pidió que sacáramos a XX.

—Sí, OK, ¿y eso qué tiene que ver?

—Usted me pidió que sacáramos a XX.

Otro intendente enterado, en código policial, de los lugares y temas en los que no debía meterse.

Muertos, sí o no

Desde hace años, en los pasillos del poder se habla de que la Bonaerense controla —administra, habría que decir— el tráfico de drogas en la provincia. Ante la pregunta sobre qué porcentaje de ese mercado le corresponde, la respuesta es prácticamente unánime: todo.

“No se vende un gramo sin que la policía lo sepa y lo permita, y por lo cual obviamente cobra. Es una fuente inagotable de dinero”, dice el exintendente que hizo remover al agente corrupto. Pero pone el acento

en algo que también conocen los estudiosos del tema y que algunos se han animado a señalar públicamente: gracias a que todo el aparato de distribución y venta está en una sola mano, no hay conflictos entre bandas, no hay disputa de territorio, no hay muertos.

"Esa es la gran diferencia con Rosario", sostiene, también bajo estricto *off the record*, un legislador provincial de Juntos por el Cambio. "Acá, la policía tiene el monopolio y entonces el negocio es mucho más ordenado. Allá hay dos familias, los Cantero (Los Monos) y los Alvarado, que están en guerra permanente por el dominio del mercado. Si uno se mete en la zona del otro, es boleta. Y las dos familias tienen su extensión en la policía, en la Justicia y en la política". Es decir, advierte, el enfrentamiento no se da solo en las calles, sino en despachos del poder político, judicial y del aparato de seguridad. "El peor de los mundos".

En Rosario, esa partición —la feroz grieta de la droga— se paga con sangre: en los dos primeros meses de 2023 hubo casi sesenta muertos (muchos de ellos, menores de 18 años); un promedio de una persona por día. Las muertes siempre generan consternación, escándalo, temor social y tensión política, como se ha visto en las permanentes acusaciones entre el gobierno del Frente de Todos y las autoridades santafesinas. En el GBA, un mercado casi diez veces mayor que la ciudad de Rosario (algo menos de 11 millones de habitantes contra 1,3 millones), las cifras del narcotráfico son muy superiores, pero con la diferencia de que no hay muertos. "Si no muere nadie, no hay ruido ni repercusión mediática. Es una tragedia de dimensión pavorosa que ocurre en silencio, con la complicidad de gente de la política y del Poder Judicial", dice el legislador bonaerense.

La misma matriz delictiva rigió durante décadas en la provincia para el juego clandestino y la prostitución: los manejaba la policía. Los dueños del negocio no cambiaron; lo que cambió es el producto que comercializan, la droga, infinitamente más redituable que prostitutas y casinos clandestinos. Pero es un hecho que los dividendos se reparten entre cada vez más personas ("ningún cana quiere quedar afuera", dice un fiscal federal), lo cual deriva en que la policía necesita recaudar más.

En el origen, Felipe Solá

Funcionarios judiciales, dirigentes políticos e investigadores académicos han coincidido en que la expansión del narcotráfico en todo el país, y especialmente en el gran mercado del conurbano, se vio favorecida por la Ley de Desfederalización de la lucha contra la droga impulsada en 2004 por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, en momentos en que arreciaba el delito.

La aprobación de la norma en el Congreso se logró en medio de un ardoroso debate que incluyó diferencias en el propio bloque oficialista del Senado: Cristina Kirchner, la figura saliente del cuerpo y, además, primera dama, se ausentó a la hora de votar el proyecto; en discusiones internas planteó fuertes objeciones. El único ministro de Néstor Kirchner que elogió la iniciativa fue Aníbal Fernández.

La ley dividió la investigación en causas de comercio de droga en forma horizontal: si se trata de pequeñas cantidades, el llamado narcomenudeo, debe intervenir la Justicia ordinaria, que opera en el terreno a través de las policías provinciales; en grandes volúmenes, la Justicia Federal, con la Policía Federal. Las crónicas de ese tiempo recogían la firme resistencia de magistrados —entre ellos, la jueza Lucila Larrandart y el fiscal Carlos Cearras—, legisladores de la oposición y especialistas en narcotráfico, quienes advertían que el esquema le daba excesivo poder a la policía. Temían sobre todo lo que pudiera ocurrir con fuerzas como la Bonaerense, con una larga historia de probado involucramiento en casos de corrupción.

Los pronósticos más agoreros se cumplieron al pie de la letra. La policía tardó nada en descubrir que habían puesto un tesoro en sus manos. Según fuentes del Poder Judicial y la política, el procedimiento de la Bonaerense es este: cuando dispone o permite la apertura de un quiosco o búnker en una villa, en forma simultánea planta en los tribunales una denuncia “anónima” sobre la presunta venta de estupefacientes en el local que se acaba de abrir; consigue así que un juez o fiscal la autoricen a investigar el caso y que ya no pueda intervenir nadie más. Se controla a sí misma. En el caso de que aparezca una nueva denuncia, ahora real, sobre ese punto de venta, la policía activa la denuncia anónima y lo cierra; en el procedimiento

puede hasta secuestrar pequeñas dosis de droga y una balanza, y detener a la persona que estaba a cargo en ese momento, que veinticuatro o cuarenta y ocho horas después recupera su libertad. Muerto el rey, viva el rey: a la semana siguiente, el quiosco es reabierto en otro lugar del barrio.

Así, muy rápido se produjo un crecimiento exponencial en el número de búnkeres. Los narcos se hicieron más poderosos que punteros políticos y organizaciones sociales, como grandes empleadores y movilizadores de la economía villera. Convertirse en *transa* o *dealer* pasó a ser aspiracional para chicos que los ven como emprendedores exitosos que se pueden comprar motos y las mejores zapatillas.

¿Qué autos estacionan diariamente frente a los búnkeres? Los testimonios en los barrios son unánimes: patrulleros; pasan a buscar la recaudación del día. Cuidan esa caja que se renueva día tras día, impulsada por un aumento sistemático en los índices de consumo. Aunque parezca que operan sin límites, tienen uno: no puede haber muertos; sería poner en riesgo el negocio. Policías y narcos del GBA seguramente se ríen de sus colegas de Rosario, que andan todo el día a los tiros, regando las calles con sangre.

El de hoy parece ser el *statu quo* ideal para ellos: el narcomenudeo crece y se consolida en las sombras, bien lejos del debate político y de la curiosidad de los medios. Años atrás, un jefe distrital de la Bonaerense llamó al ministro de Seguridad del partido; tenía un solo mensaje: “Por favor, dígale a su intendente que deje de hablar”. Invitado a un programa de televisión, el intendente había descripto con lujo de detalles cómo operaba el esquema narco: la droga viene de Bolivia y Paraguay y duerme en la Capital Federal, básicamente en la villa 1-11-14, en Flores, hasta el día antes de salir a la venta en algún barrio del conurbano, bajo custodia y supervisión de la Bonaerense.

Perejiles, no peces gordos

El problema, afirma el intendente que había prometido combatir el tráfico, es que, aunque se conozca el *modus operandi*, la ley antidrogas, o “Ley Felipe”, impide avanzar más allá del mercado minorista. “A lo

sumo cae algún perejil, pero no es posible seguir para arriba, ir por los peces gordos. Se corta el hilo que lleva a los grandes proveedores de la red infinita de quioscos".

En ámbitos políticos y académicos se señala que es imperativo romper con el "monopolio de la información": la Justicia y los gobernantes solo se enteran de lo que pasa en la calle por la versión que les da la policía. Jueces y funcionarios, se sostiene, podrían ser considerados "cómplices por omisión" de un delito que causa estragos en la sociedad. Las cárceles de la provincia lo testimonian: en un porcentaje muy mayoritario, droga y delincuencia se entrecruzan en las biografías de los hombres y mujeres que terminaron tras las rejas.

Un viejo comisario de la Bonaerense, ya retirado, descree de las periódicas purgas en las filas policiales como forma de sanear la institución. Lo dice con gracia: "Los políticos van haciendo cortes en la policía como si fuera un jamón. Empiezan a rebanar en fetas y ven que es jamón cocido. Entonces siguen cortando porque se ilusionan con que en algún momento va a aparecer jamón crudo. Pero no, es cocido. De la primera a la última feta".

CMRR

12

La Herradura, con la suerte en el aire

La policía local custodia el complejo habitacional con el que el municipio quiere reemplazar al barrio La Herradura.
FOTO: © Daniel Bilotta

En Daniela Pallarols la precocidad es un signo vital. Madre soltera a los 19 años, dirige desde los 22 un estudio jurídico en colaboración con una profesional mientras espera obtener su título de abogada este año en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y quedar habilitada a tramitar su propia matrícula profesional. A los 21 ya se había convertido en la defensora de vecinos en el barrio La Herradura, de Villa Fiorito. Sobre esa franja de tierra de casi una hectárea y media ocupada por ciento diez familias está pendiente un proceso de expropiación iniciado en 2011 por el Municipio de Lomas de Zamora.

Pallarols es nieta de José Luis y sobrina nieta de Juan Carlos, dos artistas de la orfebrería reconocidos por la obra a la que generalmente se asocia ese apellido: el bastón de mando presidencial. Una herencia de su madre, de la que prefiere preservar el nombre por razones de seguridad. Walter Omar González Lynch es el de su padre, cuya historia repite con orgullo. Segunda generación de una familia iniciada con la relación entre una cacique indígena en Santiago del Estero y un inmigrante irlandés afincado en esa provincia.

González Lynch fue un militante peronista. Vivió en la calle antes de ocupar una modesta vivienda en Ingeniero Budge, una localidad separada de Villa Fiorito por el Camino Negro. Su condición de inquieto autodidacta y su capacidad de establecer vínculos le hicieron vencer cualquier tipo de prejuicio relacionado con las escalas sociales. Se graduó de licenciado en Enfermería y, gracias a la filantropía de amigos con holgada posición económica, cumplió el sueño de conocer Europa y de perfeccionar su formación académica en París.

Murió a los 49 años, después de haber sido secretario del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora bajo la prolongada presidencia de la dirigente peronista Ana Tranfo. Un cargo que convirtió en púlpito para establecer una tensa dialéctica con la dirigencia del PJ local. Ese rico y complejo árbol genealógico contribuyó a forjar la personalidad fuerte

y el análisis agudo de esta joven y futura letrada.

En 2022 prometió encadenarse con los vecinos de La Herradura a las viviendas que el municipio quería derribar para montar en su lugar un nuevo complejo habitacional, una obra para la que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Todo es fiscal

La Herradura comenzó a formarse en 1995, cuando Manuel Pérez Reyes puso en venta los primeros lotes de lo que también se denomina "el macizo" por la forma irregular del suelo, que recuerda a los escarpados en las montañas. Apodado *Rulo* por los vecinos, Pérez Reyes había recibido ese predio en compensación por otro que le expropió el Estado. Un antecedente que abona la audaz hipótesis de Pallarols sobre el origen de la periferia que rodea al centro urbano: "En Lomas de Zamora todo es fiscal".

Algunas de las familias asentadas formalizaron con Reyes Pérez un boleto de compra y venta, pero no lo inscribieron en el Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense. Sin ese trámite, el documento pierde valor legal a los diez años. Sin embargo, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) les cobra el impuesto inmobiliario.

El nombre que recibió, "La Herradura", se lo debe al anillo que recorre la avenida Larrazábal alrededor de esos catorce mil metros cuadrados de formación a los que envuelve casi por completo. El de La Lonja obedece a la extensión de su superficie casi sin interrupciones en su interior. Es decir, con una escasa o casi nula urbanización. Literalmente, el barrio no tiene calles.

Hay otros cuyo recuerdo se pierden en la memoria de sus habitantes. Fueron recursos a los que apeló el municipio para presentar como nuevo un viejo proyecto: la urbanización de ese barrio. Lo que implicaría la demolición de las viviendas para construir un complejo habitacional. Pero también por la necesidad de distinguirlo de Campo Unamuno, la denominación genérica que recibía toda esa zona por la ubicación aledaña a la vieja traza del arroyo homónimo, uno de los afluentes del río Matanza-Riachuelo.

Esa intención del municipio marcó la histórica relación conflictiva que entabló con sus vecinos, como casi en todo Villa Fiorito, la gran mayoría de origen paraguayo. Esas tensiones comenzaron en 2005. El municipio les informó ese año que el proyecto consistía en urbanizar el barrio con la apertura de dos calles como parte de las obras de ampliación de la avenida Larrazábal. Lo que implicaba afectar el frente de los terrenos donde se ubicaban las viviendas.

El proyecto nunca se concretó, pese al anuncio oficial que delegados del municipio habían efectuado a los vecinos. La misma vía utilizada cuatro años después, en 2009, para confirmar que ese proyecto quedaba cancelado. Con esa novedad, la mayoría de los habitantes de La Herradura resolvió avanzar en la consolidación de sus propiedades añadiéndoles nuevas dependencias.

Esas viviendas tienen un rasgo característico, pero a la vez poco uniforme: responden a las necesidades funcionales de un modelo familiar que rompe con la concepción tradicional nuclear. Resulta bastante común que en un mismo lote haya dos viviendas. O, también, que varias estén concentradas en una sola construcción, adecuada al grupo que la ocupa. Por lo general, numeroso y con lazos sanguíneos entre al menos dos generaciones: padres e hijos, con sus parejas, que habitan bajo un mismo techo pero en dependencias autónomas. Es decir, son casas que tienen varias habitaciones, baños y cocinas, que se extienden en una superficie significativa: entre ciento cincuenta y doscientos metros cuadrados.

En 2011 los vecinos accedieron a ceder parte del frente de su propiedad al municipio para llevar adelante la obra de ampliación de la avenida Carlos Pellegrini, aunque las autoridades habrían incumplido su parte del acuerdo, que consistía en la provisión de materiales para refacciones. No hubo registros legales de ese convenio hasta la intervención de la Defensoría General del Pueblo de la Nación, once años después, cuando ese organismo comenzó a ejercer oficialmente la defensa de los habitantes de La Herradura, conmovidos por la amenaza de una expropiación y su relocalización en un complejo habitacional de la que supieron a través de voceros. Como en otras experiencias, quienes desempeñaron ese rol con el barrio lo hicieron con acciones intimidatorias.

Sin lugar para el diálogo

Justamente son esas acciones las que se les atribuyen a la intendenta interina Marina Lesci y a Pablo Portell, subsecretario de Políticas Sociales. Pero también al jefe del bloque de concejales del Frente de Todos, Gastón Lasalle, con un currículum singular. A su pasado como barra brava del Club Atlético Banfield se añade su paso como secretario del gobierno municipal y como director nacional de Gestión de Asistencia Urgente en el Ministerio de Desarrollo Social. Cargo al que renunció en medio del escándalo por la compra con sobreprecios de fideos, arroz y aceite a una semana de iniciada la cuarentena de 2020.

Lasalle era parte del equipo de Gonzalo Calvo, secretario de Articulación de Políticas Sociales de esa cartera, y el responsable de la licitación para adquirir esos alimentos mientras el gobierno imponía una política de precios máximos a comercios minoristas en la primera y más dura etapa del aislamiento obligatorio, dispuesto en el intento de evitar la propagación del virus COVID-19.

Calvo ya había sido secretario de Seguridad en el Municipio de Almirante Brown con el intendente Mariano Cascallares. En las versiones que circularon tras su renuncia, su llegada y la de Lasalle a Desarrollo Social fue parte del acuerdo del ministro Daniel Arroyo con Cascallares y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, para equilibrar fuerzas con Emilio Pérsico, su virtual segundo.

Junto a Fernando *el Chino* Navarro, Pérsico lidera el Movimiento Evita, que integra, con la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Somos, el lote de organizaciones sociales afines al presidente Alberto Fernández. El Polo Obrero y Libres del Sur son las corrientes más importantes de la unidad piquetera enfrentada al gobierno. Las organizaciones oficialistas mantienen desde 2009 un larvado enfrentamiento con los intendentes peronistas del conurbano por la administración de los planes sociales, que el Ministerio de Desarrollo Social destina a paliar la pobreza estructural.

El expresidente Néstor Kirchner decidió privilegiar el rol de las agrupaciones piqueteras como intermediarios de esa política social ante el Estado después de la derrota electoral que sufrió ese año, la

única en su historia, que atribuyó a la supuesta traición de esos jefes comunales.

El curioso criterio de asignar espacios institucionales proporcionales a sectores enfrentados entre sí terminó por recibir la denominación de "loteo", tal vez por el concepto implícito de parcelación del poder que primó en ese tipo de reparto. Pero que explica también lo que quizás sea el rasgo más saliente de la gestión de Fernández: la procrastinación, el término utilizado por el periodista Carlos Pagni para describir una inédita capacidad de aplazar decisiones. O de adoptarlas en contra de un mejor juicio.

Amedrentamientos como los de Lesci, Portell y Lasalle redujeron las posibilidades de diálogo con la gente del barrio, irritada con esas acciones, que incluyeron interrupciones sorpresivas y durante semanas del servicio que presta en la zona Edesur y al que están abonados como clientes oficiales. Lo mismo que a AySA. Todos estos antecedentes les permiten acreditar un domicilio legal y, con él, su condición de propietarios en un litigio judicial.

Mariachis en Parque Leloir

Los vecinos recibieron esas hostilidades casi como una provocación. La mayoría de ellas aparecen detalladas cronológicamente en la página que La Herradura tiene en Facebook (www.facebook.com). Para un grupo étnico entrópico como el guaraní, virtualmente impermeable a otras influencias sobre sus costumbres marcadas por una cultura paternalista, la defensa de los supuestos más débiles es un deber indelegable del jefe de familia. En este caso, casi invariablemente, un hombre.

Resulta difícil imaginar que este dato sea desconocido por esos funcionarios o quienes les ordenaron enviar ese tipo de mensajes. Aunque fue reconocida como ciudad a mediados de la década de 1990, Villa Fiorito existe desde los años cincuenta. En mayo de 2022, los vecinos pidieron la intervención de la Defensoría General de la Nación luego de que varios fueran intimados compulsivamente al desalojo como parte del trámite de expropiación que radicó el municipio en el Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez.

Rodríguez es venerado por dirigentes políticos, sindicales y empresarios bonaerenses y nacionales. Es famoso por reunir una vez al mes en su quinta de Parque Leloir, Ituzaingó, a varios de ellos con funcionarios del Poder Judicial para compartir largos almuerzos matizados por números musicales. Un aspecto en el que se destacan los grupos de mariachis, los predilectos del juez.

El magistrado ya produjo un fallo a favor del Municipio de Lomas de Zamora en un caso controvertido. Dictaminó que pertenecían a esa jurisdicción las tierras sobre las que estaba emplazado el Mercado Central en el partido de La Matanza. Una porción de ellas fue ocupada por el barrio de la Ribera Sur. El reconocimiento a Lomas de Zamora le permitió al municipio litigar contra los habitantes de ese barrio, a los que intentó desalojar sin éxito.

En versiones difíciles de constatar, Rodríguez habría apelado a un método poco convencional para resolver a favor de la presentación realizada por el intendente Martín Insaurralde. Se habría constituido oficialmente en la zona en conflicto con dos testigos que dieron por confirmado que las tierras pertenecían a Lomas de Zamora y no a La Matanza. Al menos uno de ellos era en ese momento efectivo de la policía bonaerense.

Cuando el Estado es omitido

El Juzgado Federal N°2 interviene en la mayoría de las causas que involucran directa o indirectamente a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), una agencia estatal creada en 2006 para sanearla pero que cobró relevancia a partir del 2008 con el fallo Mendoza de la Corte Suprema, que ordenó a la nación, la provincia y la ciudad mejorar las condiciones del aire, el agua y el suelo en los sesenta y cuatro kilómetros de esa cuenca.

En la presentación efectuada ante Rodríguez, la defensora Romina Tuliano Conde hizo constar que el municipio incumplía con algunos preceptos básicos para este tipo de procedimientos estipulados por el Acumar en el Protocolo para el Abordaje de Procesos de Relocalización y Reurbanización de Villas y Asentamientos Precarios. Ni tampoco con los estándares internacionales del derecho a una vivienda digna.

La falta de garantías al derecho de una información completa, veraz, adecuada, oportuna y accesible y la participación en los procesos de relocalización y reurbanización de las personas afectadas mediante la conformación de mesas de trabajo conjuntas entre las partes, es la principal omisión que detectó la Defensoría General. Pero ese organismo observó también la firma compulsiva de actas que promueve el municipio por las que los vecinos se comprometen a aceptar el desalojo como una condición para que se les garantice una nueva vivienda en el futuro complejo habitacional en construcción.

Entre otras irregularidades, esos documentos “obligan a desocupar el terreno” sin garantías de una solución habitacional transitoria, ni destino cierto, plazos, modalidad de ejecución ni financiamiento, “poniendo en riesgo de situación de calle a las familias firmantes”, señala el escrito presentado por ese organismo, que subraya el reclamo efectuado al Acumar y al municipio por la Justicia Federal: apegarse al protocolo vigente y abstenerse de realizar actos que puedan significar la renuncia a derechos sin que exista una asesoría letrada previa.

Pero tal vez el dato más llamativo sea la omisión de la Defensoría por parte del municipio, es decir, del propio Estado. En el mismo documento consta que nunca fue convocado a constituir las mesas de trabajo que, para el protocolo del Acumar, tienen carácter obligatorio. Una irregularidad por la que ya se había reclamado en las mesas constituidas en Campo Unamuno para resolver este conflicto, un paso considerado esencial para dar respuesta individual a cada caso particular.

Un área codiciada

De las ciento diez familias, hay cuarenta y dos que resisten el traslado y otras cuarenta que estarían dispuestas a cumplirlo si se satisficiera la demanda que comparten con el primer grupo: viviendas mucho más amplias que las del modelo tipo dúplex con solo dos habitaciones y dos baños. Sobre ese punto, la Defensoría hizo notar que el municipio no había presentado en el expediente judicial información detallada sobre el proyecto habitacional que prevé ejecutar ni de las acciones y gestiones llevadas adelante en La Herradura.

El 28 de junio de 2022, el municipio envió al presidente del Acumar, Martín Sabatella, y a la Defensoría un informe con el que intentó responder a estos cuestionamientos. El hermetismo imperante sobre todo este asunto es uno de los obstáculos para confirmar, o rectificar, si consiguió hacerlo. Allí el municipio encuadró su proyecto en el marco de la construcción de viviendas llevadas adelante por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la nación.

Pero también reveló, por primera vez, la reunión a la que había convocado a los vecinos de La Herradura en diciembre de 2021 y a la que habrían asistido representantes de unas treinta familias. Según el censo efectuado por el municipio y adjuntado al informe, para las autoridades serían ciento cincuenta las que vivían en el barrio.

De acuerdo con sus propias estadísticas, apenas una delegación de la quinta parte de los interesados habría estado en ese encuentro, cuya referencia más saliente fue “la imposibilidad de diálogo”, atribuida a “la superposición de voces, y un clima desordenado y desprolijo que no contribuyo a la seriedad que se pretendía”.

El informe del municipio tiene quince páginas. De ellas, solo cinco aluden al proyecto de urbanización y aparece resumida en una lo atinente al vínculo entre los funcionarios y los vecinos. El resto corresponde a gráficos e ilustraciones fotográficas. El documento está firmado por el secretario de Medio Ambiente, Emiliano Baloira, que se desempeña en ese cargo desde 2019. Durante el segundo mandato de Daniel Scioli (2011-2015), Baloira ocupó distintas posiciones en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Primero fue director de Seguridad Vial, luego subsecretario de Seguridad y Justicia y, finalmente, subsecretario de Coordinación General en la Jefatura de Gabinete. Gracias a su relación con Scioli, Insaurralde accedió en 2015 a incorporarlo a la lista de concejales del Frente para la Victoria de Lomas de Zamora. Pese a no pertenecer en aquel momento al círculo de confianza del intendente, Baloira logró recorrer en estos años una escala ascendente en ese espacio. La tarea realizada como concejal por cuatro años le valió en 2019 su designación como titular de Medio Ambiente. Un área codiciada por tener bajo su control todo lo relacionado al espacio público. Especialmente, el vínculo con el Acumar y las obras de saneamiento que financia en la cuenca

Matanza-Riachuelo. Entre ellas, las vinculadas a la relocalización de barrios ubicados en las orillas de ese río.

Los intereses de los vecinos de La Herradura en la causa están representados por la Defensoría General, a quien el juzgado debe remitir las actuaciones vinculadas a la causa. En apariencias, las últimas se habrían registrado en el mes de octubre de 2022. Para acceder al expediente deberían contar con un abogado matriculado en la Justicia Federal.

Pallarols no reúne esos requisitos, pese la confianza depositada en ella por los vecinos, que enfrentan otra limitación: lo oneroso que les resulta sostener con sus recursos a un profesional fogueado en litigar en el Fuero Correccional y Criminal.

La confianza en los defensores oficiales está minada por la sospecha de las presiones a las que pueden ser sometidos desde el Estado. Esa práctica es frecuente en departamentos judiciales del conurbano. El de Lomas de Zamora es uno de ellos. Las tierras de La Herradura están inscriptas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Y, desde ese punto de vista, las familias contarían con una protección legal para no ser forzadas a abandonar sus viviendas

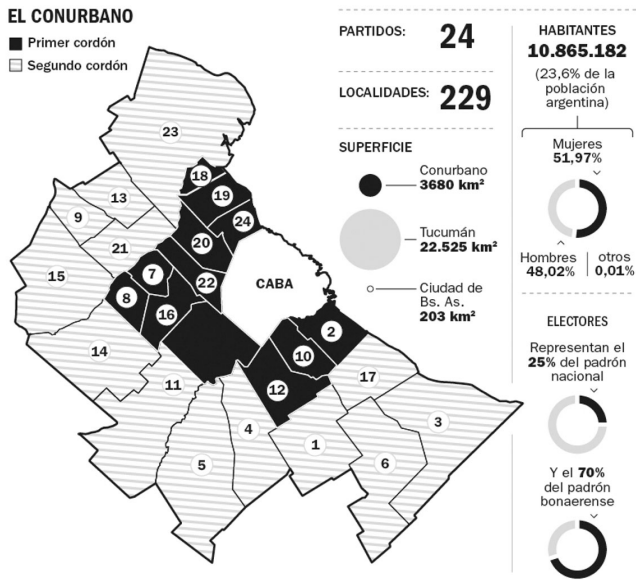
Por la Ley Nacional 27.453, sancionada en octubre de 2018, se declaró de interés público el régimen de integración sociourbana de los barrios incluidos en el ReNaBaP, donde queda suspendido por cuatro años cualquier tipo de desalojo. Luego de ese plazo, cada ocupante debe revalidar su pertenencia a ese listado en las ANSES.

Nadie ha vuelto a hablar de expropiación. El municipio comenzó la construcción del complejo habitacional en los terrenos libres del predio. Se especula que este año volverá a recibir otra cuota del crédito del BID a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para incrementar el ritmo de esos trabajos. Hasta que su situación judicial no se resuelva, La Herradura estará librado a su suerte.

DB

INFOGRAFÍAS

Radiografía de un territorio feroz



1 Almirante Brown. **2** Avellaneda. **3** Berazategui. **4** Esteban Echeverría. **5** Ezeiza. **6** Florencio Varela. **7** Hurlingham. **8** Ituzaingó. **9** José C. Paz. **10** Lanús. **11** La Matanza. **12** Lomas de Zamora. **13** Malvinas Argentinas. **14** Merlo. **15** Moreno. **16** Morón. **17** Quilmes. **18** San Fernando. **19** San Isidro. **20** General San Martín. **21** San Miguel. **22** Tres de Febrero. **23** Tigre. **24** Vicente López.

POBREZA

45%
Pobreza en GBA

39,2%
Pobreza total país

20,3%
Pobreza en CABA

INDIGENCIA

(Personas cuyos ingresos no les permiten cubrir el costo de una canasta alimentaria)

GBA **9,8%**

TOTAL PAÍS **8,1%**

CABA **5,9%**

DATOS SEGÚN RANGO ETARIO

1.500.000 personas viven en la pobreza extrema
(No pueden satisfacer las necesidades básicas)

50%
De los niños y adolescentes menores de 18 son pobres

10%
Adultos mayores (65 años y más) tienen las tasas más bajas de pobreza

COMPARACIÓN DEL CONURBANO CON CAPITAL FEDERAL

El ingreso per cápita es casi la mitad que en CABA

El ingreso promedio de quienes tienen trabajo es un 37,1% menor que en CABA

HOGARES SIN AGUA CORRIENTE

GBA **21,6%**

CABA **0,6%**

DESEMPLEO

GBA **37%**

CABA **12,9%**

ASALARIADOS NO REGISTRADOS

GBA **36,4%**

CABA **22,6%**

Fuente: Indec y Observatorio de la Deuda Social (UCA)

POBLACIÓN

Censo 2022

Partidos	Habitantes	Crecimiento poblacional respecto del censo 2010
1 La Matanza	1.837.774	3,49%
2 Lomas de Zamora	694.330	12,66%
3 Quilmes	636.026	9,11%
4 Almirante Brown	585.852	5,96%
5 Merlo	580.806	9,90%
6 Moreno	574.374	**26,93%**
7 Florencio Varela	497.818	16,86%
8 Lanús	462.051	0,61%
9 General San Martín	450.335	8,73%
10 Tigre	447.785	**18,97%**
11 Avellaneda	370.939	8,25%
12 Tres de Febrero	366.377	7,74%
13 Berazategui	360.582	11,21%
14 Malvinas Argentinas	351.788	9,12%
15 Esteban Echeverría	339.030	12,65%
16 Morón	334.178	4,07%
17 San Miguel	326.215	**18,11%**
18 José C. Paz	323.918	**21,78%**
19 San Isidro	298.777	2,01%
20 Vicente López	283.510	5,23%
21 Ezeiza	203.283	**24,16%**
22 Hurlingham	187.122	3,24%
23 Ituzaingó	179.788	7,13%
24 San Fernando	172.524	5,69%

↑ Obtuvo un crecimiento mayor

En La Matanza, su índice se explica porque en el Censo 2010 su población, de 1.775.816 habitantes, habría sido sobreestimada en unas 500.000 personas. Según una denuncia de Juntos por el Cambio, se aumentó el número para recibir más fondos de coparticipación federal. Otros sostienen que la cifra errónea es la del Censo 2001. El caso está siendo investigado en la Justicia.

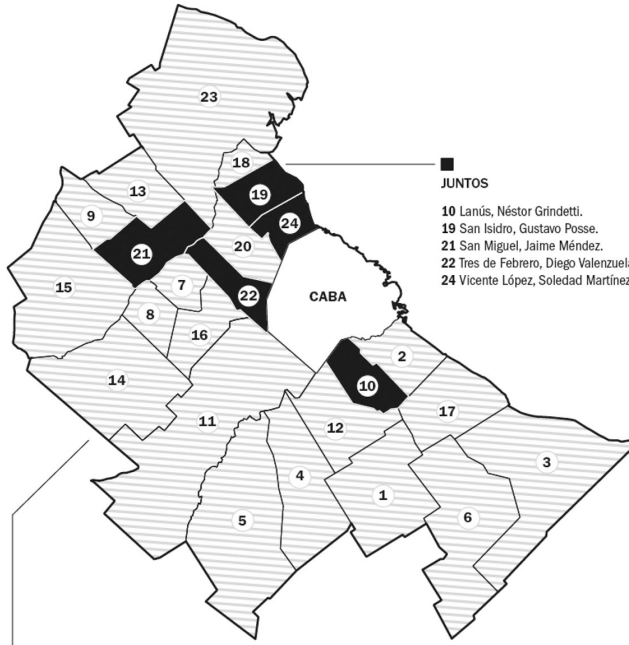
Tigre sumó 71.404 habitantes en 12 años, por el boom de los countries y barrios cerrados.

Los distritos que más crecieron son los del sur, que son los más pobres.

Fuente: Indec

EL MAPA POLÍTICO

De los 24 partidos del Gran Buenos Aires, 19 están en manos del Frente de Todos, y 5, de Juntos (cuatro en el conurbano norte y solo uno, Lanús, en el sur).



JUNTOS

10 Lanús, Néstor Grindetti.
19 San Isidro, Gustavo Posse.
21 San Miguel, Jaime Méndez.
22 Tres de Febrero, Diego Valenzuela.
24 Vicente López, Soledad Martínez.

FRENTE DE TODOS

1 Almirante Brown, Juan Fabiani. **2** Avellaneda, Jorge Ferraresi. **3** Berazategui, Juan Patricio Mussi. **4** Esteban Echeverría, Fernando Gray. **5** Ezeiza, Gastón Granados. **6** Florencio Varela, Andrés Watson. **7** Hurlingham, Juan Zabaleta. **8** Ituzaingó, Alberto Descalzo. **9** José C. Paz, Mario Ishii. **11** La Matanza, Fernando Espinoza. **12** Lomas de Zamora, Marina Lesci. **13** Malvinas Argentinas, Noelia Correa. **14** Merlo, Karina Menéndez. **15** Moreno, Mariel Fernández. **16** Morón, Lucas Ghi. **17** Quilmes, Mayra Mendoza. **18** San Fernando, Juan Andreotti. **20** San Martín, Fernando Moreira. **23** Tigre, Julio Zamora.

AGRADECIMIENTOS

A Miguel Saredi, guía en mis primeras incursiones por La Matanza, partido que conoce al derecho y al revés.

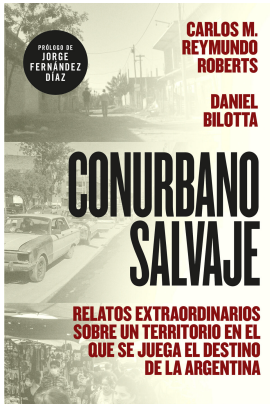
A Fernando Gutiérrez, editor jefe de Fotografía de *La Nación*, por su generosidad y su tiempo, y por el material del archivo del diario.

A Edwin Sánchez, reconocido colega de la comunidad boliviana en el país, por compartir sus conocimientos, referencias y contactos, y por facilitarnos fotos del archivo del canal Bolivia al Aire TV.

A Mario Rodríguez Traverso, el primero en hablarme del impresionante programa social del cura villero Nicolás Angelotti, el padre Tano, descripto en el capítulo 9.

Al diario *La Nación* y a su director, Fernán Saguier, que hace años me pidió una nota sobre el conurbano, a la que después le siguieron muchas más. Ese fue el germen de estas páginas.

CMRR



Conurbano salvaje es una obra imprescindible para comprender cabalmente este país en caída libre. Porque el área que Carlos M. Reymundo Roberts y Daniel Bilotta eligen para su investigación y su vasta pintura condensa y explica, como ninguna otra, las razones de la decadencia nacional.

Se narran aquí, con anécdotas puntuales y frialdad profesional, los personajes oscuros y luminosos que pueblan ese complejo entramado. Bilotta, baqueano natural de este "continente perdido", y Reymundo Roberts, cronista minucioso y asombrado, se unen para trazar la topografía de un fenómeno que causa espanto y preocupación. Retratan una tierra hostil formada por diversas comunidades, reino de la desigualdad y donde campean la improvisación, el caciquismo y la desmesura. Los hallazgos de estos rastreadores provocan sorpresa porque los medios de comunicación nacionales han dado históricamente la espalda a ese otro país, región crucial en cualquier elección y bastión del justicialismo.

Esta narración logra, con brillante austeridad, mantenernos atrapados

en nuestras sillas de lectores perplejos, mientras por sus páginas se deslizan las palabras “patotas”, “hambre”, “negociados”, pero también “abnegación”, “solidaridad”, “esperanza”.

Este libro quedará en nuestra memoria por mucho tiempo.

Del prólogo de Jorge Fernández Díaz

“Este *Conurbano salvaje*, contado a través de historias políticas, económicas, sociales y personales, es vivencial, testimonial, no académico. No es un ensayo, tampoco estrictamente una investigación, sí un fresco o una sucesión de imágenes que conforman, creemos, un retrato fiel”.

Carlos M. Reymundo Roberts

“Cuando Carlos me propuso ser parte de esta experiencia literaria y periodística, recordé historias de las que había sabido por algunas fuentes y que llamaron mi atención por sus fuertes contrastes. Los aparentemente compelidos por la ley a ser justos no lo eran tanto, y los que, desde un prejuicio bastante extendido, podrían ser vistos como los que eligen estar al margen de la ley no desean otra cosa que ser reconocidos dentro de ese orden”.

Daniel Bilotta

CARLOS M. REYMUNDO ROBERTS

(Buenos Aires, 1956) es egresado de la Escuela de Periodismo del Círculo de la Prensa, cursó estudios superiores en la Universidad de Navarra (Pamplona, España) y trabaja en el diario *La Nación* desde hace más de treinta y cinco años. Fue corresponsal en América latina y cubrió las guerras del Golfo Pérsico (1991) y de Ecuador y Perú (1995). Es miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo. Se ha desempeñado en radio y televisión, y recibió numerosas distinciones en el país y en el exterior. Es fundador y codirector de la Maestría en Periodismo de *La Nación* y la Universidad Di Tella. En la Universidad Austral fue profesor de la Facultad de Comunicación e integró su Consejo de Dirección. Está casado y tiene cinco hijos y seis nietos. Este es su séptimo libro.

© Alejandra López

DANIEL BILOTTA

(1961, Adrogué, partido de Almirante Brown, en la zona sur del conurbano) es licenciado en Periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde ejerce la docencia en el área de Comunicación Social desde 1996. Inició su actividad en Radio Belgrano en 1984. Fue columnista de los diarios *Clarín* y *Perfil*, tarea que actualmente desempeña en *La Nación* y en el ciclo "Odisea Argentina", que conduce todos los lunes Carlos Pagni en LN+. Se especializa en temas vinculados con la provincia de Buenos Aires, particularmente el conurbano, que sigue siendo su lugar de residencia.

© Enrique Villegas

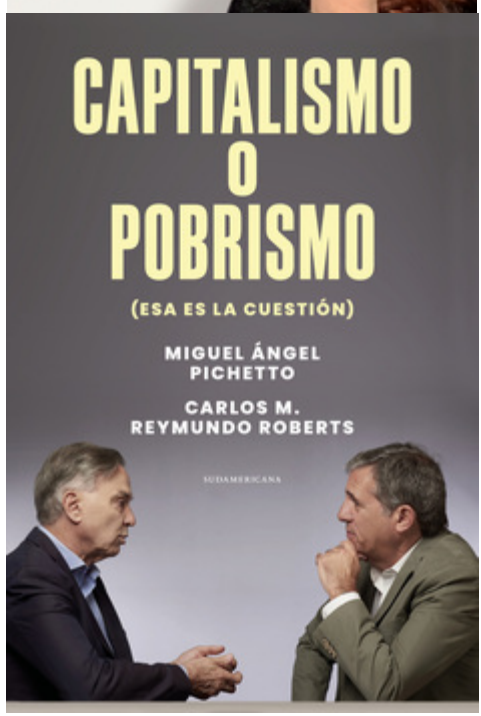
DEL VAMOS POR TODO AL VÁMONOS TODOS

TRIBULACIONES, LAMENTOS Y OCASO DE UN KIRCHNERISTA (IMAGINARIO O NO)

CARLOS M. REYMUNDO ROBERTS

SUDAMERICANA

Carlos M. Reymundo Roberts
AGUANTEN LOS K
UNA MIRADA MORDAZ SOBRE LA INCREÍBLE ARGENTINA DE ESTOS TIEMPOS
Prólogo de Carlos Pagni
"Las columnas de Carlos R. Roberts son lo más divertido y agudo que ha surgido últimamente en el periodismo latinoamericano." Andrés Oppenheimer
"Hay gente que se lo toma en serio, como un importante funcionario del Gobierno..." Mirtha Legrand
"Roberts puede reírse y hacernos reír porque es uno de los tipos más serios del periodismo argentino." José Claudio Escribano
"Las agudas ironías de Roberts le duelen más al poder que los análisis clásicos de los editorialistas." Luis Majul
"Periodista hecho y derecho, Roberts ha encontrado una forma distinta de contarnos las cosas más dramáticas o las más solemnes con una sonrisa pícara." Joaquín Morales Solá
SUDAMERICANA


CAPITALISMO O POBRISMO
(ESA ES LA CUESTIÓN)
MIGUEL ÁNGEL PICHETTO
CARLOS M. REYMUNDO ROBERTS
SUDAMERICANA

Otros títulos del autor en penguinlibros.com

Reymundo Roberts, Carlos M.
Conurbano salvaje / Carlos M. Reymundo Roberts ; Daniel Bilotta. - 1ª ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Sudamericana, 2023.
(Investigación Periodística)
Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-950-07-6934-1

1. Investigación Periodística. I. Bilotta, Daniel. II. Título.
CDD 070.44

Infografías: Giselle Ferro
Diseño de tapa: Penguin Random House Grupo Editorial

Edición en formato digital: julio de 2023
© 2023, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A.
Humberto I 555, Buenos Aires
penguinlibros.com

Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del *copyright*.
El *copyright* estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del *copyright* al no reproducir, escanear ni

distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores.

ISBN 978-950-07-6934-1

Conversión a formato digital: Estudio eBook

Facebook: penguinlibrosar
Twitter: penguinlibrosar
Instagram: penguinlibrosar

Índice

Conurbano salvaje
Dedicatorias
Prólogo, por Jorge Fernández Díaz
Aquella tierra prometida, por Carlos M. Reymundo Roberts
Un territorio en disputa, por Daniel Bilotta
1. La República de los Falcon
    “Mafiosos” y “patoteros”
    Cuba, Haití, África…
    “Funcionan”
    El inventor
2. Gustavo Menéndez, un intendente de película
    Un casting de estrellas
    Talleres de periodismo
    El debut
    Locaciones originales
    Amigo del alma
    Mochila verde
    Dólares
    Jugador profesional
3. Ciudad Celina, la pequeña Bolivia
    Villa próspera
    Barrios en guerra
    Liniers, desplazado
    Vienen, pero también se van
4. Una esperanza a la vera del río

Una madeja de circuitos
Un viaje en pallet
Con el tablero de dibujo a cuestas
Golpizas
Tendiendo redes
Crónica de una relación conflictiva
Veredas, cestos y el número en el frente
Una carta que es leyenda
5. La escuela de Tigre invadida por sus vecinos
No solo fútbol
Contrastes
Zona de riesgo
6. La vecindad del cartón
La calle donde vivió Diego
Hola Susana
El futuro de la democracia
Huellas verdes
Cuatro décadas de peronismo
7. Feria del robado, pasión de multitudes
Delito organizado
Fenómeno social y cultural
O robado o trucho
8. Barrio de la Ribera, tierra de nadie
No man’s land
Vecinos vigilados
Ladrillos huecos en una tarde calurosa
Los negocios del barrio
Helicópteros y camiones hidrantes
Un cambio de llaves
9. Milagro en el infierno
Estudiar bajo las balas
Conectar con la vida
Mafiosos al ataque
10. Escuela N° 43: de Fiorito a Estambul
Cómo deshacerse de un muerto
Belleza y felicidad

Escuelita beia
Historia, conflictos y deseos
El hecho prodigioso
11. Narcos en patrulleros
Muertos, sí o no
En el origen, Felipe Solá
Perejiles, no peces gordos
12. La Herradura, con la suerte en el aire
Todo es fiscal
Sin lugar para el diálogo
Mariachis en Parque Leloir
Cuando el Estado es omitido
Un área codiciada
Infografías. Radiografía de un territorio feroz
Agradecimientos
Sobre este libro
Sobre los autores
Otros títulos del autor
Créditos